

privatización

Hokowe Pimove, jefe del clan Batammao de la tribu Kosuo (tribu du casuar), en las margenes del Ifo Aworra en Papua Nueva Guinea

número 107

naturaleza en venta

impactos de la privatización
del agua y de la biodiversidad



Amigos de
la Tierra

Consultado en:

<http://www.biodiversidadla.org/content/download/13826/57191/version/1/file/privatization.pdf>

Fecha de consulta: 24/04/2013.



Amigos de la Tierra



© Irma Popovic, zelena akcija

amigos de la tierra Amigos de la Tierra Internacional (ATI) es la red ambientalista de organizaciones de base más grande del mundo, reúne a 71 grupos miembros nacionales en 70 países. Con aproximadamente un millón de miembros y partidarios en todo el mundo, hacemos campañas sobre los actuales problemas ambientales y sociales más urgentes. Cuestionamos el actual modelo de globalización económica liderada por las grandes empresas y promovemos soluciones que apuntan a la creación de sociedades ambientalmente sustentables y socialmente justas

amigos de la tierra internacional tiene grupos trabajando en los siguientes países: Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Camerún, Canadá, Chile, Chipre, Colombia, Corea, Costa Rica, Croacia, Curazao, Dinamarca, Escocia, El Salvador, Eslovaquia, España, Estonia, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Georgia, Ghana, Granada, Guatemala, Haití, Países bajos, Honduras, Hungría, Indonesia, Reino Unido, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia (ex Republica de Yugoslavia), Malasia, Malí, Malta, Mauricio, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Palestina, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Filipinas, Polonia, Sudáfrica, Sierra Leona, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Suazilandia, Togo, Túnez, Ucrania, Uruguay.

(Para obtener más información y tomar contacto con los grupos de ATI dirigirse a la Secretaria ATI o visite nuestra página de internet)

Publicado en enero de 2005 en Amsterdam, Países bajos. ISBN: 90-0914913-9.

link conecta ...me!

tarifas de suscripción [4 ediciones anuales, envío incluido]
individuos y ongs us\$30
tercer mundo / asociaciones locales us\$15
empresas us\$90

Por información sobre formas de pago por favor escribir al secretariado internacional de ATI

Infórmate e involucrate en las campañas ecologistas y sociales más urgentes en todo el mundo suscribiéndote a la serie de publicaciones link de Amigos de la Tierra Internacional (ATI/foei/AdT!)

amigos de la tierra
secretariado internacional

P.O. Box 19199
 1000 GD Amsterdam
 Países Bajos
 Tél: 31 20 622 1369
 Fax: 31 20 639 2181
 E-mail: info@foei.org
 Site web: www.foei.org

equipo editorial Jens Christiansen (Movementsmedia), Ronnie Hall (Amigos de la Tierra Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte), Helen Chandler, Marijke Torfs, Marta Zogbi, Simone Lovera (Amigos de la Tierra Internacional), Dena Leibman

diseño Tania Dunster, KÍ Design, ki_designnl@yahoo.co.uk

impreso por PrimaveraQuint, www.primaveraquint.nl

nuestro agradecimiento a Alexandra Wandel, Alipio Valdez, Andrei Laletin, Anil Naidoo, Anthony Amis, Cam Walker, Damien Ase, Debra Broughton, Duncan McLaren, Elías Díaz Peña, Farah Sofa, Godwin Uyi Ojo, Irene Vélez, Isaac Rojas, Jamal Juma, Janneke Bruil, Javier Baltodano, Jean Marie M. Ferraris, José Rodríguez, Karin Nansen, Larry Lohmann, Longgena Ginting, Meenakshi Raman, Mensah Todzro, Miguel Lovera, Niki Johnson, Noble Wadzah, Ricardo Carrere, Ricardo Navarro, Roman Havlicek, Roque Pedace, Stephen Williamson, Tatiana Roa, Thuli Brilliance Makama, Toni Vidan, Tony Juniper, Julian Manduca, Ojars Balcers, Rusudan Simonidze.

naturaleza en venta

impactos de la privatización del agua y de la biodiversidad



resumen ejecutivo	4
prefacio naturaleza en venta	6
primera parte apoyo público para el control privado	7
introducción	8
papua nueva guinea la privatización “invisible” de las tierras de los clanes	9
croacia el impacto indirecto de la liberalización del comercio en la UE	11
bolivia privatización y descontento social	12
ghana las ifis y la privatización del agua	13
indonesia la nueva ley de recursos hídricos y la privatización en indonesia	14
segunda parte la privatización del agua	17
introducción	18
paraguay buscan privatizar el acuífero guaraní	18
el agua: un derecho humano	20
canadá privatización, contaminación y nacionalización.	20
europa central y del este privatización del agua	21
Impidiendo el acceso al agua a través de la financiación pública	22
uruguayos se unen en contra de la venta del agua	22
filipinas cólera y tarifas de agua más altas	24
escocia agua escocesa, una compañía privada bajo control público	25
colombia privatizan acueductos comunitarios	25
el salvador el agua un problema social	26
nigeria niegan acceso al agua potable	26
malasia buena administración pública	27
palestina ocupación y privatización de los acuíferos	27
australia flujos positivos impuestos por el gobierno	28
tercera parte la venta de bosques y parques a empresas forestales y de turismo	29
¿una tragedia de los bienes comunes?	30
australia privatización de bosques y plantaciones en victoria	30
georgia protegiendo los bosques	32
indonesia privatización de parques nacionales	33
malasia la privatización del parque nacional gunung mulu	34
swazilandia privatización de la biodiversidad y violaciones de los derechos humanos	36
estados unidos la disneyficación de los parques	38
malta campo de golf derrotado	38
cuarta parte los nuevos mercados 1: la venta de carbono	39
el mercado de carbono : una vez más naturaleza en venta	40
costa rica mercados de servicios ambientales y la privatización de los recursos	40
brasil plantar – privatizando el clima y la tierra para el lucro	44
sumideros de carbono, ¿destrucción del clima?	46
paraguay ¿la vida como comercio? mbaracayú: tierra de los aché	46
quinta parte los nuevos mercados 2: la venta de nuestros genes y nuestro conocimiento	49
introducción	50
inglaterra bioprospección	50
el grupo de países megadiversos	51
el nuevo colón: craig venter conquista los genes de américa latina	51
algunas patentes vigentes	52
UPOV- Los derechos de los obtentores de variedades vegetales	53
biopiratería y sus impactos sobre la diversidad biológica y cultural	54
canadá la corte falla a favor de las patentes sobre la vida	54
costa rica biopiratería y el caso de INBio	55
los países en desarrollo en defensa de sus recursos genéticos	56
sexta parte conclusión: los pobres y la privatización	57
la exclusión de los pobres	58
togo el agua potable	58
colombia la monetarización de la vida: el caso de los mercados verdes	59
¿las metas de desarrollo del milenio están en venta?	62
rusia – siberia comunismo y capitalismo:	
diferentes caminos hacia el mismo lugar	62
letonia planta de pulpa de papel finlandesa amenaza el bosque	63

“También pienso —y esto puede sonar a herejía— que todo este asunto de la biodiversidad está comenzando a sonar más a economía que a biología. A medida que la ciencia comienza a penetrar en la estructura genética, las selvas ecuatoriales ingresan en el proceso de valoración monetaria. La ciencia sirve a la economía, y ambas sirven al capital. Hoy, las comunidades de los bosques son expulsadas y sus territorios son expropiados junto con su conocimiento tradicional, al que se le da un valor de mercado. Todas estas mentiras están en la médula de los nuevos conflictos ambientales; esto también explica la guerra que financian los EE.UU. y sus aliados en la región andina.

El manejo comunitario de los bosques húmedos no puede ser considerado una verdadera alternativa si no cuestiona los cimientos del modelo económico dominante. Como dice el proverbio “cambiamos todo sin cambiar nada”, algunas personas cambian el discurso oficial, pero su meta sigue siendo el lucro. No se puede permitir que el maquillaje verde absorba las nuevas iniciativas.

Las relaciones económicas sustentables por las que abogan fuertemente las instituciones multilaterales no son suficientes para crear sociedades sustentables. Necesitamos una economía que asegure el bienestar de toda la sociedad, que garantice no solo el ingreso monetario, sino también la soberanía alimentaria y la equidad, la conservación ecológica y la soberanía cultural. Las sociedades deben reconquistar el control de las estructuras políticas y sociales para poder asegurar el control de las profundas transformaciones que se necesitan.”

Hildebrando Velez Galeano, CENSAT/Amigos de la Tierra Colombia, “Communities do it Best”, Link Magazine, 2002.
www.foei.org/publications

resumen ejecutivo



En los países en vía de desarrollo 1.200 millones de personas viven bajo la línea de pobreza, ganando menos de 1 dólar por día. De los 4 mil millones de casos de diarrea anuales, 2,2 millones de personas mueren innecesariamente. Las enfermedades prevenibles relacionadas con el agua matan 5 millones de personas cada año, 4 millones de éstas son niños. Hoy, se estima que 1,2 mil millones de personas carecen de acceso a un suministro de agua segura y 2,4 miles de millones no tienen acceso a un saneamiento adecuado.



© Frédéric Castell, foie France
© scheltema/geenpeace



Estas cifras son perturbadoras, pero no son irreversibles. Existe la tecnología y también existen los recursos para hacer frente a esta crisis. Solo una fracción del billón de dólares que gastan cada año los gobiernos en el presupuesto militar permitiría superar sin problemas las Metas de Desarrollo del Milenio referidas a agua potable y saneamiento. Las inversiones en agua, a diferencia de las bélicas, significarían un ahorro de 125 mil millones de dólares en gastos médicos directos y costos asociados a la baja productividad económica provocada por enfermedades prevenibles relacionadas con el agua.

Lamentablemente la solución elegida por los gobiernos no apunta a aumentar la inversión pública. Por el contrario, quienes formulan las políticas a nivel internacional, presionados fuertemente por el lobby del sector privado, están dedicados a atraer mayores inversiones favoreciendo la gestión privada como salida para la crisis. Las personas más pobres del mundo, especialmente las mujeres y los niños, necesitan desesperadamente de agua potable y servicios sanitarios. Las experiencias documentadas en esta publicación muestran que los pobres pueden perder el acceso a estos servicios indispensables cuando

se deja entrar en el “negocio” del agua a empresas transnacionales con fines lucrativos. De la misma manera, se verifica cada vez más la exclusión de pueblos y comunidades locales de los bosques y las áreas biológicamente ricas que tradicionalmente han habitado y utilizado. Estas tierras están siendo progresivamente entregadas a las empresas dedicadas al turismo y a la administración de parques privados. Asimismo están siendo reservadas para un nuevo tipo de empresas que instalan “parques de carbono” – una manera distinta y lucrativa de compensar las emisiones de dióxido de carbono de los ricos del Norte, adictos a los combustibles fósiles.

Amigos de la Tierra Internacional está resistiendo activamente la apropiación de las riquezas de la naturaleza por parte de las corporaciones. Luchamos para que se respeten los derechos de la gente, al agua, a la tierra, a las semillas y al conocimiento. Las 34 historias nacionales reunidas en esta publicación documentan los impactos sociales y ambientales negativos de la privatización del agua y de la biodiversidad, pero también muestran cómo nuestros grupos miembros están activamente resistiendo esta privatización en sus países.



© Irina Popovic, Zelena Akcija

prefacio – naturaleza en venta

Meenakshi Raman, Presidenta, Amigos de la Tierra Internacional



© Consalvo Colombia

Desde las épocas de la colonia, los recursos naturales de los países en desarrollo son exportados para alimentar las necesidades de consumo cada vez mayores de los pueblos de los países ricos e industrializados. Para asegurar la permanencia de este sistema, los gobiernos del norte terminaron su régimen colonial imponiendo a sus antiguas colonias un sistema económico que les asegurara la continuidad en el flujo de los recursos naturales, prácticamente sin ningún costo.

Hoy, con el aceleramiento de la globalización, se está cementando este patrón de consumo insustentable e inequitativo. Los países empobrecidos, bajo la presión de otras naciones más ricas y las instituciones multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), se ven cada vez más encerrados dentro del mundo del comercio internacional y los sistemas financieros y de inversiones que apuntan a asegurar la transferencia a bajo costo de los recursos naturales. Estos países dependen de las corporaciones transnacionales para importar los componentes y la tecnología nueva y cara, insumos que se pagan exportando más recursos naturales y sacrificando aún más la biodiversidad.

Debido a su tamaño y a que a menudo son apoyadas por subsidios estatales, las corporaciones transnacionales dominan el mundo del comercio internacional de recursos naturales. Para las pequeñas y medianas empresas del sur competir con estas poderosas recién llegadas es imposible, quedándoles poca esperanza en el futuro. El sistema resulta en ganancias para algunos y enormes pérdidas y destrucción para muchos. En el tercer mundo los pueblos pierden sus bosques, sus peces y sus recursos minerales a gran velocidad. Adultos y niños pierden el acceso a una forma de vida sustentable. Hasta las tierras y recursos laborales de los pobres parecen estar a disposición de los ricos. Todo simplemente para sostener los patrones de consumo de los ricos que no son sustentables y que deben cambiar urgentemente.

La perspectiva para el futuro según ha sido diseñada por quienes formulan las políticas económicas de la Organización Mundial del Comercio, el Banco

Mundial y las otras instituciones financieras dominadas por los países del Norte y los intereses corporativos, no es nada halagüeña. Si las cosas siguen como hasta ahora, los países más pobres del mundo continuarán siendo los proveedores de la mayoría de los recursos naturales y de los recursos humanos de la actividad industrial —y recibirán muy poco como recompensa. Efectivamente, en la medida en que haya un exceso de oferta en los mercados globales, los productos básicos serán cada vez más baratos— muy bueno para los países ricos importadores, pero malo para los países pobres exportadores. En conclusión, los ricos seguirán haciéndose cada vez más ricos, los pobres se hundirán aún más en la pobreza y todos nos veremos enfrentados a los efectos de la destrucción del medio ambiente generada por la sobre explotación. No hay ninguna lógica en este sistema, ni tampoco justicia.

Amigos de la Tierra Internacional (ATI) cuestiona este sistema y propone alternativas ambientalmente sustentables y socialmente justas para todos. Nos oponemos a los gobiernos que insisten en perseguir las mismas viejas estrategias económicas e inexorablemente siguen recompensando a las compañías transnacionales que hasta el momento se han beneficiado de la destrucción ambiental y económica. Luchamos contra los acuerdos de comercio e inversión que siguen siendo pensados para aumentar el acceso de las empresas a los recursos biológicos—incluso en aquellas regiones que deberían ser consideradas las fronteras últimas de la biodiversidad. También instamos a los gobiernos del Norte a no utilizar la “guerra contra el terrorismo” como excusa para acceder y controlar los recursos de los países ricos en petróleo.

Como alternativa a esta “Naturaleza en Venta”, ATI brinda su apoyo a ideas, propuestas y sistemas que apunten a asegurar la justicia ambiental para todos. Promovemos el manejo y el control comunitario de la biodiversidad, el desarrollo de los derechos colectivos de las comunidades locales y los Pueblos Indígenas (estén o no esos derechos reconocidos por los Estados) y buscamos el reconocimiento y el repago de la deuda ecológica que se ha acumulado en función de la biopiratería y otras prácticas predatorias.

primera parte | apoyo público para el control privado



1 [papua nueva guinea] la privatización "invisible" de las tierras de los clanes

El área de Vailala FMA/TRP en Papua Nueva Guinea está bajo amenaza de destrucción permanente si no se detiene la tendencia actual de las prácticas de tala. Gestionada por Frontier Holdings Limited, una subsidiaria del gigante maderero malayo Rimbuna Hinjau, el área cubre unas 900.000 hectáreas de bosque y es una de las operaciones madereras más grandes del país. La tala tiene lugar a gran velocidad, cosechándose día y noche árboles de madera dura y otras especies indígenas. Desde que comenzó la cosecha en 1995, se han informado varios casos de daño ambiental, contaminación de ríos, violación de los Derechos Humanos, tala excesiva, falta de cumplimiento de los acuerdos y violación de las leyes laborales y los contratos de trabajo.

la privatización de las tierras de los clanes

El bosque pertenece a sus propietarios originales, los clanes locales. En sus inicios, los permisos de tala eran negociados entre el departamento gubernamental a cargo, la Autoridad Forestal, los directores de las compañías de propietarios de tierras y Frontier Holdings. Se suponía que las compañías de



primera parte apoyo público para el control privado

introducción

En los países en vía de desarrollo, 1.200 millones de personas viven bajo la línea de pobreza, ganando menos de 1 dólar por día. Otros 1.300 millones ganan entre 1 y 2 dólares por día. 842 millones de personas padecen hambre. La contaminación y el agotamiento de los recursos naturales ocurren a mayor velocidad que su regeneración, y el clima está cambiando en forma peligrosa. A los pueblos indígenas les han robado sus culturas y sus tierras. Los pueblos pierden sus formas de sustento y las mujeres son cada vez más marginadas. Algo funciona muy mal en el sistema económico global.

Algo funciona muy mal en las instituciones financieras internacionales, que se supone existen para garantizar el alivio de la pobreza y el desarrollo sustentable. Se suponía que con su ayuda, los países más pobres iban a escapar de la espiral descendente, donde crecen permanentemente la pobreza y los servicios de la deuda externa que nunca se reduce. Sin embargo, gracias a la "ayuda" que reciben, siguen pagando los servicios de una deuda no sustentable a expensas de los pueblos y el medio ambiente.

El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han diseñado un conjunto de doctrinas, conocidas como el Consenso de Washington, consistentes en reformas con orientación de mercado que apuntan a captar nuevamente capitales privados para los mercados de países

propietarios representarían a los clanes y actuarían como fiduciarias de los derechos para la explotación del bosque mediante la tala. Sin embargo, los integrantes de los clanes no saben casi nada del papel que ellas cumplen, ni de la naturaleza de sus operaciones. Estas empresas no han prestado ningún servicio ni han aportado medios económicos para mejorar las condiciones socio económicas en que vive la población.

En 2002, caducaron los permisos, sin embargo, sin el consentimiento de la mayoría del clan, Frontier Holdings en colaboración con los directores de las compañías de propietarios obtuvieron una prórroga para seguir operando en el área por un período de hasta diez años más. Se dejó a los clanes fuera de la discusión y la compañía asumió el control total sobre la tierra. En resumen, la tierra ha sido privatizada, y los propietarios sienten que ya no tienen derechos sobre las tierras y han perdido la fe en el gobierno, la Autoridad Forestal y la compañía.

promesas incumplidas y beneficios ausentes

La tala que tiene lugar en sus tierras ha reportado muy pocos beneficios para la población local. El beneficio monetario en la

forma del pago del canon ha sido magro, y los beneficios económicos que supuestamente traería el “efecto de goteo” de la inversión de la compañía no se materializó. No se han construido obras apropiadas de infraestructura económica, como carreteras o muelles, que podrían ayudar a la población local a transportar y vender sus productos. Tampoco se cumplieron las promesas de nuevas escuelas, enfermerías, y otras instalaciones para atender las necesidades de la comunidad. Mientras tanto, los servicios más cercanos de la compañía solo está destinados a sus empleados y no atienden a los poblados cercanos, cuyos habitantes tienen que remar río arriba muchas horas para tener acceso a tratamiento médico.

degradación ambiental, violación de los derechos humanos y muerte

El Código de Práctica Maderera es violado permanentemente, se talan los árboles en forma ilegal y se cosechan árboles de bajo tamaño sin la debida aprobación. Los oficiales forestales no vigilan las actividades de la compañía ni cumplen con su deber constitucional de proteger el bosque. Mientras tanto se destruyen muchas cuencas

de agua y la principal del río Vailala sufre un creciente proceso de sedimentación. Los pobladores locales de los poblados a orillas del río están cada vez más preocupados por el aumento constante de la erosión del suelo, en particular durante las fuertes lluvias que lavan enormes cantidades de suelo.

Han habido otras violaciones a la ley ambiental, como los derrames de diesel y químicos que contaminaron todo el sistema de ríos corriente abajo. Incluso en octubre de 2002, la compañía vertió DDT en una ensenada río arriba del poblado Heava en el curso principal del Vailala. A consecuencia de la contaminación murió toda la vida acuática de la ensenada. Los informes de Hepea Aid revelaron que la contaminación química fue responsable de la muerte de nueve niños en octubre de 2002, todos ellos muertos en una sola semana. También se ha informado de varias muertes de niños en ese mismo período río abajo.

Crece la preocupación entre los pobladores que ven como se destruyen sus sitios de caza, sus plantas medicinales y los árboles con los que construyen sus casas y sus artefactos tradicionales, mientras se contamina el agua potable y los animales y los peces están empezando a escasear.

perjudicados por la carga de una deuda no sustentable. Originalmente, el paquete de políticas fue diseñado para América Latina después de la crisis de la deuda de la década del '80, y condicionaba los préstamos de las IFIs (Instituciones Financieras Internacionales) para el servicio de la deuda al cumplimiento de 10 requerimientos de políticas económicas, que incluían la disciplina fiscal, la desregulación, la privatización y la liberalización del comercio. Los bancos regionales como el Banco Asiático de Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo rápidamente adoptaron la misma receta. En 1995, la Organización Mundial del Comercio se sumó al conjunto de instituciones establecidas para promover la liberalización del comercio y el “libre” mercado.

A lo largo de las últimas dos décadas, estas instituciones han impuesto el mismo conjunto de políticas de reforma económica o “fundamentalismo de mercado” en los países en desarrollo en todo el mundo. Lamentablemente, las personas que viven con hambre aún están esperando que estas medidas produzcan las oportunidades económicas que las rescaten de la pobreza. En general, las reformas económicas neo-liberales no han conducido al crecimiento económico; menos aún al desarrollo sustentable. La liberalización del comercio no ha beneficiado a los países más pobres, por el contrario, ha servido a los intereses de los países industrializados.

Los grandes ganadores de la agenda económica neo-liberal son las compañías transnacionales. Gracias al proceso actual de globalización económica, la actividad de las corporaciones ha crecido a escala global. Los sectores industriales, incluyendo las industrias de servicios, se han reubicado, trasladándose del Norte al Sur. Los mercados de los países en desarrollo se han vuelto más interesantes para las compañías multinacionales. Pero principalmente, la combinación de las políticas de liberalización con las presiones para desarrollar procesos de privatización ha permitido a las compañías privadas tener un acceso creciente a los recursos naturales que antes estaban bajo control público.

En 2002, en una conferencia de las Naciones Unidas sobre Financiación para el Desarrollo en Monterrey, México, el Consejo Mundial de Negocios para el Desarrollo Sostenible (World Business Council on Sustainable Development) logró asegurar una mayor consolidación de la agenda de la inversión privada. Se suponía que la conferencia de las Naciones Unidas sería un ámbito de amplia discusión pública sobre la forma para lograr una mayor coherencia entre las políticas de comercio y las políticas financieras. Se esperaba que el debate abordara las inconsistencias de tales políticas y consiguientemente abriera las puertas a un cambio, dejando atrás las políticas de desarrollo ambientalmente insustentables. Esto no sucedió. En su lugar, los gobiernos delegaron sus responsabilidades y acordaron dejar el proceso

violación de los derechos humanos

La relación entre la empresa y los propietarios de la tierra se ha ido deteriorando con el correr de los años desde que comenzó la operación. La compañía ha privado a la población de su derecho a ser escuchada y sus operaciones se han realizado sin tener en cuenta la opinión de la mayoría de los pobladores locales. También ha ignorado completamente los tabúes y las leyes locales, ha destruido los antiguos sitios tradicionales y los lugares ceremoniales sagrados en nombre del desarrollo.

Cuando los propietarios de la tierra cuestionan ciertas actividades de la compañía, se llama a la Fuerza de choque de la policía para reprimir a los pobladores locales, y muchos se han quejado de malos tratos tanto por parte de la compañía maderera como de las compañías de propietarios. Actualmente, los propietarios sienten que ya no tienen derechos constitucionales y que no son más propietarios de las tierras.

inestabilidad social

Como consecuencia de esta situación, han aumentado significativamente los problemas sociales en las comunidades locales. Muchos jóvenes se han visto empujados a vidas cada vez más violentas, con índices crecientes de delitos, drogadicción y prostitución. Los problemas de salud también han aumentado y enfermedades que antes eran raras se han vuelto comunes.

Es más, los niveles de conflictividad son cada vez mayores, tanto en relación a la empresa como lo demuestra un incidente en que dos empleados de la compañía fueron baleados durante la ocupación de uno de los campamentos base, así como la existencia de enfrentamientos entre distintos clanes, lo que ha generado un clima hostil dentro de las comunidades locales.

¿y el futuro?

Lo que quiere ahora la población de Vailala es que se detenga la actividad maderera, y que los empresarios madereros cumplan con lo que exige el código maderero, así como con las leyes ambientales y la legislación sobre derechos humanos. Si la compañía se rehúsa a hacerlo, se le pedirá a otro inversor que opere en el área. De lo contrario, se discutirán nuevas formas de atraer inversiones que no dañen el medio ambiente.

En Papua Nueva Guinea, el Centre for Environmental Law and Community Rights (Centro para la Legislación Ambiental y los Derechos de la Comunidad), grupo miembro de Amigos de la Tierra Internacional, está activo en el área de Vailala asesorando y dando apoyo legal a los clanes locales e investigando la actividad maderera.

por más información:

Centre for Environmental Law and Community Rights: www.celcor.org.pg



Fly River, Papua New Guinea.

primera parte apoyo público para el control privado

de “coherencia entre comercio-finanzas” en manos de las de la OMC, el Banco Mundial y el FMI, los adalides del neoliberalismo.

Esta publicación documenta 34 casos que describen lo que ocurre cuando se impone esta agenda en la que el sector público deja la explotación y la gestión de los recursos naturales al sector privado. La publicación se centra en la privatización del agua y la biodiversidad. Al presentar algunas experiencias locales, intentamos aumentar la conciencia pública de los impactos de la privatización sobre los recursos que todos nosotros, nuestros hijos y las futuras generaciones necesitamos para poder sobrevivir.

la imposición de la privatización

La privatización se define como el proceso de transferencia del (o parte del) manejo o la operación de un bien o servicio público a una empresa privada. La privatización es inherente a la liberalización, que es un proceso de reducción del control del estado, y el crecimiento del rol de las fuerzas del mercado. La ruptura de los monopolios estatales implica que las empresas privadas tengan la posibilidad de competir, lo que supuestamente llevaría a un abaratamiento de los productos y una mejora de los servicios.

A lo largo de la década pasada, los gobiernos han privatizado los bienes de propiedad estatal. Lo hicieron por voluntad propia o fueron forzados por los programas de ajuste estructural. Estos programas fueron impuestos como condiciones de los préstamos otorgados por las instituciones financieras internacionales (IFIs). Comprenden un conjunto de estrictas condicionalidades de política económica, incluyendo la liberalización del comercio y las exigencias de privatización. Estos préstamos de política son apoyados con financiamiento público.

El objetivo de los requisitos de condicionalidad es incrementar la producción para exportación y atraer a la inversión extranjera directa. Para muchos de los países menos desarrollados, las condiciones de préstamo van más lejos, prescribiendo que la estrategia a corto plazo más efectiva para lograr un flujo positivo de efectivo es la venta de los bienes de las propiedades del estado, como el agua y los recursos forestales, a corporaciones de propiedad extranjera. Para facilitar este proceso, las IFIs imponen reformas que mejoran el clima de inversión. Las mismas incluyen leyes nacionales ambientales y sociales menos estrictas, el ofrecimiento de exenciones impositivas, desarrollos de infraestructura, préstamos a bajo interés u otros incentivos, a la espera de que las empresas vengán a operar en sus países. Como resultado, la inversión privada en el sector de recursos naturales ha aumentado en

2 [Croacia] el impacto indirecto de la liberalización del comercio en la UE

Durante la década pasada Croacia sufrió cambios drásticos en su sistema de gobierno. El proceso de privatización ha generado grandes desafíos para el gobierno croata, que ha debido adaptarse a la pérdida de las medidas y mecanismos de control a los que estaba acostumbrado. Como resultado de estos cambios, el gobierno depende fuertemente de los grupos ambientalistas para mantener un cierto nivel de control público sobre el medio ambiente y la protección ambiental.

En su afán para convertirse en miembro de la UE, Croacia se ha visto obligada a cambiar su propia legislación en concordancia con la de la UE, pero los resultados no son siempre positivos. Por ejemplo, se exige al país que abra importantes sectores de su economía a la privatización, incluido el sector del agua. Esto plantea riesgos graves de que se produzca una privatización incontrolada del agua y otros recursos naturales. Las ONGs croatas han cuestionado la adquisición

en secreto de una planta de tratamiento de aguas servidas de la ciudad de Zagreb por parte de la compañía alemana RWE. Argumentan que el propio gobierno croata debería hacerse cargo de su responsabilidad de suministrar servicios de agua y saneamiento asequibles a la población, y proteger el ambiente.

En el viejo sistema comunista, el Estado tenía plena responsabilidad por el manejo de los recursos naturales. Si bien esto lamentablemente no siempre producía los mejores resultados, al menos existía la presunción básica de que el manejo de los recursos naturales debía beneficiar a la sociedad en su conjunto. Ahora que el proceso de privatización de los recursos avanza cada vez más, el manejo de los recursos se realiza sólo en función del lucro de las grandes empresas.

La explotación de grava cerca de Zagreb, por ejemplo, tiene un muy fuerte impacto negativo sobre el ambiente y las comunidades locales y la compensación por parte de las compañías por el uso de estas fuentes de recursos minerales públicos todavía no se está haciendo efectiva.

El plan para ampliar el transporte de petróleo a través del mar Adriático representa otro ejemplo de las amenazas que trae consigo el proceso de desregulación y privatización. La costa adriática es un patrimonio natural

importante del pueblo croata – el sector turístico de esa región solamente, genera unos 2.000 millones de dólares al año. Sin embargo, está planteada una importante expansión de una terminal petrolera en el norte del mar Adriático que permitirá que el petróleo ruso fluya a través de los ductos hasta Croacia. Los riesgos son dobles: el agua de lastre de los petroleros será una causa importante de degradación ambiental, mientras que un derrame de petróleo significaría un desastre para el medio ambiente, la biodiversidad, la economía, y el pueblo croata en su conjunto.

por más información:

Green Action/Friends of the Earth Croatia:
www.zelena-akcija.hr

“¿Qué hay de los costos? ¿Qué hay de la contaminación causada por la explotación ambiental? Demasiado a menudo vemos que estos costos son socializados, mientras que los beneficios se privatizan...”

Ricardo Navarro, ex presidente de ATI, en la Conferencia Naturaleza en Venta, 2004



© Irma Popović, Zelena Akcija

muchos países pobres, mientras que la capacidad de los gobiernos nacionales de reglamentar estas inversiones y proteger el acceso de sus ciudadanos a los recursos naturales se ha reducido en gran medida. La doctrina neoliberal socava profundamente los procesos democráticos en todo el mundo.

No existe ninguna evidencia empírica que pruebe que la inversión extranjera directa conduce al desarrollo sustentable y equitativo. El informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, “Making Global Trade Work for People” (Haciendo que el comercio mundial funcione para los pueblos) (2003), concluye que no hay “ninguna correlación clara entre el volumen de inversión extranjera directa y el éxito del desarrollo”. Una proporción cada vez mayor de las inversiones extranjeras no representa inversión nueva y constructiva en las economías reales de los países en desarrollo. Por el contrario, se trata de la adquisición de entidades públicas y privadas existentes, incluyendo a aquellas que suministran servicios públicos.

A través de los años, las IFIs adoptaron políticas y disposiciones que supuestamente asegurarían instancias de consulta efectivas con las personas que serían afectadas por sus programas y proyectos. Sin embargo, mientras que la privatización de las reservas naturales tiene un efecto directo sobre las comunidades locales, éstas rara vez son

consultadas en estos procesos. Los procesos de privatización han sido impulsados en general sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades locales.

privatización y organización mundial del comercio

La Organización Mundial del Comercio (OMC) está en el corazón de esta iniciativa de las corporaciones en pos de la mercantilización y la privatización de la biodiversidad. Sus reglas tienen impactos efectivos y potenciales para una gran y desconcertante variedad de recursos naturales, incluyendo la vida en sí misma. Los principales culpables: las negociaciones de la OMC sobre los derechos de propiedad intelectual, servicios, “acceso a los mercados no agrícolas” y las reglas ambientales globales.

La OMC persigue un doble objetivo: proporcionar reglas que gobiernen el comercio internacional, y abrir los mercados. El bienestar y los deseos de las corporaciones transnacionales, en tanto principales agentes de comercio internacional, encabezan la lista de preocupaciones de los negociadores. Otros problemas, como la conservación de la biodiversidad y los derechos de los pueblos a los recursos, son de un interés considerablemente menor y los negociadores comerciales pueden ignorarlos o incluso negarlos en caso de que surjan conflictos con las reglas del comercio.

3 [bolivia] privatización y descontento social

Luego de años de presión del Banco Mundial, el gobierno de Bolivia inició un proceso de privatización de los servicios de agua y saneamiento en la ciudad de Cochabamba en 1999. Una concesión por cuarenta años firmada ese año traspasó el control de los servicios de agua y saneamiento de Cochabamba a Aguas del Tunari, una subsidiaria de Bechtel Corporation con sede en California. La oferta de la compañía se basó en una “recuperación total de los cotos” y a partir del 1º de enero de 2000 las tarifas de agua locales se incrementaron en un promedio de entre 35% y 51% (los incrementos de tarifas exactos todavía se discuten acaloradamente). Más de medio millón de personas fueron afectadas, y los precios eran tan altos que los sectores más pobres se encontraron pagando más de un quinto de su ingreso mensual sólo por el agua. La única alternativa para pagar la tarifa era recortar otras necesidades básicas.

No es de sorprender que la población de Cochabamba respondiera con protestas masivas, que fueron reprimidas por las fuerzas militares y resultaron en la muerte de al menos una persona y 175 personas heridas. Sin embargo, como consecuencia directa de este levantamiento, el gobierno boliviano rescindió finalmente el contrato

con Bechtel. La corporación está intentando actualmente hacer uso del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (ICSID) del Banco Mundial para demandar al pueblo boliviano por US\$ 25 millones por “daños y ganancias perdidas”. Esta acción solo es posible porque Bechtel transfirió su subsidiaria boliviana a Países Bajos para aprovecharse de un tratado bilateral de inversiones que existe entre ambos países.

En Cochabamba, todavía hay intentos para reintroducir la privatización del agua por la puerta de atrás, creando sociedades en comandita por acciones o “sociedades anónimas” a través de las municipalidades. En respuesta, las organizaciones sociales están haciendo campaña a favor de un marco legal que asegure que la propiedad del agua siga siendo pública, y llamando a incorporar la experiencia de las comunidades indígenas y campesinas en la gestión tradicional del agua.

por más información:
Amigos de la Tierra Bolivia CERDET:
pilcomayo@cosett.com.bo,
cerdetcoord@cosett.com.bo



protestas contra la
privatización del
agua en Bolivia.

primera parte apoyo público para el control privado

privatización del agua y los árboles

El Acuerdo General sobre Comercio de Servicios de la OMC (AGCS), que se estableciera durante la última ronda de negociaciones que culminó en 1994, está siendo ampliado y revisado, incluyendo por primera vez en la OMC muchos sectores de servicios ambientalmente sensibles.

Entre los sectores que abarcan las negociaciones están los servicios de energía y agua, el turismo, el transporte, el manejo del territorio y la eliminación de desechos. El impacto sobre la biodiversidad probablemente será significativo. Por ejemplo, podrían prohibirse nuevas restricciones gubernamentales al número y tamaño de los oleoductos, al desarrollo de instalaciones turísticas o la captación del agua de ríos y lagos. El AGCS también podría forzar la privatización de servicios públicos, incluyendo el suministro de agua y el manejo de los parques y del paisaje, siempre que ya exista competencia entre el sector privado y el público.

Tal vez la característica más importante del AGCS sea que es prácticamente irreversible. Sin lugar a dudas, ha sido diseñado específicamente para trabar a los países en el marco de los acuerdos, creando un clima comercial “estable” y “predecible” para los inversores extranjeros. Sin embargo, lo negativo es que los errores no pueden rectificarse en fechas posteriores. Además, no es posible introducir

nuevas medidas ambientales o de bienestar social. Si las negociaciones del AGCS ya hubieran finalizado, por ejemplo, los ciudadanos bolivianos seguramente deberían vivir con un suministro de agua privatizado a pesar de haber derrotado esa propuesta. [Ver más arriba estudio de caso]

Uno de los elementos distintivos del AGCS es una clarísima división entre el Norte y el Sur. Los países ricos del Norte buscan acceso comercial a un amplio espectro de los sectores de servicios del Sur. La UE, por ejemplo, ha solicitado la apertura de los servicios de agua y los relacionados a la biodiversidad en más de 70 países, la mayoría países en desarrollo. A pesar de que los mercados deben abrirse en forma igualitaria a todos los miembros de OMC, Europa sería igualmente el beneficiario principal en caso de concretarse cualquier negocio, ya que los mismos podrían ser enormemente rentables para compañías de agua europeas como RWE, Suez, Thames Water y Veolia Environnement (antes Vivendi Environnement).

Los documentos secretos de negociación del AGCS de la Unión Europea demuestran la amplitud y profundidad de la apertura de mercados que buscan los países industrializados. La solicitud de la UE a Malasia, por ejemplo, incluye la apertura del mercado y la adjudicación de tratamiento nacional (es decir que las compañías extranjeras reciban un tratamiento al menos igual al de las nacionales) en los sectores de telecomunicaciones, construcción, distribución, servicios ambientales, viajes y turismo, agencias de noticias, transporte y energía.

4 [ghana] las ifis y la privatización del agua

En 2004, el Banco Mundial aprobó un préstamo de U\$S 103 millones para la privatización del sistema de agua potable en las áreas urbanas de Ghana, a pesar de tres años de activa oposición por parte de la sociedad civil. La propuesta del préstamo se presenta públicamente como si la atención de los problemas de los pobres fuera la prioridad. Se argumenta que las empresas estatales que manejan el servicio son ineficientes, y que las empresas privadas llevarían el agua a más gente, de forma más eficiente. Sin embargo, la privatización está dirigida a sistemas de agua de algunas ciudades seleccionadas—donde no viven la mayoría de los pobres. Por otra parte, es probable que la población pobre sea gravemente perjudicada porque las tarifas se fijaran en función del lucro de las empresas. El Documento de Valoración

del Proyecto del Banco Mundial confirma que los precios van a subir, ya que también señala que se deberán pagar las deudas generadas por el préstamo del proyecto.

Al menos cuatro grandes compañías trasnacionales han expresado interés en pujar por el contrato: Biwater, Suez, Vivendi (ahora Veolia) y Saur. Si bien el Banco Mundial ha aprobado el crédito, el gobierno ghanés aún no ha abierto formalmente el proceso de licitación. La Coalición Nacional de Ghana contra la Privatización del Agua ha declarado que la resistencia a la privatización del agua continuará y que el objetivo último está claro: el agua potable es un derecho humano y como tal se debe garantizar su acceso en forma universal.

por más información:
Amigos de la Tierra Ghana:
foe@foeghana.org



privatización de la biodiversidad y el paisaje

La biodiversidad de un país y su paisaje natural son bienes públicos, que deberían ser administrados por el estado para beneficio de su pueblo. La razón principal de preservar la biodiversidad y proteger el paisaje es mantener y preservar las funciones ecológicas esenciales, incluyendo la regulación climática, la preservación de la diversidad genética, la protección de los recursos hídricos, la prevención de inundaciones y la conservación del suelo. Sin duda, la conservación de la diversidad biológica y los ecosistemas es un prerrequisito absoluto para el desarrollo sustentable. El hecho que el AGCS pueda forzar la privatización del manejo de recursos de biodiversidad es, por lo tanto, extremadamente preocupante, ya que aumenta el riesgo de comprometer los objetivos fundamentales de la sustentabilidad en aras de los intereses comerciales.

Como si esto no fuera suficiente, las actuales negociaciones de la OMC sobre el "acceso a mercados no-agrícolas" (Non-Agricultural Market Access - NAMA) también tienen la potencialidad de generar un impacto negativo sobre la biodiversidad. En estas conversaciones se incluye absolutamente cualquier tema que no sea un servicio o un producto agrícola. Los sectores clave que están en la mira para una inmediata liberalización incluyen la pesca y productos de la pesca, gemas y minerales. También las medidas

ambientales diseñadas para proteger la biodiversidad están bajo la lupa en el NAMA de la OMC. Ya han sido agendados para la discusión, por ejemplo, los requerimientos de empaquetado, comercialización y etiquetado para productos madereros y de pesca.

Los estados miembro también han otorgado a la OMC el poder para analizar la relación entre las reglas del comercio y medidas comerciales específicas utilizadas en distintos acuerdos ambientales multilaterales. Los acuerdos en cuestión incluyen dos de importancia crítica para la biodiversidad—la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas y el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad, que regula el comercio de los organismos modificados genéticamente.

Es preocupante que estos mismos gobiernos han ignorado completamente los llamados a llevar este debate a las Naciones Unidas, aún cuando esto podría significar que la OMC pueda definir qué medidas comerciales—si las hubiera—se pueden utilizar en otros acuerdos internacionales, o quizás precisamente por este motivo. En última instancia, la OMC podría incluso tener el poder de asegurarse que los gobiernos nacionales no se pasen de la raya al implementar Acuerdos Ambientales Multilaterales (AAM), limitando la utilización doméstica de medidas comerciales cuyo objetivo sea la protección del medio ambiente y la salud pública.

“El agua debe ser utilizada por quienes sacan el mayor provecho económico de ella”

Banco Asiático de Desarrollo, 2001

programa WATSAL – banco mundial

En 1997, el Banco Mundial concluyó que no podría seguir asistiendo al sector del agua y el riego en Indonesia si no se realizaba una importante reestructura o reforma del sector. Por este motivo, en abril de 1998 luego de la crisis económica, el Banco Mundial ofreció un programa de préstamo al gobierno de Indonesia, el Préstamo para el Ajuste del Sector de Recursos Hídricos (Water Resources Sector Adjustment Loan- WATSAL), para reestructurar el sector.

La oferta fue aceptada y en 1999 se firmó el contrato de préstamo por un monto de US\$ 300 millones, con un plazo de repago de 15 años y un período de gracia de tres años. El desembolso del préstamo tendría lugar en tres etapas, y la última etapa estaría condicionada a la aprobación por parte del gobierno indonesio del proyecto de ley sobre Recursos Hídricos.

la nueva ley de recursos hídricos.

El 19 de febrero de 2004, el Proyecto de Ley de Recursos Hídricos fue aprobado por la Cámara de Representantes de Indonesia, a pesar de que la votación de la ley fue pospuesta varias veces debido a las objeciones de agricultores, consumidores urbanos, organizaciones religiosas y comunitarias, ONGs y académicos. La oposición a la ley se basó en que en algunos de sus artículos ésta abre camino a la privatización y comercialización del agua. El texto de ley no sólo permite el suministro del agua potable a cargo de empresas privadas, sino también la ocupación de los recursos hídricos –tal como las aguas subterráneas y partes de los ríos- por parte de privados, dándoles de esta forma en forma efectiva el control del agua para riego agrícola, la energía y la industria.

En lugar de intentar desarrollar modelos de gestión del agua usando un sistema más integrado que preste atención a la conservación y ofrezca mecanismos de resolución de posibles conflictos de utilización del agua, la ley está dominada por intereses económicos y tiene una fuerte influencia del Banco Mundial, que había determinado esencialmente su sustancia.

ocupación del agua

Una parte crucial de la ley es la estipulación de los Derechos de Agua, que se han convertido en el mecanismo utilizado para la asignación de los recursos hídricos al sector privado y la ocupación de los mismos. A través de este instrumento, la Ley de Recursos Hídricos establece un límite en cuanto a la cantidad y la forma en que puede utilizar el agua una comunidad. Los criterios se establecen para el uso diario de agua, dando prioridad a la utilización comercial, como lo ejemplifica la Declaración del Banco Asiático de Desarrollo: “El agua debe ser utilizada por quienes sacan el mayor provecho económico de ella” (BAD, 2001). La asignación económica y la limitación del uso del agua significa que las comunidades tendrán que obtener permisos y pagar por el agua para actividades no comerciales, que antes habían realizado sin costo alguno.

Adicionalmente, la ley introduce el Derecho de Uso Comercial y el Derecho de Uso Empresarial, lo que efectivamente permite la transferencia del control del agua de las comunidades locales y tradicionales al sector privado, y determina el derecho de cosecha de agua en los recursos hídricos existentes. Esto se debe al establecimiento de un sistema de acceso al agua basado en permisos, desarrollado bajo la ley. Mientras que esta burocracia es un

y los grandes ganadores son...

Los grandes ganadores del remate de los recursos naturales de propiedad pública son las compañías transnacionales. Las compañías de agua, las industrias turísticas, las compañías madereras y las petroleras y mineras se beneficiarán enormemente con la privatización y la mercantilización de los bienes públicos como el agua y la biodiversidad. Los nuevos regímenes internacionales propuestos, resultado del lobby corporativo, tales como la inclusión de las actividades de secuestro de carbono en el Protocolo de Kyoto o el régimen propuesto de distribución de beneficios de los recursos genéticos, están transformando a los recursos naturales, como los bosques y los genes, en bienes corporativos altamente rentables. Debido al lobby de los grupos de presión de las corporaciones en Bruselas, Washington DC y otras capitales, las reglas de liberalización del comercio y la inversión se están ajustando permanentemente a los intereses de las compañías transnacionales, consolidando su expansión global y eliminando los obstáculos que todavía existen. Las corporaciones son los actores dominantes de la economía global, pero dado su enorme tamaño y poder quedan en gran medida por fuera de los mecanismos democráticos de gobernanza mundial. ATI y otras ONGs han documentado la influencia de los grupos de presión, como la Cámara Internacional de Comercio y la Organización de la Industria Biotecnológica en la Secretaría de la OMC y en gobiernos clave,

promoviendo reglas de comercio que protegen y promueven sus intereses. En nuestra publicación “Las empresas mandan, ¿quién paga la cuenta?” (ATI, 2003) documentamos la influencia de poderosas industrias en las reglas de la OMC y los Tratados de las Naciones Unidas, y los impactos de sus acciones sobre las comunidades locales. Los estudios de caso incluyen el de Monsanto y American Farm Bureau presionando al gobierno de los EE.UU. a forzar la entrada de los organismos modificados genéticamente al hostil mercado consumidor europeo a través de la OMC. Otros ejemplos del poder corporativo documentados son los esfuerzos de Exxon Mobil para socavar la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el rol del sector farmacéutico sobre el acuerdo de los TRIPS (aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio), bloqueando la distribución de los medicamentos “genéricos” de bajo precio.

Las corporaciones ganan porque se las considera los proveedores más económicos y eficientes de los “eco-servicios”. Lamentablemente para los pueblos, las corporaciones no tienen como objetivo principal la reducción de la pobreza, el desarrollo sustentable o el suministro de recursos indispensables. No tienen ningún papel oficial en asegurar que los derechos de las personas al agua o a un medio ambiente limpio sean respetados, sino que apuntan a cumplir con los requerimientos de los accionistas de obtener un desempeño económico bueno y la

impedimento para las comunidades con menores capacidades, el sistema favorece al sector privado, que tiene la capacidad de solicitar un permiso formal para ocupar y distribuir el agua. Una consecuencia de esto ha sido la asignación de recursos hídricos al sector privado, que está monopolizando cada vez más la recolección del agua y cobra por su distribución.

la privatización del agua potable y de riego

Aunque la ley no usa explícitamente la palabra “privatización”, permite al sector privado jugar un rol en la gestión del agua, y lo habilita a cobrar tasas por el uso de los servicios de agua. La participación del sector privado en muchas formas y etapas del manejo del agua es una prueba clara de la agenda privatizadora.

La Ley de Recursos Hídricos implica que la actividad agrícola será más costosa no sólo porque los productores agrícolas tendrán que pagar los nuevos costos de la gestión del agua por parte de privados, sino también porque implica el fin de los subsidios del gobierno que han existido hasta ahora. En particular, afectará a los productores de arroz de riego, que es posible que ya no puedan autosustentarse. Esto tendrá consecuencias para la soberanía alimentaria y puede determinar que Indonesia pase a depender de la importación de alimentos.

constitución y violación

La Constitución de Indonesia de 1945 garantiza el acceso igualitario al agua, como derecho humano básico, y es responsabilidad del estado suministrarlo. La privatización y comercialización de la gestión del agua viola este derecho, y la Ley de Recursos Hídricos restringe el rol del estado como regulador. En la práctica, esto significa que el estado no tendrá control sobre el manejo del agua ni asegurará el suministro de agua de buena calidad.

El rol social del estado no puede ser sustituido por el sector privado que tiene como principal objetivo el lucro; y los sectores más vulnerables de la sociedad, los pobres y los enfermos, serán los que estén más expuestos y quienes tengan más dificultades para acceder a agua potable para el consumo.

En julio de 2004, WALHI/Amigos de la Tierra Indonesia junto a la Federación de Asociaciones de Agricultores Indonesios, la Alianza de Pueblos Indígenas y muchas otras instituciones, iniciaron una demanda legal contra la Ley de Recursos Hídricos ante la Corte Constitucional.

por más información:
WALHI / Amigos de la Tierra Indonesia:
www.walhi.or.id/

“Las áreas de producción importantes para el Estado y relacionadas con la vida de las personas deben ser ocupadas por el Estado”.

Constitución de Indonesia (1945)

“La tierra, el agua y cualquier propiedad contenida en ellas debe ser ocupada por el Estado y debe ser usada en forma óptima para el bienestar del pueblo.”

Constitución de Indonesia (1945)



maximización de las ganancias. Sin embargo, las instituciones que sí están obligadas por mandato a reducir la pobreza, como el Banco Mundial, por ejemplo, continúan acudiendo a las corporaciones para que manejen y distribuyan el agua o gestionen los proyectos de secuestro de carbono.

¿por qué ocurren tantas privatizaciones?

Los gobiernos asienten por distintas razones, algunas de carácter ideológico, otras veces por conveniencia propia y en ocasiones por razones prácticas, entre las que se incluye el hecho que los gobiernos enfrentan problemas que tienen que resolver con los impuestos que recaudan. La privatización brinda la ilusión de liberar al gobierno de algunos de los problemas y a menudo, al mismo tiempo, le proporciona alguna suma de dinero. Esta venta de las joyas de la abuela le permite a los gobiernos dar la imagen de que los problemas han sido encarados o por lo menos que se puede culpar a otro al mismo tiempo que los habilita para reducir los impuestos.

Los partidarios de la privatización alegan que las empresas privadas son mucho más eficientes que las empresas estatales, al punto que pueden tomar control de un recurso, resolver todos los problemas que la empresa estatal o el gobierno no han podido afrontar, y encima de todo

sorprendentemente generar ganancias. Las ganancias que generan después gotearán hacia los pobres. Una situación donde todos ganan, dice el verso. Y si esto no convence a los gobiernos siempre se puede recurrir a la táctica de los organismos financieros como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que a menudo sólo otorgan préstamos a un país en desarrollo si el país en cuestión permite la privatización de sus bienes en manos de empresas extranjeras. De otra parte, los países sólo podrán “gozar de los beneficios del libre comercio” que administra la Organización Mundial de Comercio, si consienten entre otras cosas, en aceptar y proteger un abanico de derechos de propiedad intelectual, incluso sobre su propia naturaleza.

¿Pero qué hay de la gente común? ¿se benefician ellos de las privatizaciones? Hay evidentemente perjudicados: los pueblos indígenas a quienes se les impiden vivir en su territorio porque sus tierras son vendidas para ser protegidas como parques, y los nuevos propietarios consideran que los indígenas podrían dañar el parque; las personas que viven con un dólar al día y que tradicionalmente se las arreglaban cultivando su propia comida y disponiendo de agua gratuita, y que ahora tienen que rebuscársela para pagarle a una empresa por el agua privada en sustitución del agua de los ríos contaminada por actividades industriales, o bien agua que no está más disponible porque las fuentes pertenecen a la empresa; los campesinos de la India que han

desarrollado y cultivado arroz basmati durante generaciones, a quienes ahora se les impide conservar semilla de una cosecha para la otra porque estas han sido patentadas por una empresa occidental; los niños que nacerán en un mundo en el que no pueden compartir la naturaleza que los rodea a menos que ganen tanto dinero que les permita comprar o alquilar una tajada de ese tesoro.

¿Y quiénes se benefician? Hay algunos que se benefician: por ejemplo, los accionistas de las empresas en cuestión. Pero aunque se beneficien económicamente, en un sentido más amplio ¿se podrá acaso decir que se benefician si viven en una sociedad en la que la brecha creciente entre los ricos y los pobres es caldo de cultivo de la envidia y el crimen; donde la gente muere de diarrea y cólera porque han dejado de tener acceso al agua potable; donde las empresas se fortalecen y las comunidades y los gobiernos se debilitan; donde el afán de lucro de las empresas sin reglamentaciones justas y rigurosas alienta actividades insustentables con todas sus repercusiones para el ambiente; donde a la vida misma se la pueden apropiarse y patentarla?

En suma ¿debería nuestra naturaleza estar en venta?



© Frédéric Castelli, foto: France

segunda parte | la privatización del agua



© clive shirley/greenpeace

1 [paraguay] buscan privatizar el acuífero guaraní

La Cuenca del Plata, que cubre una vasta extensión, desde Brasil, Bolivia y Paraguay hasta Argentina y Uruguay, es la segunda cuenca hidrográfica más grande de Latinoamérica. Incluye además el Pantanal, el ecosistema de humedales tropicales más grande del mundo. En su totalidad, la Cuenca del Plata representa el 30% del agua dulce disponible en el planeta.



El sistema de agua subterránea del Acuífero Guaraní cubre un área de 1,2 millones de kilómetros cuadrados en América del Sur -70% en Brasil, 19% en Argentina, 6% en Paraguay y 5% en Uruguay- y es capaz de almacenar tanta agua como para satisfacer las necesidades de 360 millones de personas.

Considerando las necesidades de agua actuales – para el consumo humano, la agricultura y la industria – y teniendo en mente las demandas proyectadas, no es nada sorprendente que este inmenso reservorio de agua dulce esté empezando a atraer la atención de numerosas organizaciones, incluida la Organización de Estados Americanos, el Banco Mundial, y varias agencias de cooperación internacional con base nacional.

Tradicionalmente, la distribución y la gestión del agua en la región han constituido un servicio público. Sin embargo, existe un proceso de modificación de la estructura del marco legal, que apunta a permitir el ingreso de empresas privadas de servicio de agua. Además de esta amenaza de privatización, los recursos hídricos en Paraguay están siendo degradados y mal utilizados. Las actividades mineras y el avance del agronegocio, particularmente relacionado con las plantaciones de soja, han causado un incremento en la expropiación de los recursos naturales, la destrucción de la biodiversidad y

introducción

Solamente una pequeña parte del agua del planeta circula como agua dulce. La mayoría está almacenada en los glaciares, quedando apenas el 1% disponible para la supervivencia de todos los seres vivos fuera de los océanos y mares. La distribución mundial de esta pequeña cantidad es muy irregular. La disponibilidad depende del acceso a las cuencas de ríos y lagos para obtener aguas superficiales, y a los acuíferos para acceder a las aguas subterráneas.

la contaminación del agua. Los gobiernos de la región están contribuyendo a esta destrucción, presionando para convertir 2100 millas del sistema regional de los ríos Paraguay y Paraná en una enorme vía fluvial industrial, la llamada Hidrovía. Este canal tiene como propósito fundamental bajar los costos de la soja para la exportación.

Enfrentados a la destrucción de las cuencas, los ríos y los acuíferos, muchos grupos de la sociedad civil en Paraguay están investigando y haciendo campaña sobre las causas subyacentes de estos problemas. Este trabajo incluye el monitoreo de las operaciones, las políticas, las estrategias y los proyectos de las instituciones financieras internacionales (IFIs) que proponen las asociaciones público-privadas como solución. Estas propuestas, en general, son totalmente inadecuadas, producto de un diseño desarrollado por técnicos que trabajan en las oficinas centrales en el Norte, sin un real conocimiento de las necesidades de la población que vive en el área afectada. En particular, son asociaciones que apuntan a generar una mayor concentración de los recursos públicos en manos privadas.

Es importante señalar que las actividades que requieren más agua –y que por tanto amenazan la calidad del acuífero– son a la vez las que más fuertemente promueven las IFIs. La deforestación masiva para hacer lugar a

plantaciones de monocultivo está disminuyendo la capacidad de infiltración de las áreas de recarga del acuífero, en otras palabras, disminuye la capacidad de los suelos de absorber agua. Al mismo tiempo, los productos altamente tóxicos que se utilizan en la producción a gran escala de los cultivos de exportación – plaguicidas, herbicidas y fertilizantes– también están empezando a contaminar el acuífero. Por otra parte, las instituciones financieras internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina para el Desarrollo promueven planes de desarrollo industrial que incluyen modelos de infraestructura de gran escala, como corredores carreteros, vías fluviales industriales y mega represas. Su objetivo es crear una región industrial nueva y globalmente competitiva. Estos emprendimientos, sin embargo, implican aumentar la contaminación del acuífero y disminuir la eficacia de sus áreas de recarga.

En los hechos, un desarrollo industrial a esta escala podría estar en conflicto directo con cualquier esfuerzo potencial para introducir objetivos orientados a la conservación para la protección de los ecosistemas clave que garantizan la recarga del acuífero y mantienen su agua limpia y confiable. Podría al mismo

tiempo aumentar significativamente los riesgos de cualquier proceso de privatización, ya que las IFIs implicadas indudablemente serían disuadidas de promover la conservación del acuífero a expensas del desarrollo industrial.

Sobrevivencia/Amigos de la Tierra Paraguay está generando conciencia sobre estos temas entre las comunidades y autoridades locales. Su trabajo se dirige a los legisladores locales y nacionales y también a los acuerdos regionales promovidos por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. También trabaja a nivel micro para fortalecer la capacidad de manejo del agua de las comunidades, compartiendo los ejemplos de buen manejo comunitario y de restauración de cuencas y acuíferos. Otros esfuerzos apuntan a desarrollar alternativas a los agronegocios y a seguir políticas que promuevan la salud pública y ecológica, la seguridad alimentaria y una mayor participación política.

por más información:

Sobrevivencia/Amigos de la Tierra Paraguay:
www.sobrevivencia.org.py

Otras lecturas: International Rivers Network:
www.irn.org

Actualmente, las actividades humanas afectan negativamente la disponibilidad de agua. El proceso de degradación de los territorios que producen agua, ha determinado el progresivo agotamiento de las aguas apropiadas para el consumo. En conjunto con la demanda creciente de la población mundial, la industria y la agricultura, los recursos hídricos se reducen más rápido de lo que podemos reponerlos.

Esto representa una amenaza para todos los seres humanos y también una oportunidad pero sólo para algunos. En función de su creciente escasez, el valor del agua como producto económico ha crecido. El agua se ha convertido en una mercancía que se compra y se vende, y está sujeta al control de las fuerzas de la competencia del mercado, y a la voluntad de las corporaciones transnacionales del agua.



© Irma Popović, Zelena Akcija

© Irene Revel

2 [canadá] privatización, contaminación y nacionalización

Si bien en Canadá abunda el agua dulce, no es posible considerarla como algo que está ahí para siempre. Es necesario respetar el agua que uno tiene, o se sufren las consecuencias, como en el caso de la población de la pequeña ciudad de Walkerton, Ontario. Siete personas muertas y más de 2000 hospitalizadas fue el saldo que dejó la contaminación de la fuente de suministro de agua de la ciudad con la bacteria E. coli como resultado de un mal manejo.

La mercantilización del trasvase y la extracción del agua de los Grandes Lagos es un tema que divide en Canadá. Existen grupos tanto en Canadá como en EE.UU. preocupados porque la reciente propuesta de los 8 gobernadores de los estados de los Grandes Lagos, apoyada por dos provincias canadienses, amenace directamente estos lagos que conforman el ecosistema de agua dulce más grande del mundo. En términos simples, la propuesta pretende establecer un programa para la autorización del trasvase de agua de los Grandes Lagos, que no fija ningún límite explícito a la cantidad de agua que puede desviarse, ni a la duración de estas desviaciones.

Tampoco se les impone un plazo, ni restricciones en cuanto a su propósito o a la región geográfica para la cual se pueden destinar.

Frente a la privatización de los sistemas municipales hubo avances positivos. En Hamilton, una de las ciudades más grandes de Canadá, un servicio privatizado que estuvo por largo tiempo bajo control privado fue devuelto al sistema público, después de años de mal desempeño, vertidos ilegales de saneamiento y altos costos. La resistencia popular también detuvo la privatización propuesta para los servicios de saneamiento de Vancouver. Éstas son grandes victorias para las organizaciones de base de Canadá.

por más información:
Consejo de los Canadienses:
www.canadians.org

el agua: un derecho humano

La humanidad está frente a una encrucijada y miles de millones de personas enfrentan la perspectiva de un futuro lúgubre con escasez de agua. De los 4 mil millones de casos de diarrea anuales, 2,2 millones de personas mueren innecesariamente. 6 millones han perdido la vista a causa de Trachoma, 200 millones se han infectado con schistosomiasis. Los parásitos intestinales afectan el 10% de la población del mundo en desarrollo. Las enfermedades prevenibles relacionadas con el agua, matan 5 millones de personas cada año, 4 millones de éstas son niños. Hoy, se estima que 1,2 mil millones de personas carecen de acceso a un suministro de agua segura y 2,4 miles de millones no tienen acceso a un saneamiento adecuado.

Estas cifras son perturbadoras, pero no son irreversibles. Existe la tecnología y también existen los recursos para hacer frente a esta crisis. Solo una fracción del billón de dólares que gastan cada año los gobiernos en el presupuesto militar permitiría superar sin problemas los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas referidos a agua potable y saneamiento. Las inversiones en agua, a diferencia de las bélicas, significarían un ahorro de 125 mil millones de dólares en gastos médicos directos y costos asociados a la baja productividad económica relacionada con las enfermedades prevenibles relacionadas con el agua.

3 [europa central y del este] privatización del agua

La adhesión de los países de Europa Central y Oriental a la Unión Europea tiene muchos paralelismos con la experiencia de los países en desarrollo con el Acuerdo General sobre el Comercio de los Servicios (GATS) de la OMC. Ambos acuerdos empujan a los países a privatizar sus servicios públicos, incluida el agua. La República Checa es el único país que ha cumplido con esto ampliamente, y prácticamente ya ha privatizado todos sus servicios de agua.

La UE exige cumplir con normas de calidad, tratamiento y provisión de agua de mayor nivel. También proporciona asistencia financiera a los programas de privatización. Si bien las regulaciones establecen que estos fondos no deben dirigirse a las compañías privadas, en la práctica los vacíos en las reglamentaciones llevan a que las compañías privadas logren acceder a estos fondos. La Comisión Europea también promueve activamente las asociaciones público-privadas que facilitan la privatización de los servicios de agua. Como resultado, compañías de agua ya establecidas originarias de Francia, Alemania y Gran Bretaña podrán acceder a los mercados de servicios de agua de Europa Central y Oriental con fondos europeos.

Eslovaquia, por ejemplo, tiene plazo hasta 2015 para cumplir los requerimientos de la UE para las plantas de tratamiento de aguas servidas, cuyo costo para el país se calcula en unos tres mil millones de euros. Si bien ya hay fondos disponibles, está claro que son insuficientes. Los programas de privatización también son evidentes en casi todos los países que no están en vías de adhesión a la UE, incluidos muchos de los que formaban parte del antiguo bloque soviético. En Ucrania, por ejemplo, la privatización del agua es actualmente centro de un importante debate público.

por más información:

FoE Ucrania: www.zsfoe.org

FoE Eslovaquia: foe@changenet.sk



Lamentablemente la solución elegida por los gobiernos no apunta a aumentar la inversión pública. Por el contrario, quienes formulan las políticas a nivel internacional, presionados fuertemente por el lobby del sector privado, están dedicados a atraer mayores inversiones y favorecer la gestión privada como salida para la crisis. La Unión Europea por ejemplo, está tratando de reclasificar el agua en el marco del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (GATS – AGCS) para definirla como servicio que puede ser objeto de compra y venta. Las Instituciones Financieras Internacionales promueven la privatización del agua ya que a menudo la agregan como condición cuando negocian con los países en desarrollo nuevos préstamos o la reducción de la carga de la deuda.

Entretanto, las corporaciones involucradas en el manejo y la distribución del agua no han estado a la altura de las expectativas que tenían los gobiernos. Los ejemplos de delitos corporativos se multiplican. Sobornos, alza de precios inaccesibles para los más pobres, cortes de suministro, falta de inversiones en infraestructura, distribución y calidad del servicio, son algunos de los ejemplos de mala conducta corporativa, por los que las corporaciones deben responder.

Son muchas las campañas de base sobre la privatización del agua que se están desarrollando por todo el mundo, en muchas de las cuales participan grupos de Amigos de la Tierra. Sin embargo, las luchas actuales contra la privatización en países como Uruguay, Filipinas, Sudáfrica y Bolivia, necesitan apoyo permanente.

El Consejo de Canadienses, organización afiliada a Amigos de la Tierra Internacional, ha iniciado un proyecto denominado Planeta Azul, que pretende realizar un esfuerzo internacional para proteger el agua dulce del mundo de las crecientes amenazas del comercio y la privatización. En su médula se encuentra el Tratado Iniciativa para Compartir y Proteger el Agua, Bien Común del Mundo. Se trata de una convocatoria para proteger el agua, como un bien que todos debemos compartir, y reconocerla como uno de los elementos que son demasiado preciosos para volverse objeto de la codicia y de un mercado mundial anónimo. Es un compromiso que asumimos con nosotros mismos, nuestras comunidades y nuestros representantes de buscar nuevas y mejores soluciones que las que hoy amenazan nuestro planeta y nuestros derechos humanos fundamentales.

El acceso al agua es un derecho humano. Sin embargo, la privatización amenaza el acceso al agua potable de la población. Amigos de la Tierra no aceptará que el derecho a este recurso, tan fundamental para la vida, le sea arrebatado a la gente. Solamente si reconocemos el agua como derecho humano podremos asegurar la justicia del agua ahora y en el futuro.

por más información:

Proyecto Planeta Azul: www.blueplanetproject.net/

4 uruguayos se unen en contra de la venta del agua

En Uruguay, la empresa pública del agua, OSE, ha tenido a su cargo hasta ahora, el servicio de distribución de agua segura y accesible para más del 90% de los 3,5 millones de personas que habitan el país. Recientemente este recurso vital ha sido amenazado por la privatización en manos de las empresas transnacionales del agua. La experiencia ha demostrado que estas empresas operan mayoritariamente sin intervención pública, movidas exclusivamente por los intereses de sus accionistas, cuentan con un historial de mal manejo, y no ofrecen garantías suficientes para la protección de los recursos hídricos. Pero el 31 de octubre de 2004, en una victoria para la justicia social, el pueblo uruguayo votó para que el agua fue reconocido como derecho humano fundamental en la Constitución, sentando las bases para su gestión exclusivamente pública, participativa y sustentable.



la privatización del agua en uruguay

En 1992, la oposición ciudadana evitó que el gobierno se desprendiera en forma masiva de los servicios relacionados con el agua. Sin embargo, el gobierno siguió empeñado en su afán privatizador y aprovechó para pasar a manos privadas el manejo del agua en todas las oportunidades que se le presentaron en la siguiente década. En tanto que la empresa pública de agua OSE ha experimentado pocos problemas en este tiempo, el suministro de las compañías privadas ha registrado reiteradamente problemas de baja calidad e irregularidad en el servicio, dejando a muchas personas sin agua. La privatización, que supuestamente pondría a cargo empresas con experticia en el manejo y recursos para hacerse cargo en forma eficiente del suministro de agua potable, no ha funcionado.

En ninguna otra parte de Uruguay ha sido más patente el fracaso de la privatización que en Maldonado, el departamento turístico por excelencia del país. En 1998, a pesar de la fuerte oposición del sindicato de OSE y de las comunidades de Maldonado, el gobierno otorgó una concesión privada al consorcio “Aguas de la Costa”, una subsidiaria local del gigante francés del agua SUEZ, para que se hiciera cargo del servicio de agua para unos 2.500 usuarios del departamento de Maldonado. Desde el momento en que esta empresa asumió el control del servicio, los

Impidiendo el acceso al agua a través de la financiación pública

“Hace apenas unos años, se proclamaba la privatización como un elixir que rejuvenecería infraestructuras industriales antieconómicas y aletargadas, y que revitalizaría economías anquilosadas. Hoy en día sin embargo la privatización es vista con otros ojos —a menudo críticos. El escepticismo y la franca hostilidad hacia las privatizaciones no está restringido a unos pocos manifestantes radicales”.

Ioannis N. Kessides, Economista del Banco Mundial, junio de 2004.

consumidores han tenido que pagar tarifas de agua diez veces superiores a las anteriores, y a cambio han tenido que lidiar con caños rotos, agua olorosa e imposible de beber, y bajos niveles en las reservas a causa del mal manejo. Como bajo el esquema “agua para el lucro”, por definición nadie puede acceder al agua gratuitamente, se eliminaron las canillas o grifos públicos de los que dependían cientos de personas pobres.

Sin embargo, esto no detuvo el afán privatizador del gobierno. En 2000, se otorgó otro contrato para el suministro de agua por 30 años a la empresa, Uragua Ltda., subsidiaria de Aguas de Bilbao, una empresa pública española. Uragua tendría a su cargo el suministro de agua potable para la zona más densamente poblada y turística del oeste de Maldonado. En menos de un año, la negligencia de la compañía causó la ruptura de un caño, que dejó a la ciudad balneario de Pirlápolis sin agua por cuatro días. La empresa permitió que los líquidos residuales se desbordaran y contaminaran el agua, que luego fue desviada hacia una bahía. En una ciudad de la zona, los propios laboratorios del estado recomendaron dos veces, hervir el agua antes de beberla, mientras los consumidores se quejaban de que el agua dejaba residuos y manchas marrones en inodoros y piletas. No obstante, los ciudadanos de Maldonado pagan las tarifas más altas del país.

En 2003, el gobierno no pudo seguir hacer la vista gorda y anunció que rescindiría el contrato de Uragua y OSE volvería a hacerse cargo del servicio. Esta fue una gran victoria, pero hasta ahora es una promesa vacía. La compañía todavía está operando y, de hecho, ha generado sustanciosas ganancias durante la temporada turística 2004.

“Agua sí. Robo no” es la consigna de la Liga de Promoción de Manantiales, una de las organizaciones ciudadanas de Maldonado que protestan contra los altos precios y la falta de acceso al agua bajo manejo privado. En el barrio San Antonio III, la comunidad protestó con éxito contra la eliminación de las fuentes de agua públicas. La compañía no solo mantuvo el suministro público, sino que ahora también lo mantiene. De todas formas, el gobierno local debe pagar por el servicio.

agua – ¡un derecho humano en uruguay!

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha sido quien realizó la intervención política más fuerte en favor de la privatización. A mediados de 2002, en el momento más dramático de la crisis económica uruguaya, el FMI pidió al gobierno que desregulara y privatizara varios sectores de la economía gestionados por el estado. El gobierno firmó entonces una Carta Intención en la que acordaba reducir su control sobre el sector del agua para ayudar al ingreso de nuevos inversores privados.

Cuando se anunció el “acuerdo” entre el gobierno uruguayo y el FMI, una serie de organizaciones sociales se unieron para detener la privatización del sector del agua. La Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, integrada por REDES Amigos de la Tierra Uruguay junto a una coalición de sindicalistas, estudiantes, decisores políticos, y gente de lo más diversa, dijo “NO” a la venta de los recursos hídricos a las corporaciones transnacionales, y a través de un proceso democrático redactó y presentó una propuesta para reformar la constitución uruguaya a fin de declarar el acceso al agua limpia y segura como un derecho humano fundamental. A pesar de la fuerte oposición y de la presión ejercida por las empresas privadas de agua, el 31 de octubre en una jornada histórica más del 60% del electorado uruguayo votó a favor de la reforma. La reforma aprobada, además, prohíbe la concesión del agua a empresas privadas y establece mecanismos de gestión participativa, que involucran a las comunidades locales y buscan preservar el agua para las generaciones futuras.

por más información:

Amigos de la Tierra Uruguay: www.redes.org.uy

Ffjose: www.ffjose.org.uy

Radio Mundo Real: www.realworldradio.fm

La banca pública, como el Banco Mundial, ha sido uno de los actores principales de la arremetida empresarial por la mercantilización y privatización del mundo natural y los servicios asociados. En consecuencia, cada vez es más difícil acceder a estos recursos. Sin lugar a dudas el agua encabeza esta lista.

El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y varios bancos regionales de desarrollo, han estado presionando activamente por la privatización del agua en los países más empobrecidos y más endeudados, donde los efectos negativos se sienten con mayor fuerza. Tales privatizaciones ocurren desde el nivel de la captación del agua hasta el servicio de abastecimiento.

Mediante créditos condicionados y apoyo financiero directo, las instituciones financieras internacionales (IFI) fomentan los usos industriales de las fuentes de agua. Ejemplo de tales inversiones son las minas de oro sedientas de agua y las destructivas grandes represas. El uso industrial y la contaminación de grandes cantidades de agua potable amenazan el abastecimiento de agua de las comunidades locales. Los pueblos indígenas y las mujeres sufren las mayores consecuencias ya que son muy dependientes del acceso al agua para su sustento y actividades.

De otra parte los bancos y el FMI comúnmente insisten en la privatización de los servicios de agua como condición para dar créditos y aliviar la deuda. El Banco Mundial argumenta en su sitio web que en los países en desarrollo “el sector privado, bajo contrato con el sector público, a menudo ha producido mejores resultados” que el sector público en lo que hace a brindar acceso a servicios de agua confiables. La estrategia de desarrollo del Banco Mundial para el sector privado, fechada en abril de 2002, explícitamente nombra a los servicios públicos como nuevos sectores para la inversión privada. El informe de este año del Panel Mundial sobre Financiamiento para la Infraestructura de Agua liderado por el Ex Director Ejecutivo del FMI Michel Camdessus, reclama que las IFI incrementen las garantías y otros subsidios públicos para las inversiones privadas en infraestructura y abastecimiento de agua.

La banca regional de desarrollo mantiene un enfoque similar del abastecimiento de agua. El Banco Asiático de Desarrollo (BAD) a pesar de considerar el agua como un bien económico “socialmente vital”, ensalza las virtudes de la intervención del sector privado. El BAD sostiene que el agua debería asignarse a y ser usada por aquellos que pueden pagarla mejor, es decir usuarios “de alto valor”. Además, el BAD apoya el establecimiento de mercados de derechos de agua transferibles.

5 [filipinas] cólera y tarifas de agua más altas

La privatización del agua es una historia presente en Filipinas. Los servicios de aguas eran originariamente propiedad del gobierno, pero la presión política y el apoyo financieros del Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo han determinado la privatización de este servicio público.

En las áreas urbanas, específicamente en Manila pero también en otras ciudades, la consecuencia de la privatización del agua ha sido un sustancial incremento de las tarifas, aún cuando muchas personas todavía carecen de conexión a la red. También se ha informado la existencia de un brote de cólera y gastroenteritis. En Manila las compañías responsables son Maynilad Water, propiedad de una subsidiaria de la corporación francesa de aguas Suez, y Manila Water, propiedad de la conocida corporación Bechtel de EE.UU.

Fuera de las áreas urbanas, los servicios de agua locales de las comunidades también han sido blanco de corporaciones trasnacionales como Suez. Por ejemplo, una comunidad en Calapan, Mindoro, está enfrentando la posibilidad de tener que pagar por el suministro de agua a la que antes accedía sin costo alguno. En las comunidades rurales, la gente compete por los

recursos hídricos con las plantaciones de ananá y banana. Es común que se clasifique a las cuencas hídricas como zonas agrícolas, brindándole a las corporaciones la justificación para convertirlas en plantaciones. Además, los operadores mineros tienen derechos auxiliares al control del agua en las áreas donde desarrollan su proyecto. Tanto la minería como las plantaciones están contaminando los acuíferos.

Distintas ONGs trabajan en estrecha colaboración con distintos sectores del país para oponerse a la privatización de los servicios de agua.

por más información:

Centro de Derechos Legales y Recursos

Naturales - Kasama sa Kalikasan/Amigos de la Tierra Filipinas: www.lrcksk.org

Jean Marie M. Ferraris:

bluaries_47430@yahoo.com



segunda parte la privatización del agua

Las políticas, programas y proyectos de las IFI amenazan el derecho de los pueblos al agua. En esta publicación, los estudios de caso de Filipinas, Indonesia, Ghana, Bolivia y Uruguay, muestran que se le está quitando el agua a la gente, con la intervención de las IFI. Escandalosamente los más empobrecidos bien pueden terminar teniendo que comprar agua embotellada si la falta de acceso a las redes de abastecimiento los obligan a comprarla a vendedores callejeros. La privatización del agua de Manila impulsada por el BAD provocó un aumento del 500% en las tarifas, no resolvió el problema de las pérdidas de agua ni de acceso a agua potable, y resultó en una epidemia de cólera (ver estudio de caso). En las zonas rurales la política del BAD de derechos de agua transferibles induce a los campesinos asiáticos a vender sus derechos de agua para otros usos más productivos. Tales políticas tienen efectos secundarios significativos para el sustento de los pueblos y la seguridad alimentaria.

Las críticas contra la privatización del agua son crecientes. Caso a caso queda demostrado que las promesas de mayor eficiencia no están siendo cumplidas. Cada vez hay más gente que queda excluida del mercado de agua por los precios, el abastecimiento y la calidad del agua escasamente han mejorado y las fuentes de agua están siendo rápidamente agotadas. Tal situación es inaceptable. Los pueblos se están alzando reclamando el control sobre sus recursos de agua. En el sonado caso del rechazo a la privatización del agua en Cochabamba, Bolivia, el Banco Mundial inicialmente había insistido en que los servicios de agua tenían que ser privatizados como condición para un préstamo de 25 millones de dólares. El Banco Mundial explícitamente manifestó que debía usarse “un sistema adecuado de cobranza” y que “no se debía dar ningún subsidio para atenuar el incremento de las tarifas de agua en Cochabamba”. Eso significó que familias cuyo ingreso rondaba los 100 dólares mensuales, tenían que gastar 20 dólares en agua. No es de sorprender entonces que los habitantes de Cochabamba se tomaran las calles y expulsaran del país a la empresa en cuestión, Bechtel. Junto con las organizaciones comunitarias, los sindicatos y los campesinos regantes, el gobierno accedió a crear una empresa pública alternativa y transparente con alto grado de participación y sentido de propiedad.

6 [escocia] agua escocesa, una compañía privada bajo control público

A Escocia no le falta agua. Sin embargo, las regulaciones de la UE sobre la calidad del agua potable forzaron al poder ejecutivo escocés a reconsiderar la forma en que se gestiona el agua en Escocia. Su respuesta ha sido una privatización parcial de la industria del agua atrayendo inversiones extra, lo que ha ayudado -por ejemplo- a resolver el problema del vertido de aguas servidas sin tratar en el océano.

No obstante, en rigor Scottish Water sigue siendo una empresa de propiedad pública. La mayoría de sus acciones le pertenecen al estado y responde ante el Parlamento escocés. Scottish Water está también bajo una regulación estricta: la del Comisionado de la Industria del Agua, la Reguladora de Calidad del Agua Potable, la Agencia de Protección Ambiental Escocesa y el Ejecutivo de Salud y Seguridad.

Sin embargo, la nueva compañía redujo drásticamente su plantilla laboral y los precios han aumentado, aunque fundamentalmente para el sector industrial más que para el sector doméstico. Aparte del aumento de los precios, no ha habido mucho incentivo para reducir el consumo de agua. No existe un derecho al agua legalmente garantizado en Escocia, pero en la práctica Scottish Water no puede desconectar a la gente por no pagar.

7 [colombia] privatizan acueductos comunitarios

Presionadas por el Banco Interamericano del Desarrollo, las empresas públicas a cargo de la gestión de las cuencas hídricas de Colombia están siendo privatizadas. Incluso los acueductos son blanco para la privatización, a pesar de que fueron financiados y construidos por las comunidades locales que los han gestionado por generaciones.

Como parte del proceso de privatización, el gobierno colombiano ha lanzado también una iniciativa para crear consejos de cuencas hidrográficas. Sin embargo, lejos de ser un instrumento para mejorar la participación ciudadana, estos consejos incrementarán el control del sector privado. La participación en los consejos depende de los niveles de uso del agua de los llamados “interesados”, en otras palabras, los intereses de los mayores consumidores de agua – primordialmente la industria y los propietarios de plantaciones- tienden a desplazar los intereses de los campesinos y las comunidades locales que tradicionalmente han gestionado las cuencas hídricas.

por más información:
CENSAT Agua Viva / Amigos de la Tierra
Colombia: www.censat.org



Por temor a problemas crecientes de relaciones públicas el Banco Mundial está ahora abandonando la terminología de la privatización en sus documentos y declaraciones públicas. Notablemente, un informe de junio de 2004 de un economista del Banco Mundial sostiene que la privatización de infraestructura ha sido ‘sobrestimada y malentendida’. Según ese informe, el éxito de las iniciativas de privatización varía mucho según el sector del que se trate, el abastecimiento de agua es claramente uno de los sectores “más problemáticos”.

La privatización del agua combinada con la apertura de los mercados del agua que está por ser perpetuada por las negociaciones de la OMC sobre servicios, sólo reporta beneficios claros para las transnacionales del agua radicadas en los países del Norte, tales como Thames Water, RWE, Suez y Veolia Environment. Estas empresas aspiran a conseguir acceso a múltiples nuevos mercados en todo el mundo.

ATI cuestiona la visión del agua como poco más que una mercancía comerciable. El agua es vital para la vida y el sustento humano y para el equilibrio ecológico de nuestro planeta. El derecho de las personas a “un nivel de vida adecuado para el bienestar y la salud propia y de su familias” consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU de 1948, tiene que incluir el acceso al agua –puesto que sin agua la vida no es posible. En consecuencia, ATI reclama que los bancos públicos cuyo mandato es aliviar la pobreza a través del desarrollo sustentable, ponga el derecho de los pueblos al agua como una de las primeras prioridades de sus actividades.

por más información:
www.ifwatchnet.org
www.foei.org/ifi
www.waterjustice.org
www.wateractivist.org

8 [el salvador] el agua un problema social

Sólo el 60% de la población de El Salvador tiene acceso al agua corriente y el país sufre problemas devastadores asociados con el agua. Muy a menudo el agua no puede considerarse segura por los altos niveles de contaminación, y las enfermedades gastrointestinales originadas en la contaminación del agua son la segunda causa de visita a los hospitales. El agua ha pasado de ser un problema ambiental a un problema social; y ahora se está convirtiendo en un problema político en la medida en que los grupos locales trasladan su mensaje a la calle, bloqueando las rutas principales para exigir que el gobierno suministre servicios de agua apropiados.

A pesar de las precipitaciones anuales de 1,8 metros, los niveles de agua en los acuíferos están decreciendo 1 metro cada año, tanto a causa de la sobreexplotación de los acuíferos como de la destrucción de las zonas de recarga. El noventa por ciento del agua natural del país está contaminada, y la mitad de la población bebe agua sin tratar.

El agua es por lo tanto un tema social y político crucial en El Salvador. Hasta ahora el gobierno no ha logrado resolver este problema, presentando la privatización del manejo del agua como la única solución. Esta posición es consecuencia de las presiones que ejercen organizaciones como el Banco Mundial, que presentó la privatización del agua como requisito para el otorgamiento de un préstamo de US\$ 24 millones en 1996. Sin embargo, las protestas populares han forzado al gobierno a

declarar que no se privatizará el manejo del agua. Los salvadoreños están realizando campañas para que el gobierno juegue un papel más activo en la gestión del agua. La población exige que las políticas de aguas sean supervisadas por el Ministro del Ambiente, y que comprendan las zonas de recargas y las cuencas hídricas en toda su extensión.

por más información:

Amigos de la Tierra El Salvador:

www.cesta-foe.org

Public Citizen's critical Mass Energy and Environment Programme:

www.citizen.org/cmep/Water/cmep_Water/reports/el_salvador/index.cfm

9 [nigeria] niegan acceso al agua potable

Si bien no es el resultado de una política deliberada del gobierno, los recursos hídricos están siendo privatizados en Nigeria —y a gran velocidad. En los años setenta, el gobierno nigeriano construyó varias represas enormes destinadas al riego y al suministro de agua potable para la población. Sin embargo, las represas no fueron mantenidas y los sistemas de agua se han deteriorado. Para contrarrestar esta situación, el gobierno ha comenzado a otorgar licencias para la recolección y distribución de agua a distintas compañías privadas.

La participación del sector privado significa que el suministro de agua ya no se ve como un servicio social. El agua se ha convertido en una commodity, una mercancía por la que hay que pagar. Para la elite rica esto no es un problema, pero la situación es muy distinta para los pobres de Nigeria, que además padecen la contaminación de los arroyos y ríos, de los que dependía originariamente la población rural para la obtención de agua dulce. Los efluentes industriales y la contaminación de las compañías petroleras se vierten directamente a estos cursos naturales y los han tornado inseguros. En consecuencia, se niega efectivamente el acceso al agua potable segura a los más pobres —ya que ahora deben pagar.

El otorgamiento de licencias por parte del gobierno para los servicios de agua también constituye un problema, ya que no se basa en la capacidad de una compañía en particular para realizar un suministro de agua de calidad o ampliar la distribución. Es cierto que muchas compañías de agua que estaban por debajo de las normas correspondientes han sido clausuradas por la agencia federal que las controla, sin embargo hay muchas que todavía inundan el mercado con agua para el consumo que no está limpia ni certificada. Por otra parte, estas compañías están interesadas principalmente en el suministro de agua de los barrios ricos de las ciudades. En muchas áreas rurales, los pobres ven como se recorta cada día más el suministro de agua y se ven forzados a comprarla a los aguateros, por un precio prohibitivamente caro. De esta forma, la población rural, compuesta mayoritariamente

por mujeres y niños, todavía está obligada a recorrer muchas millas para recolectar agua en los cursos que ahora están contaminados.

Los grupos ambientalistas locales han iniciado una campaña en contra de la privatización del agua. Uno de los problemas clave es el otorgamiento de licencias a empresas que no hacen un manejo sustentable de la napa freática, dado que la excavación privada y comercial, sin control, de pozos de agua, terminará agotando los acuíferos subterráneos. Se desconoce cuántas decenas de miles de pozos de agua están en operación en Nigeria. Por eso, ERA/FoE Nigeria y otros grupos locales están elaborando un inventario de los pozos existentes, para monitorear los niveles de extracción de agua y determinar su viabilidad.

por más información:

Environmental Rights Action/Amigos de la Tierra Nigeria: www.eration.org



10 [malasia] buena administración pública

Como ejemplo de una buena agencia de agua gubernamental, la autoridad del agua de Penang es reconocida como uno de los mejores administradores de agua de la región. Su existencia es una prueba de que hay espacio para las buenas agencias de aguas controladas por el estado. Pero la autoridad del agua de Penang está siendo transformada en una sociedad anónima, que cotiza en la bolsa de valores, aunque la mayor parte sigue bajo control del gobierno estatal. En otros estados malayos, la privatización del agua es un desastre total – con incontables ejemplos de contratos de agua otorgados a los amigos usuarios del gobierno.

por más información:

Sahabat Alam Malaysia / Amigos de la Tierra Malasia: www.foe-malaysia.org



11 [palestina] ocupación y privatización de los acuíferos

Luego de la ocupación de la Cisjordania y la Franja de Gaza en 1967, Israel tomó el control de los recursos hídricos palestinos. En Cisjordania, se puso bajo férreo control la extracción del agua de pozos por parte de las comunidades palestinas. Además, cualquier emprendimiento, perforación o construcción de infraestructura relacionado con el agua requiere a partir de ese momento de un permiso del “oficial de aguas” militar. Hasta ahora no se ha otorgado ni un solo permiso para uso doméstico o agrícola en ninguna de las áreas que se beneficiarían de la principal fuente de agua subterránea, conocida como el acuífero occidental. Como resultado, los palestinos han tenido que sostenerse con la misma cantidad de agua de la que disponían hace cuarenta años, no obstante el significativo aumento de población.

Inmediatamente después de la ocupación, Israel comenzó también a perforar sus propios pozos de agua subterránea, conectándose al mismo acuífero occidental. Un año después, comenzaron a aparecer asentamientos sobre tierras y cimas palestinas, y se perforaron más pozos muy próximos a los recursos hídricos palestinos. La calidad de vida de los colonos se benefició drásticamente, pudiendo utilizar agua para sus jardines, campos y piscinas. El consumo de agua promedio de un colono judío es ahora veinte veces el de un palestino.

Desde el comienzo de la segunda Intifada, en setiembre de 2000, las fuerzas de ocupación israelíes han arrancado más de 982.000 árboles (algunos de los cuales tenían más de 1.000 años de edad), destruido 907 reservorios y estanques agrícolas, desmantelado 687 km de redes de agua, y arruinado 243 pozos. También han demolido 4.500 casas y confiscado y arrasado decenas de miles de hectáreas de tierras agrícolas productivas.

Por otra parte, este acceso muy limitado al agua y las tierras agrícolas de los palestinos, se ha deteriorado significativamente desde que los israelíes comenzaron a construir el Muro. La “primera fase” ya completada de la

construcción se encuentra en la parte norte de Cisjordania, donde están las tierras más fértiles – la “canasta de pan” palestina. Sólo en esta fase, gran parte de los recursos agrícolas e hídricos de los palestinos – incluidos 36 pozos de agua subterránea- han sido confiscados.

De acuerdo con la legislación internacional, los palestinos deberían tener completa soberanía sobre todos los recursos del acuífero oriental situado en Cisjordania. También deberían tener al menos derechos igualitarios al agua de los acuíferos occidental y nororiental, ya que éstos se recargan casi completamente en Cisjordania. En 1999, los expertos estimaron los daños a los recursos hídricos palestinos por parte de los colonos israelíes en un mínimo de US\$ 45 mil millones.

por más información:

Amigos de la Tierra-Palestina:

www.foepalestine.org

Red de ONGs Ambientalistas de Palestina:

www.pengon.org, www.stopthewall.org

Instituto de Investigación Aplicada Jerusalén:

www.arjj.org

Grupo Hidrológico Palestino: www.phg.org

Sociedad Académica Palestina para el Estudio de Asuntos Internacionales: www.passia.org

12

[australia] flujos positivos impuestos por el gobierno

Australia —el continente habitado más seco, y con un sector rural crecientemente controlado por grandes corporaciones— está viviendo actualmente luchas importantes por el acceso al agua. Como consecuencia, en los últimos años el concepto de “flujos ambientales” ha ganado amplio apoyo entre varios gobiernos estatales y algunas autoridades del gobierno federal. El flujo ambiental es la mínima cantidad de agua requerida para asegurar la supervivencia ecológica de cualquier sistema de río, tomando en cuenta la naturaleza estacional de estos flujos, por ejemplo las inundaciones primaverales. El flujo ambiental que se determina para un río en particular, que puede ser quizás un 40% del flujo total, se reserva entonces para el sistema del río. Muchas veces esto significa que exista escasez de agua para otros usuarios, por ejemplo para los de riego intensivo que

practican una agricultura no sustentable. Como la cantidad total de agua disponible es reducida, los usuarios se ven forzados a hacer un uso más eficiente del agua si no quieren ver caer los niveles de producción. Esto lleva a un mejoramiento global del manejo del agua en las cuencas donde se aplica, a la vez que ayuda a asegurar la supervivencia ecológica de los sistemas de ríos amenazados.

por más información:
Amigos de la Tierra Australia:
www.foe.org.au



tercera parte | la venta de bosques y parques a
empresas forestales y de turismo



© foto lavia

1 [australia] privatización de bosques y plantaciones en victoria

Las políticas neoliberales que abogan por la privatización del patrimonio estatal han estado de moda en Australia durante las dos últimas décadas. La comunidad en general no ha tenido ningún beneficio sustancial en lo que concierne a los resultados en términos de conservación y ambientales. En todas las oportunidades, la industria ha tratado de aplastar cualquier análisis crítico de sus operaciones, utilizando una combinación de tácticas intimidatorias y las relaciones públicas para mitigar los desastres. Un ejemplo ha sido la privatización y venta de 180.000 hectáreas de plantaciones y bosque nativo en Virginia, que estaban bajo control gubernamental.

el nacimiento de victorian plantation corporation

En los años noventa, el gobierno del estado de Victoria “renunció” al control del patrimonio de plantaciones estatales y creó la Victorian Plantation Corporation (VPC). Esta compañía cuenta con legislación propia, y además se rige por la Ley de Empresas de Propiedad Estatal de 1992.

La VPC tenía el control de unas 170.000 hectáreas de tierra en el territorio de Victoria, entre las que se incluían diferentes tipos de

plantaciones, bosques primarios, y bosques húmedos de clima fresco y templado. La legislación de la VPC autorizaba la tala de los bosques y los derechos de arrendamiento, detentados a perpetuidad, la cosecha de esas tierras y el establecimiento de plantaciones.

códigos incumplibles

La VPC también se benefició de la reforma del texto del Código de Prácticas Forestales de Victoria que tuvo lugar en la década del noventa. La redacción final fue pensada para que su aplicación resultara muy difícil, en gran medida para apaciguar a la empresa Amcor, ahora PaperlinX, una de las principales compañías papeleras, propietaria de tierras con y sin plantaciones en las regiones de Strzelecki y Gippsland en Victoria.

La aplicación efectiva del Código solo es posible si hay un consejo fuerte, que esté dispuesto a exigir la aplicación de los principios de cuidado ambiental; o a través del Tribunal Civil y Administrativo de Victoria. Sin embargo, iniciar un juicio ante el Tribunal es en general demasiado costoso para los grupos comunitarios. En los hechos, la implementación queda librada principalmente a los acuerdos voluntarios entre la industria y las autoridades. Ocasionalmente, estos acuerdos incluyen una amplia participación comunitaria cuando ésta le

sirve a la empresa en cuestión. Pero si ésta afecta el patrimonio económico de la industria, la actitud de la industria cambia radicalmente.

Las modificaciones del Programa de Planificación del Estado de 1993 determinaron que la aplicación del Código de Práctica Forestal en las tierras privadas quedara a cargo de los consejos locales y no del Estado, una tarea muy difícil tomando en cuenta los limitados recursos de los consejos. Una de las batallas legales que ganó Amigos de la Tierra en 1995 en relación a la tala en tierras privadas en un área de captación de agua para el suministro doméstico, reveló que el consejo local no había visitado el lugar en los últimos 10 años.

Por otra parte, la ley de Protección de la Fauna y la Flora (Flora and Fauna Guarantee Act -FFG) tiene por objetivo supuestamente la protección de las especies y comunidades amenazadas en todo el territorio de Victoria, pero no se aplica a las tierras privadas.

impactos de la plantación de árboles

En 1997 los pobladores locales descubrieron que la VPC había estado expandiendo sus plantaciones de madera dura /coníferas, a partir de la tala de bosques primarios con gran valor de conservación y en las zonas de amortiguación de bosques húmedos de clima fresco templado. La tala de árboles que no eran de plantación, bajo el

tercera parte la venta de bosques y parques a empresas forestales y de turismo

¿una tragedia de los bienes comunes?

¡Hablemos de un caso empresarial de ganancia-ganancia-ganancia-ganancia! Shell o Exxon podrían “invertir” en una preciada área protegida, vender la madera del bosque como madera certificada por el Consejo Forestal Mundial (FSC), plantar eucaliptos sobre las praderas y recibir créditos de carbono por ello, vender los recursos genéticos a las instituciones de bioprospección, vender el agua dulce y la leña a las comunidades locales cercanas y, como si fuera poco, otorgarse a sí mismas el permiso para la “exploración petrolera sustentable” del área.

Miguel Lovera, Coordinador de la Coalición Mundial por los Bosques, en Cubierta Forestal 11, febrero de 2004.

disfraz de tala de plantación, enfureció a los pobladores locales y fue uno de los hechos catalizadores de la puesta en marcha de la vigilancia comunitaria en los Strzeleckis.

Es ampliamente conocido que las prácticas de despeje de bosque aplicadas han dejado a toda la bioregión sin su cobertura vegetal original. Queda menos de un 2% de la vegetación original protegida en reservas. Muchas de las áreas de coníferas a cargo de la VPC en los Strzeleckis contenían áreas remanentes de bosque húmedo de clima fresco templado, que hoy enfrenta un futuro incierto en el continente Australiano. Estos bosques requieren de enormes zonas de amortiguación de bosque de eucalipto que los protejan de los efectos de los incendios naturales y minimicen los impactos de las caídas de árboles que puedan lastimar a las hayas, permitiendo al agente patógeno Myrtle Wilt – que vive del aire y del agua- penetrar en las heridas de los árboles. Sin embargo, las zonas de amortiguación de los bosques húmedos de clima fresco templado no son obligatorias en tierras de propiedad privada.

En algunas áreas, las plantaciones se han establecido hasta el mismo borde de los bosques lluviosos, lo que implica que cuando tiene lugar la tala de la plantación, los riesgos de las hayas resulten heridas y que se dispersen las esporas de Wilt aumentan en forma sustancial. Estas plantaciones también están sujetas a los efectos de

los derribamientos causados por el viento, ya que los vientos fuertes pueden tirar los árboles remanentes.

subsidios para hancock

En 1998, una subsidiaria de John Hancock Financial Services, Hancock Timber Resource Group, adquirió los derechos para talar el patrimonio de VPC en el marco de un contrato de arrendamiento por 99 años. Si bien el Estado retuvo la propiedad de la tierra, a los efectos prácticos la tierra era propiedad privada.

En 2001, Hancock adquirió el patrimonio de Australian Paper Plantations (APP), cuyas tierras se localizaban en Victoria. La mayor parte de las áreas en los Strzeleckis del norte que no estaban bajo control de VPC pasaron en ese momento a ser propiedad privada de Hancock.

Gracias a los esfuerzos de los activistas locales de Strzelecki, Hancock se embarcó en una moratoria voluntaria a la tala de bosques nativos en sus tierras. Sin embargo, esta moratoria no se extendió a las áreas de plantaciones de árboles indígenas que tenían la apariencia de bosque nativo de 30 a 40 años de antigüedad.

En 2000, Hancock anunció su intención de obtener la certificación del Consejo Forestal Mundial (Forest Stewardship Council -FSC) del patrimonio previamente detentado por VPC. En

2004, obtuvieron el primer certificado del FSC en Australia. Sin embargo, los activistas por los bosques todavía están esperando las mejoras en el manejo de los bosques y los avances en las relaciones con la comunidad, dos aspectos que son, supuestamente, la marca en el orillo del FSC.

También se debe señalar que la privatización de la base de plantaciones en Victoria significa, en la práctica, que el comprador no tiene que pagar por el agua que consumen estas plantaciones. Las plantaciones de Hancock pueden consumir en el entorno de 1,3 millones de litros al año, los que efectivamente a lo largo de 99 años suman miles de millones de dólares en subsidios de agua, en el continente más seco de la Tierra. Gran parte del territorio de Victoria sufre por la sequía desde 1992, y se pronostica que las precipitaciones sufrirán un descenso anual del 30%, en el marco de los escenarios de efecto invernadero previstos.

En pocas palabras, la privatización ha significado menos rendición de cuentas, y menos control legislativo, la disminución de la participación de la comunidad en los procesos de toma de decisiones, y el rechazo a hacer públicos los datos patrimoniales, el volumen de madera y los arreglos contractuales.

por más información: Amigos de la Tierra Melbourne, Friends of Gippsland Bush Hancock Watch: www.hancock.forests.org.au

¿hay una tragedia de los bienes comunes?

Para los defensores de la privatización de los bosques y otros preciados ecosistemas, sí la hay. Desde su punto de vista, que la riqueza biológica de la Tierra sea, de hecho, patrimonio común de la humanidad, es la causa principal de la degradación ambiental. Consideran que las personas solo estarán dispuestas a manejar con cuidado un bien, si éste es de su propiedad personal. En consecuencia, los gobiernos de todo el mundo, han comenzado a vender las cuencas y otras zonas biológicamente ricas, como las áreas protegidas y los bosques primarios, a compañías y organizaciones privadas. Sin embargo, el hecho de que una compañía reciba un derecho de propiedad sobre una porción de tierra o una fuente de agua no implica que automáticamente realizará un manejo sustentable de la tierra o el agua. Como lo demuestran las experiencias de privatización del agua en países tan variados como Bolivia, Nigeria y Uruguay, desde una perspectiva exclusivamente económica orientada por el lucro, es mucho más coherente manejar el agua con el menor costo posible, aunque esto signifique el agotamiento de los recursos hídricos y la venta de agua potable de mala calidad solamente a quienes puedan pagarla. En la mayoría de los casos, los clientes no tienen adonde más recurrir, ya que la compañía de agua ha sido acreedora de un monopolio de facto.

Lo mismo se aplica a los bosques y otros ecosistemas biológicamente diversos. Lamentablemente, como lo calculan el Centro Internacional de Investigación Forestal (Centre for International Forestry Research – CIFOR)¹ y otras instituciones, desde un punto de vista puramente económico el manejo sustentable de los bosques no tiene ningún sentido. En el mercado actual es mucho más redituable simplemente expoliar toda la madera y/o, de forma aún más eficiente, reemplazar el bosque con plantaciones a gran escala de monocultivos de especies de árboles de crecimiento rápido – a menudo exóticas. Esta triste realidad económica ya ha llevado a la desaparición de millones de hectáreas de bosques tropicales en países como Indonesia, Malasia y Brasil. De hecho, ésta puede considerarse como una de las causas subyacentes de la pérdida de bosques².

Los economistas y otros formuladores de políticas han reconocido durante muchos años que las economías no reguladas agotan los recursos naturales al ignorar los valores no-monetarios, denominando a esto eufemísticamente como una “falla del mercado”. Por este motivo desarrollaron otra estrategia para exprimir los preciados recursos de la Tierra y convertirlos en realidades económicas. Antes que nada, propusieron asegurar que todos los aspectos de los bosques, los recursos hídricos y otros recursos naturales sean valuados en términos monetarios. Se han desarrollado modelos económicos fascinantes que traducen en términos monetarios el valor económico del agua dulce, el

2 [Georgia] protegiendo los bosques

Ningún otro país del Cáucaso tiene tantos bosques como Georgia. Los bosques son uno de los recursos naturales más importantes del país, y cubren alrededor de un 40 por ciento de su superficie. Estos bosques son significativos por las especies endémicas y especies únicas que contienen, y también porque cumplen funciones ecológicas, económicas, recreativas, de protección de la tierra y de regulación hídrica de gran importancia.

Como el 97% de los bosques georgianos se ubican en laderas montañosas, su destrucción causa enormes daños económicos y ambientales. El número de desastres ambientales, como avalanchas e inundaciones, ha crecido en aquellas regiones donde tiene lugar la tala ilegal e incontrolada. Desde 1991, la tala ilegal ha aumentado en forma permanente, principalmente debido a la aguda crisis energética del país, que ha incitado a la población a talar los árboles para calefacción y combustible. Los leñadores furtivos, naturalmente seleccionan los árboles de alta calidad, y roban los mejores individuos

de la diversidad del bosque, lo que dificulta aún más una regeneración correcta del bosque. Otro elemento que coadyuva en este proceso es que los recursos madereros en los países vecinos son más escasos, transformando a la madera georgiana relativamente abundante y barata en un rubro de exportación lucrativo.

El gobierno de Georgia es propietario de casi todos los bosques del país, pero solo asigna 1 millón de Lari georgianos equivalentes a US\$ 500.000 de su presupuesto al manejo de los bosques, apenas una fracción de la cantidad necesaria para detener la tala furtiva y la tala excesiva. En vez de tomar medidas concretas para detener la tala ilegal, el gobierno propone privatizar los bosques y entregarlos a manos privadas. La decisión es apoyada por el Centro de Desarrollo del Sector Forestal, un organismo de reciente creación, financiado por el Banco Mundial y apoyado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Greens Movement of Georgia/Amigos de la Tierra Georgia ha realizado campañas contra la

tala ilegal y la exportación de madera. Conjuntamente con otras ONGs, científicos y la Iglesia Ortodoxa Georgiana, están convencidos de que esta solución que promueve el Banco Mundial sólo va a acelerar la tala no sustentable de los bosques de Georgia. FoE-Georgia, en cambio, propone que el gobierno retenga el control de los bosques e involucre a las comunidades locales en su preservación para las generaciones futuras. También propone restablecer el control de la Iglesia sobre los bosques ubicados cerca de algunas iglesias importantes, una práctica que anteriormente ha probado ser exitosa, e introducir métodos modernos de uso y manejo sustentable de los bosques.

por más información:

The Greens Movement of Georgia/Amigos de la Tierra – Georgia: www.greens.ge



tercera parte la venta de bosques y parques a empresas forestales y de turismo

valor de la información genética hallada en el bosque tropical, el valor del secuestro de carbono de una turbera, o simplemente el valor estético de un paisaje como el Masai Mara en Kenia.

Posteriormente, el llamado “Consenso de Washington” propuso crear mercados para estos valores. Esta red informal de economistas neoliberales del Banco Mundial, el gobierno de los EE.UU. y sus aliados gubernamentales y no gubernamentales se encontró repentinamente frente a la oportunidad de meter esta cosa abstracta llamada naturaleza en su lógica cotidiana de “dejemos actuar al mercado y se resolverá”. La creación de mercados de áreas protegidas, de secuestro de carbono, de recursos genéticos, de recursos de agua dulce y de valores estéticos de los paisajes, se convirtió en la nueva sensación de los círculos conservacionistas. “No puedes salvarlo si no puedes venderlo”, era el eslogan que condujo a iniciativas como “Biotrade”, establecida en 1996 por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo para promover la creación de mercados para la biodiversidad y sus muchos valores.³

No le tomó mucho a una institución como el Banco Mundial abrazar este enfoque, tan en consonancia con su ideología neoliberal. La dependencia de muchos gobiernos de países en desarrollo del Banco para la obtención de préstamos para financiar sus sistemas de purificación de agua y su infraestructura de agua potable colocaba al Banco en una posición única para “sugerir” la privatización a países tan distintos como Uruguay e

Indonesia. El mismo remedio se prescribió para otros sectores que enfrentaban problemas por mala administración. Así lo ilustra también el artículo sobre Georgia, donde el Banco Mundial exigió la privatización de los recursos de los bosques de Georgia como un elemento central para la renovación de un préstamo al sector, sin tener en cuenta que será mucho más difícil lidiar con la sobreexplotación y otras formas de destrucción de los bosque cuando todos ellos estén en manos privadas.

El Banco Mundial, USAID y otros fanáticos de los grandes beneficios del libre mercado, también promovieron con entusiasmo la combinación de la privatización de áreas protegidas, describiendo hermosas imágenes de pequeños grupos de eco-turistas amantes de la naturaleza, que dejarían miles de dólares para echar un vistazo respetuoso a la zona. Oh sorpresa, hete aquí que en el salvaje mundo desregulado de las “fallas del mercado” y otras fuerzas económicas, los llamados proyectos de ecoturismo tienden a transformarse rápidamente en una amenaza cada vez mayor para algunas de las áreas más hermosas del planeta.

En setiembre de 2003, el Congreso Mundial de Parques en Durban, Sudáfrica, dio otro paso más hacia el control global corporativo de las áreas protegidas –supuestamente “apenas” un 12% de la superficie terrestre- a través del énfasis en las “asociaciones público-privadas”. El Convenio sobre la Diversidad Biológica puso su sello de aprobación a esta gran subasta en su séptima Conferencia de las Partes en febrero de 2004.

3

[indonesia] privatización de parques nacionales

El gobierno indonesio alega que no puede financiar una gestión adecuada de sus áreas protegidas y en está privatizando la gestión de los parques. El Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales apoyan la agenda del gobierno y están ayudando a establecer asociaciones “público-privadas”. Estos modelos han conducido a la privatización parcial de parques como el Parque Komodo, el Parque Bukit Baka Raya, el Parque Bunaken y el Parque Wakatobi

A pesar de que la Autoridad Nacional de Parques (PHKA) continúa participando, las empresas tienen considerable influencia en el manejo de los parques. Muchas son empresas de ecoturismo, con un interés obvio en promover el turismo. En general, expulsan a las comunidades de sus territorios tradicionales, e incluso los que viven en las zonas centrales y limítrofes pueden ser forzados a marcharse. Algunos se convierten en refugiados de la conservación, y se trasladan a las ciudades. Perder el acceso a sus tierras tradicionales también puede significar que las comunidades se vean obligadas a encontrar nuevas formas de subsistencia, aunque algunas empresas encargadas de la

gestión sí intentan proporcionar actividades de generación de ingreso alternativas. Hay también casos de biopiratería, en los que las compañías venden o traspasan conocimientos tradicionales e información genética a la industria farmacéutica.

Miembros de WALHI/ FoE-Indonesia están trabajando con las comunidades afectadas para recuperar sus derechos a estos recursos.

parque nacional komodo

El manejo del Parque Nacional Komodo, un parque nacional indonesio que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad y Reserva de Biosfera, ha estado privatizado efectivamente desde 1995. The Nature Conservancy (TNC), una institución transnacional con base en EE.UU., fue invitada a hacerse cargo de la gestión del parque por parte de la Autoridad Nacional de Parques (PHKA). Su “concepto de manejo cooperativo” se concentra en el desarrollo del ecoturismo con empresas locales a fin de hacer que el parque sea financieramente autosustentable. Ahora, las comunidades locales, son otra cosa, éstas han sido excluidas de sus áreas tradicionales, ya que el ingreso al territorio del parque debe hacerse portando una autorización y no se hacen excepciones. Las

actividades de pesca locales de miles de personas han sido gravemente perjudicadas. La empresa de ecoturismo, en parte propiedad de The Nature Conservancy tiene una concesión de 30 años a partir de 2004, y cuenta con la co-financiación del Banco Mundial por 5 millones de dólares.

por más información:

Walhi/Amigos de la Tierra Indonesia:

www.walhi.or.id



Los países se han divorciado finalmente de cualquier responsabilidad real de proteger las áreas naturales y a las personas que dependen de ellas. En Ecuador y Rusia, los gobiernos siguieron el consejo del FMI de “cerrar sus instituciones improductivas”, es decir, los ministerios de medio ambiente y los sistemas de parques nacionales. La idea es que a cambio del derecho corporativo soberano a manejar, explotar, especular y explorar en las áreas naturales, los intereses privados también se harán cargo de ellas. Lo que olvidan es que los pueblos indígenas y otras comunidades locales se han hecho cargo de estas áreas de una manera sustentable desde tiempos inmemoriales. Esta misma gente ahora tiene que pagar para acceder a la leña, el agua dulce y las plantas medicinales, o incluso se les bloquea completamente cualquier acceso a estas necesidades básicas.

¿recortando gastos? privatización de la protección de la biodiversidad

La conservación de la biodiversidad es un sector comercial nuevo y floreciente. Mientras que los gobiernos consideran los méritos financieros de liberarse de las costosas responsabilidades de la protección de los parques, los negociadores de la OMC ya se mueven para forzar la situación, liberalizando los mercados de la “protección de la biodiversidad y el paisaje”.

Los gobiernos actúan convencidos de que pueden preservar la naturaleza por casi nada. Argumentan que el sector privado proporcionará una nueva fuente de financiamiento y la experticia de sus especialistas. Es conveniente para ellos poder delegar la responsabilidad inmediata por las costosas medidas de manejo de la conservación, especialmente dado que los beneficios tienden a ser intangibles y difíciles de determinar en el corto plazo.

Privatizar el manejo de la biodiversidad de esta manera, implica dejar la biodiversidad y las funciones ecológicas críticas libradas a los caprichos de las presiones del mercado y del control corporativo. Casi inevitablemente, la privatización reduce el control de las comunidades indígenas locales sobre los recursos biológicos y naturales de los cuales dependen y desestimula las prácticas de manejo sustentable de los recursos desarrolladas a nivel local. Por otra parte también facilita la biopiratería. Efectivamente, la experiencia reciente indica que este tipo de privatización está introduciendo nuevas fuentes de corrupción y negación de los derechos comunitarios.

Las consecuencias de privatizar el manejo de la biodiversidad podrían impedir que los gobiernos cumplan con sus compromisos asumidos en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, el cual efectivamente exige que se “reglamentará o administrará los recursos biológicos importantes para la conservación



Desde su apertura al público en 1985, el Parque Nacional Gunung Mulu en Sarawak ha sido atracción de visitantes de todo el mundo. Los turistas son atraídos al parque tanto por sus inmensas cuevas – que incluyen el pasaje cavernoso más grande del mundo– como por su enorme riqueza en plantas y animales. Una sola hectárea del parque puede contener más especies de árboles que toda Norteamérica, según figura en las declaraciones del parque. Pero si bien el turismo ha traído beneficios económicos muy apreciados al área, los propietarios originales no siempre han recibido parte de esos beneficios. Los recientes esfuerzos por privatizar el manejo del parque han aplastado los pocos derechos que el gobierno había garantizado anteriormente a los habitantes indígenas de la región.

Mucho antes de que los turistas vinieran, el área de Mulu estaba habitada por los Berawans de Long Terawan y algunos Penans nómadas que ahora viven en Batu Bungan, en las márgenes del parque. Cuando se creó el parque, el área era manejada por el Departamento de Vida Silvestre y Parques Nacionales de Sarawak. Los indígenas tenían permitidos algunos “privilegios” tradicionales, como el derecho a cazar ciervos y cerdos salvajes, pescar y recolectar ciertas especies de plantas como el ratán dentro de áreas definidas.

Después que el parque ingresó en la lista de Sitios de Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2000, la gestión del parque fue entregada a manos privadas. El beneficiario fue Borsarmulu Park Management, una subsidiaria de Borsarmulu Resorts (BRSB), a la que también pertenece el complejo turístico Royal Mulu Hotel and Resort. La compañía tiene vínculos obvios con el gobierno, ya que los accionistas de BRSB son la Corporación para el Desarrollo Económico de Sarawak (SEDC) y Kenyalang Cergas, una empresa privada gestionada por la hermana y el hermano del Ministro en Jefe de Sarawak. Los hermanos también se sientan en el directorio de BSRB.

Aunque muchos nativos Berawan aprecian el “goteo” de los beneficios económicos provenientes de la explotación del parque, sus derechos y su participación han sido a menudo completamente ignorados, en particular cuando el gobierno y los intereses privados se confabularon para obtener sus ganancias.

La explotación del parque data de 1975, cuando el gobierno estatal adquirió una parcela de 20 acres de un propietario nativo. El gobierno dijo que las tierras albergarían las oficinas centrales del parque, pero el edificio nunca se construyó. En cambio, las tierras fueron cedidas a BRSB para construir el complejo Royal Mulu Hotel & Resort.

tercera parte la venta de bosques y parques a empresas forestales y de turismo

de la diversidad biológica”. En particular, el Convenio especifica que esto debe hacerse de una forma que “respete, preserve y mantenga el conocimiento, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales”. Sin embargo, es probable que este enfoque esté gravemente comprometido por la actual tendencia a privatizar la gestión de la biodiversidad.

sólo turistas: la mercantilización y la privatización de la naturaleza para el turismo

El turismo, definido en forma amplia incluyendo los servicios de viajes y el transporte de pasajeros, es considerado la industria más grande y de mayor crecimiento, así como el sector de servicios más grande del mundo. En 1999, representaba el 10% del PNB mundial, totalizando US\$ 440 mil millones.

Unos tras otros se vienen perdiendo playas públicas, bosques y áreas montañosas en manos de los voraces apetitos de la industria de la construcción y el turismo, dedicados a levantar hoteles, complejos turísticos, campos de golf y toda la variedad de accesorios del turismo industrializado moderno. La desviación del agua “privatizada” desde los reservorios públicos –para regar los céspedes de los campos de golf y llenar las piscinas y las bañeras de los hoteles- también se ha convertido en una práctica común y devastadora en las últimas décadas.

Sin embargo, parece que lo peor está por venir. Con el nuevo foco liberalizador apuntando firmemente al turismo, las corporaciones buscan maximizar sus ganancias mediante la adquisición y posterior venta de prácticamente todo lo que pueda ser de interés para un turista – incluso uno amigo del medio ambiente. Esta nueva ola de privatización y acuerdos de manejo impulsa a los gobiernos a abdicar de sus responsabilidades y muchos hacen la vista gorda a los niveles crecientes de explotación e incluso de actividades ilícitas.

Un claro ejemplo es la degradación de los recursos biológicos y los ecosistemas en los parques nacionales. En todo el mundo – desde los Estados Unidos a Sudáfrica, pasando por China y Tailandia- los gobiernos recurren al sector privado para que financie la conservación de la naturaleza y la infraestructura para los visitantes, y la consecuencia es la privatización de los parques y su utilización como sitios para la construcción y emprendimientos turísticos. Las consecuencias de esto para la población local y para el medio ambiente pueden ser devastadoras. Ciertamente, el Congreso Mundial de los Parques 2003 confirmó que las áreas protegidas están amenazadas como nunca antes, y el daño a los ecosistemas -debido a emprendimientos de desarrollo excesivos, la desigualdad social, y la comercialización – figura al tope en la lista de preocupaciones.

En 1993, se le otorgaron a la compañía 243 acres en concesión provisional para la segunda fase del complejo turístico y otras instalaciones. Sin embargo, ya en ese momento, una serie de familias indígenas habían reclamado las tierras y algunas habían construido pequeños albergues para los turistas. El resultado ha sido una enconada disputa entre los Berawan y las autoridades, en la que el Estado se ha rehusado a negociar. Por el contrario, el gobierno ha criticado abiertamente a los Berawan, caracterizándolos como codiciosos y alegando que no pueden fundamentar sus reclamos. En la década de 1990, los Berawan protagonizaron protestas pacíficas que fueron reprimidas por las autoridades mediante la fuerza policial y amenazas.

Hoy la lucha continúa, mientras el gobierno está determinado a transformar al Parque Nacional Mulu en un destino turístico importante. Los Berawan afirman que las tierras que el gobierno ha destinado a la ampliación del aeropuerto de Mulu les pertenecen. A pesar de los intentos que han realizado para que las tierras sean adecuadamente mensuradas y escrituradas, el gobierno se ha rehusado hasta ahora a atender estos reclamos, y los propietarios nativos contrataron a un abogado y solicitaron la intervención de un arbitraje. El caso todavía está pendiente.

El gobierno tampoco permitió a los Berawan participar adecuadamente de la toma de decisiones respecto al control, la regulación, la gestión y la ejecución de las actividades de desarrollo cercanas al parque, aún cuando esas actividades los afectaban directamente. También se ha excluido a los Berawan de muchas oportunidades económicas y comerciales derivadas del desarrollo turístico en el área, en las cuales participan como meros trabajadores.

Durante más de una década, los Berawan han exigido que el gobierno:

- reconozca sus derechos a la tierra;
- delimite sus tierras y emita títulos a todos los propietarios del área de Melinau;
- asegure la participación de la población Berawan en la toma de decisiones referidas al control y gestión de los emprendimientos cercanos al Parque Nacional Mulu; y
- les asegure una cuota parte justa de las ganancias del desarrollo turístico y les permita controlar aquellos emprendimientos que tengan impacto sobre su patrimonio cultural.

por más información:

Amigos de las Tierras Malasia/Sahabat Alam Malaysia (Sarawak): www.foe-malaysia.org



Las organizaciones de la sociedad civil y representantes de los Pueblos Indígenas que habitan las áreas del mundo más ricas en biodiversidad, han señalado constantemente que en general el turismo ha degradado recursos biológicos y ecosistemas enteros, afectando negativamente a las comunidades locales. Argumentan que el turismo no debería ser considerado una industria adecuada para ayudar a proteger la biodiversidad.

También existe una fuerte preocupación por la privatización y el comercio de los recursos biológicos y del conocimiento tradicional de los pueblos indígenas. Desde Vietnam a la India pasando por la región amazónica, hay informes alarmantes sobre “turistas” que recolectan y comercian ilegalmente especies y recetas de medicina tradicional que pueden ser de valor para la industria biotecnológica.

Visiblemente, un número creciente de sitios declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO también están siendo privatizados para multiplicar la cifra de visitantes y mantener los ingresos. Las famosas terrazas de arroz Banaue sobre tierras de Pueblos Indígenas en Filipinas ya están comenzando a derrumbarse como resultado de la sobreexplotación por parte de la industria turística. De manera similar, los bosques de manglares ecológicamente frágiles de Sunderbans en Bengala Occidental, India y Bangladesh; y el arrecife de coral Aldabra en las Islas Seychelles están amenazados por los planes de desarrollo de “ecoturismo” inapropiados y de carácter masivo que podrían destruirlos.

De igual forma, los sitios de patrimonio cultural – como los templos Angkor en Camboya, Luang Prabang en Laos y Lijiang en la provincia de Yunnan en China- son cada vez más controlados por el turismo comercial, arrasando la cultura local y el medio ambiente. En la antigua ciudad inca de Machu Picchu en Perú, una corporación transnacional, Orient Express, ha conseguido monopolizar completamente el negocio de viajes y turismo, provocando enojo y protestas entre los residentes locales.

De hecho, el desarrollo indiscriminado del turismo se ha convertido en una de las fuerzas más destructivas precisamente en los sitios que han sido identificados por la UNESCO por necesitar protección y restauración. No obstante, la propia agencia de las Naciones Unidas se ha convertido en un significativo promotor del turismo, forjando relaciones con patrocinadores corporativos y afirmando que el turismo “trae fondos muy necesarios, que pueden usarse para ayudar a preservar los sitios naturales y culturales de Patrimonio Mundial, y a la autonomía de las comunidades locales que viven y trabajan cerca de estos sitios”. La UNESCO ha comenzado incluso a colaborar con sus socios de la industria en el marketing de los sitios declarados Patrimonio Mundial como destinos turísticos. En marzo de 2004, hubo por primera vez en la historia un stand de la UNESCO en la mayor feria internacional de turismo, la “International Tourism Exchange” (ITB).

5 [swazilandia] privatización de la biodiversidad y violaciones de los derechos humanos

Swazilandia es un país mediterráneo en África del Sur, ubicado entre Sudáfrica y Mozambique. Está gobernado formalmente por un monarca, un poder legislativo y un poder judicial, pero desde 1973 el rey concentra los tres poderes.

Las áreas protegidas componen un cuatro por ciento de las tierras. Los parques nacionales son manejados por la Comisión del Fondo Nacional de Swazilandia, una entidad paraestatal creada por ley en 1972. Las empresas privadas también tienen intereses en la gestión de los parques siendo Big Game Parks (BGP) el principal operador comercial.

BGP es propietaria y tiene a su cargo la gestión del Santuario de Vida Silvestre Mlilwane y la Reserva Natural Mkhaya. También tiene el manejo del Parque Nacional Hlane, uno de los más grandes del país. Este parque es propiedad de la nación swazi y obtiene fondos del tesoro nacional, pero BGP afirma que envía sus informes directamente al rey. La supuesta participación del rey significa que el manejo de esos fondos y el desempeño del parque no pueden ser debatidos en el parlamento como los demás gastos nacionales.

En 1991, Swazilandia aprobó la Ley de Caza Deportiva con el objetivo de detener la caza furtiva desenfrenada. El país también firmó y ratificó la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES). En 1998, la administración de la Ley de Caza y de la CITES fue trasladada del Ministerio a la Oficina del Rey. BGP es responsable por estos dos instrumentos en nombre del Rey, y es la autoridad de gestión y científica ante la CITES.

vida silvestre privatizada

A pesar de la obvia existencia de un potencial conflicto de intereses, se le confió a BGP - un importante operador de la industria de la vida silvestre con fines de lucro - la administración de un acuerdo internacional, del cual Swazilandia es parte. El arreglo actual implica que la autoridad para el manejo de la vida silvestre del país y la autoridad científica responsable ante la CITES residen en la misma entidad. Es una situación totalmente inadecuada, que no asegura la rendición de cuentas ni la transparencia, aspectos que sólo se logran cuando se separan las responsabilidades.

Como BGP no está obligada a informar ni a consultar a nadie, es muy difícil monitorear el cumplimiento de Swazilandia con la CITES. Los

tercera parte la venta de bosques y parques a empresas forestales y de turismo

Common sense tells us that the world's last pristine habitats, important cultural and religious sites and Indigenous Peoples' ancestral domains should be protected from commercial tourism and properly maintained for the public good, now and in the future. However, under new liberalization schemes - such as the World Trade Organization's (WTO) General Agreement of Trade in Services (GATS) - there are good reasons to worry that such protection - as well as support for local tourism operators - is about to be outlawed. GATS could prevent the adoption of a huge range of measures designed to protect the environment from tourism, including, for example, restrictions on the development of tourist resorts or constraints on the numbers of tourists visiting fragile coral reefs.

El sentido común nos dice que los últimos hábitats prístinos del mundo, los sitios culturales y religiosos importantes y los dominios ancestrales de los Pueblos Indígenas deberían ser protegidos del turismo comercial y adecuadamente mantenidos por el bien público, ahora y en el futuro. Sin embargo, en el marco de los nuevos programas de liberalización - como el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS-GATS) de la Organización Mundial del Comercio- existen buenas razones para pensar que esa protección - así como el apoyo a los operadores turísticos locales- esté a punto de ser proscrita. El AGCS podría evitar la adopción de una enorme variedad de medidas diseñadas para proteger al medio ambiente del turismo, incluidas -por ejemplo- las restricciones

al desarrollo de complejos turísticos, o la limitación del número de turistas que visitan los frágiles arrecifes de coral.

Mientras que tanto la legislación nacional como los instrumentos internacionales (como el Convenio sobre Diversidad Biológica -CDB) están firmemente a favor de la planificación descentralizada del turismo, el AGCS/GATS trabaja en dirección contraria centralizando la toma de decisiones y, según la ONG Equations con base en la India, creando "un predecible clima de desregulación armonizada para los proveedores de servicios [que] no asigna valor alguno a la democracia local". Sin embargo, las Naciones Unidas parecen no ver estos sucesos y de manera singular han fracasado en atender a los potenciales impactos que tienen sobre la biodiversidad la mercantilización y la privatización de la naturaleza con fines turísticos. Tanto las deliberaciones de la Comisión sobre Desarrollo Sustentable (CDS), como el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) y los eventos relacionados con el Año Internacional del Ecoturismo (AIE) 2002 pueden considerarse fracasos en este sentido.

Esto puede deberse al fervor con el cual se promueve el desarrollo del turismo en otros foros. Según Raymond Chavez "... los países del tercer mundo hambreados por el dinero, ven al turismo como un atajo hacia un desarrollo rápido. Su potencial para ganar miles de millones de

peligros de este arreglo fueron ilustrados en 2002, cuando BGP exportó once elefantes a un zoológico de EE.UU. so pretexto de aliviar la sobrepoblación. Esto fue hecho dentro del ámbito de la CITES, y la propia BGP pudo proponerlo y a la vez aprobarlo como científicamente fundado.

Para la COP 13 de la CITES en 2004, Swazilandia propuso con éxito sacar de la lista a sus sesenta y un rinocerontes blancos para destinarlos a la caza de trofeos y exportarlos a lugares no especificados. La propuesta, una vez más, fue presentada por BGP, que no consultó a los demás interesados. Se trata evidentemente de una decisión estrictamente empresarial que apunta al beneficio financiero de BGP.

ley no deportiva

La Ley de Caza Deportiva otorga amplios poderes a los guardabosques en la protección de la vida silvestre, como el uso de la fuerza en la ejecución de sus tareas, que incluye su inmunidad en caso de ser acusados judicialmente. En una oscura serie de eventos, en 1997 el dueño de BGP, su hijo, su hija y otros cinco empleados de BGP fueron designados guardabosques en forma retroactiva al año 1991. La designación se interpuso convenientemente ante un procesamiento

pendiente del propietario y los cinco guardabosques de BGP por el asesinato de un hombre y su cuñado en 1992. Inmediatamente después del anuncio de las designaciones, el procesamiento quedó sin efecto.

BGP ha usado su inmunidad y el nombre del rey para aterrorizar a las comunidades locales y para intimidar a los oficiales del gobierno que se atrevieron a interferir en sus negocios. Se ha matado y lesionado gravemente a personas, pero los autores no han sido procesados. Se han sumado otros propietarios agrícolas y están mutilando y matando a miembros de la comunidad. Las comunidades son víctimas de actos inhumanos y torturas, que recuerdan las del régimen del apartheid en la vecina Sudáfrica.

Yonge Nawe, una ONG ambientalista que trabaja en pos del interés público en Swazilandia ha estado intentado denunciar la situación y está exigiendo la desprivatización de la CITES en Swazilandia, o la suspensión de Swazilandia de la convención. Esto implica la remoción de las corporaciones privadas y la ubicación de la administración de las leyes de vida silvestre y la biodiversidad en los ministerios de gobierno responsables. Yonge Nawe también está trabajando en la consecución de justicia y reparación para las

víctimas de las violaciones a los derechos humanos a manos de los propietarios de parques y tierras agrícolas, y para que los autores de estos crímenes tengan que responder ante la justicia. Finalmente, la organización está haciendo campaña para asegurar el derecho de la comunidad al acceso, la propiedad y la gestión de los recursos naturales y la biodiversidad en Swazilandia.

por más información:

Yonge Nawe: www.yongenawe.com



dólares ha contribuido a que se lo vea como una panacea para países dominados por la deuda. Pero más que esto, el turismo se ha transformado en parte inherente del paquete de las instituciones financieras internacionales para "salvar" a los países que atraviesan situaciones de extrema necesidad..." De esta forma, el Fondo Monetario Internacional (FMI), ansioso por asegurarse el repago de las deudas de los países en desarrollo, incluyó al turismo como parte de sus Programas de Ajuste Estructural (PASS). En esencia, esto significa que cualquier país que requiera asistencia financiera es y seguirá siendo presionado para asegurar que el turismo se integre a su economía a través de la liberalización y la desregulación. Como resultado, las inversiones públicas y privadas en el sector en todo el mundo alcanzan hoy los US\$ 800 mil millones por año (representando un 12% del total de las inversiones anuales en el mundo).

Pero la entrega de los parques a la compañías turísticas no es todavía la forma más devastadora de privatización de la naturaleza. También hay una tendencia creciente a entregar las áreas protegidas a las empresas petroleras y mineras. Cuando los gobiernos se declaran en quiebra, vender las joyas de la familia a quienquiera que esté dispuesto a pagar por ellas es la manera más pragmática de resolver los déficits presupuestarios. Así que ¿quién habrá de objetar si una compañía petrolera o minera está dispuesta a "manejar" un parque?

por más información:

"Sólo Turistas: La mercantilización y privatización de la naturaleza para el turismo" está basado en un documento titulado "¡Nuestro Mundo No Está En Venta! Las implicancias de la privatización en el comercio del turismo" de Anita Pleumarom, *Tourism Investigation & Monitoring Team (Equipo de Investigación y Monitoreo sobre el Turismo)*. Documento presentado en el Seminario Internacional sobre Turismo: Prácticas Injustas – Opciones Equitativas, 8-9 de diciembre de 2003, Hannover, Alemania, organizado por DANTE / La Red para el Desarrollo del Turismo Sustentable: www.twinside.org.sg/tour.htm

1 | Ver por ejemplo "The Flawed Wisdom of Sustainable Forest Management", http://www.cifor.cgiar.org/docs/_ref/publications/newsonline/32/wisdom.htm

2 | Ver informe la Iniciativa Global para Abordar las Causas Subyacentes de la Deforestación y la Degradación de los Bosques: http://www.wrm.org.uy/deforestacion/uc-rpt_spa.pdf http://www.wrm.org.uy/deforestacion/uc-rpt_spa.pdf

3 | Ver <http://www.biotrade.org>

4 | Chavez, Raymond, 'Globalization and tourism: Deadly mix for indigenous peoples', Tebtebba Foundation, Philippines, Third World Resurgence No. 103, March 1999

6 [ee.uu] la disneyficación de los parques

Norteamérica sirvió originalmente como modelo para establecer los sistemas de parques nacionales de otros países, a pesar de que a menudo las comunidades locales e indígenas pagaban altos costos, siendo desposeídas y desplazadas cuando las autoridades y los consevacionistas irrumpían en escena para proteger los bosques y la vida silvestre. Al parecer este modelo se repite en la actualidad, y los gerenciadore de la tierra y los recursos naturales en todo el mundo vuelven a copiar el modelo americano, esta vez en términos de privatización y “disneyficación”.

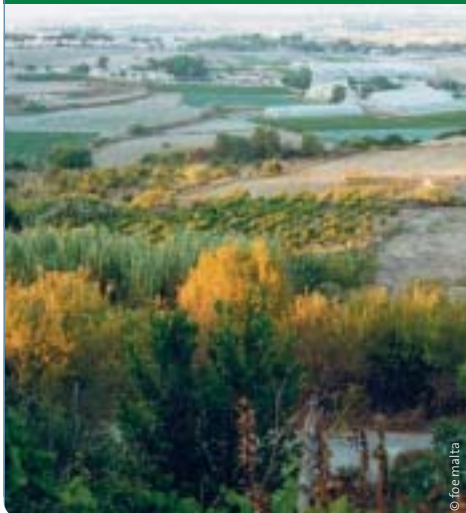
En los EE.UU., las agencias del gobierno vinculadas a la conservación – incluidos el Servicio Forestal, el Servicio de Conservación de Recursos Naturales, y el Servicio de Parques Nacionales- firmaron un Memorándum de Entendimiento con la Compañía Walt Disney cuyo objeto es el manejo de las tierras y los recursos naturales y la educación ambiental. Siguiendo este ejemplo, muchas áreas naturales prístinas están siendo transformadas en parques temáticos para hacer correr el dinero. Los guardias de seguridad, los boleteros y los logos de Coca Cola, Mc Donald’s y KFC han llegado para dominar el paisaje.

por más información:
Red del Tercer Mundo:
www.twinside.org.sg/tour.htm

7 [malta] campo de golf derrotado

BIEDJA MHUX GOLF

front kontra l-golf kors
<http://nogolfmalta.com.net>



© foemalta

En una gran victoria para el medio ambiente, el proyecto de crear un campo de golf en el centro de Malta fue unánimemente rechazado por el directorio responsable de la planificación. La propuesta en cuestión habría significado la privatización de la tierra donde se sustentan la naturaleza y la agricultura locales.

El campo de golf, planificado por la compañía AX Holdings, habría consumido una enorme cantidad de agua, un recurso escaso en Malta donde el 50% del agua ya proviene de plantas desalinizadoras. También habría sido una mala elección de uso para una porción de tierra donde trabajan 150 agricultores. Malta ya sufre escasez de tierras agrícolas, y solamente entre un 20 y un 30% de los requerimientos alimentarios nacionales se abastecen localmente. Por otra parte, los campos de golf no son muy adecuados para el clima mediterráneo y en 8 años ya están arruinados a causa del uso excesivo de pesticidas y agua, necesarios para mantenerlos verdes. Además, para que pueda crecer el césped, deberían eliminarse otros organismos autóctonos. Se trata de una zona que hospeda fauna protegida y agricultura orgánica, y hay más proyectos agrícolas en carpeta.

La oposición, que finalmente derrotó al modelo propuesto, estuvo encabezada por una alianza amplia de grupos ambientalistas y de protección de la naturaleza, incluido Amigos de la Tierra Malta, organizaciones de productores agrícolas, además de muchos otros grupos diferentes.

por más información
Amigos de la Tierra Malta: www.foemalta.org



© foemalta

cuarta parte | **los nuevos mercados:
la venta de carbono**



1

[costa rica] mercados de servicios ambientales y la privatización de los recursos

Durante los años setenta, ochenta y principios de los noventa, los bosques sufrieron una severa deforestación en Costa Rica. Tomando en cuenta que la mayor parte de la superficie del país es propiedad privada, el gobierno tomó medidas y desarrolló iniciativas con el objetivo de estimular la recuperación de los bosques en tierras privadas.

En 1996, la Ley Forestal 7575 renovó el concepto básico en el que se basaba el manejo de los bosques privados. El modelo original de incentivos forestales se transformó en el sistema de Pagos por Servicios Ambientales (PSA), es decir que los servicios ambientales que prestan los bosques y las plantaciones se pagan. El Estado reconoció los servicios ambientales como la conservación de la biodiversidad, las cuencas hídricas y los recursos hídricos, la oferta de valores estéticos y la capacidad del bosque de funcionar como sumidero de carbono. El sistema PSA resultó una forma fácil de hacer que los bosques en manos privadas se paguen solos y atribuir los costos al conjunto de la sociedad. Para desarrollar y administrar este sistema, se creó el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO). Costa Rica ha asignado, en promedio, entre US\$ 7 y 8 millones al año a

pagos por servicios ambientales, financiados por un impuesto selectivo a los combustibles.

El sistema PSA se ha desarrollado como una herramienta política, técnica y financiera utilizada para planificar y financiar la conservación de recursos vitales en áreas privadas. Sin embargo, ya desde sus comienzos, el sistema PSA ha estado sujeto a presiones ideológicas que intentan llevarlo hacia una posición mucho más mercantilista, orientada por la ilusión de los mercados y la privatización de los servicios ambientales.

logros, potencialidades y limitaciones

El FONAFIFO, junto con la industria forestal y maderera, declara que se debe agradecer al sistema PSA por la regeneración de la cubierta boscosa del país, que ha beneficiado tanto a la industria forestal como a la población de las áreas rurales generando empleo. Sin embargo, un estudio realizado por el FONAFIFO en 2002 concluyó que el PSA no había tenido efectos como estrategia de reducción de la pobreza en las áreas rurales del país. Por otra parte, en 2003 el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Costa Rica

el mercado de carbono: una vez más “naturaleza en venta”

La naturaleza, los alimentos, la tierra, los bosques, el agua, la biodiversidad y los genes no son más “naturales” que “humanos”. Tratar de transformarlos en mercancía implica reorganizar la sociedad, crear nuevos tipos de poder y conocimiento y traspasarlos a pocas manos.

Poner en venta la “naturaleza” es un juego complicado. El fenómeno de la mercantilización necesita la policía. Requiere cercos, contadores y patentes. Nuevas leyes y un sinnúmero de abogados. Escuelas y relaciones públicas. Nuevas instituciones estatales y nuevas técnicas. Necesita subsidios. Jamás se ha podido crear o sostener un mercado sin una gran cantidad de trabajo esforzado de parte de instituciones que equivocadamente los economistas nos han enseñado a creer que están “fuera” del mercado.

En ningún otro caso de “puesta en venta de la naturaleza” se exige un esfuerzo de tal magnitud como en el caso del clima. Aquí, como en el caso de la biodiversidad, un desastre ambiental emergente ha conducido a nuevos intentos de mercantilizar el medio ambiente. Las empresas, el estado y un gran número de instituciones expertas tratan en forma instintiva de evadir la crisis que ellos han ayudado a crear, usando las mismas herramientas que la generaron. Pero en el caso del clima este enfoque es, en realidad, todavía más patológico, estúpido y dañino.

publicó un informe donde se concluye que el sistema PSA no ha tenido impactos reales en el mejoramiento de los servicios ambientales por los que se paga, que se concentra en manos de unos pocos terratenientes, y que no ha contribuido a erradicar la pobreza rural.

No obstante, las organizaciones ambientales reconocieron su potencial como herramienta para canalizar recursos hacia los propietarios del bosque. Las experiencias positivas con organizaciones campesinas e indígenas en el manejo de recursos de PSA, han facilitado el desarrollo de nuevas prácticas y conocimientos sobre el manejo comunitario de bosques y la restauración de los bosques tropicales. Se están llevando a cabo nuevos trabajos para convertir al PSA en un elemento motivador y facilitador de una mayor apropiación y control sobre los recursos de los bosques por parte de las comunidades locales; y en una herramienta para la restauración de las áreas boscosas donde la biodiversidad está degradada.

mercantilización vs. fortalecimiento honesto del PSA

Más allá de las experiencias positivas y de su futuro potencial, el sistema PSA está actualmente ante un encrucijada. O bien se

establece y se fortalece a sí mismo como herramienta honesta para proteger los bosques y su biodiversidad, mantener y mejorar la condición de las cuencas hídricas, y fortalecer a las organizaciones locales, su conocimiento y sus capacidades de manejo de los recursos del bosque, o por el contrario se mercantiliza y queda limitado a la lógica del mercado, entregando el control de los recursos vitales a las grandes corporaciones.

Algunos actores políticos en el ámbito nacional e internacional presionan fuertemente a favor de la segunda opción. Un ejemplo es el proyecto Eco-mercados, una iniciativa de recaudación de fondos para el sistema PSA implementada por el gobierno costarricense y financiada en 2001 con un préstamo del Banco Mundial y una donación del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (FMAM). El proyecto apuntaba claramente a “apoyar el desarrollo de mercados y proveedores privados de servicios ambientales ofrecidos por los bosques privados”. Su principal objetivo ha sido vender en el mercado mundial los servicios ambientales relativos al mantenimiento de la biodiversidad, la reducción de los gases de efecto invernadero y los servicios de conservación de agua.

El impulso para crear nuevos mercados para los servicios relativos a la biodiversidad, los créditos de carbono y el agua, plantea muchas preguntas importantes. Por ejemplo, ¿quién va a comprar estos servicios y cuáles serán los derechos que adquiere a la biodiversidad, los recursos del bosque y los recursos hídricos nacionales? Además ¿cómo interactúa la soberanía nacional sobre la biodiversidad con este nuevo mercado?. Al contestar estas preguntas se debe reconocer que es totalmente legítimo que un país se haga cargo de los costos de proteger y mantener sus propios recursos naturales, con el propósito de mantener la seguridad alimentaria, el cuidado de la salud y su relación ética con la biodiversidad.

¿carbonización?

Los países tropicales que no están obligados a reducir sus emisiones bajo el Protocolo de Kioto, aumentaron sus expectativas con la introducción del Mecanismo de Desarrollo Limpio y el mercado de los créditos de carbono. Esto les dio la oportunidad de atraer inversiones y fondos a través del establecimiento de proyectos de reforestación y forestación, que actuarían como sumideros de carbono.

clima y carbono

La crisis del cambio climático es un ejemplo de un problema social que nos es familiar—los vertederos de desechos nos desbordan. Durante 150 años, las sociedades industriales han transferido el carbono fósil de los depósitos subterráneos de carbón, petróleo y gas, a través de la cámara de combustión, a un reservorio o “vertedero” de carbono más activo y de rápida circulación, sobre la superficie terrestre.

Una vez que el carbono ingresa al sistema superficial, durante un período muy largo no es posible volverlo a llevar a los depósitos subterráneos de combustible fósil o carbonato. La capacidad total del “vertedero” superficial de absorber el carbono subterráneo es limitada, y es posible que la mitad del carbono fósil que continuamente se agrega al reservorio de carbono superficial se esté acumulando en la atmósfera. La consecuencia es el calentamiento global y el aumento del nivel del mar, con resultados potencialmente desastrosos para nuestro planeta.

Actualmente las sociedades industrializadas usan para almacenar sus emisiones de carbono, una parte de la capacidad de absorción de la biósfera y la atmósfera mucho mayor que la está globalmente “disponible”. De mantenerse constante el uso que hace el Norte global del espacio de “vertedero” de carbono superficial, no quedaría ningún espacio para que lo

usaran los demás, ni siquiera para las actividades que no involucran la transferencia de carbono desde las reservas fósiles (como la respiración).

Para una persona racional la solución a este problema es disminuir o detener la producción de la sustancia que termina en el vertedero. ¿Queremos reducir los peligros del vertido de DDT, los clorofluorocarbonos o el cloruro de polivinilo? Dejemos de producirlos. ¿Queremos reducir los peligros del cambio climático? Dejemos de sacar combustibles fósiles de la tierra.

Sin embargo, las elites que más dependen de los hidrocarburos no ven las cosas de esta forma. No tienen intenciones de dejar de producir la materia que desborda los vertederos, ni están dispuestos a adoptar nuevas tecnologías que puedan invadir sus mercados centrales. En vez de restringir y equiparar el uso del vertedero de carbono superficial, las elites del mundo, particularmente las del Norte, han estado trabajando desde 1990, para convertirlo en un bien de propiedad privada. Poco a poco, comenzando con los mercados voluntarios de carbono y el Protocolo de Kyoto, los acuerdos internacionales del clima se han transformado en un instrumento legal para el proceso de mercantilización. La capacidad de absorción de carbono del aire, los océanos, los suelos y la vegetación del mundo está siendo puesta a la venta.

Costa Rica, con bastante experiencia técnica de financiación y manejo de plantaciones, ha estado a la vanguardia de este grupo de países y se ha estado preparando para recibir este tipo de proyectos. Esto, a pesar de que las plantaciones dañan los mismos servicios ambientales por los que se les paga, como la protección del suelo y el agua, o la conservación de la biodiversidad.

A pesar de su experiencia forestal, Costa Rica todavía no ha resuelto la definición de un área de Kioto, y la determinación de su potencial de fijación de carbono todavía presenta dificultades. Lo que es más importante, el desarrollo de estos mercados de carbono suscita serias cuestiones éticas. Según estimativos recientes del Panel Internacional sobre Cambio Climático (IPCC), es necesario generar reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero mucho mayores que las establecidas por el Protocolo de Kioto si queremos producir un impacto significativo sobre la mitigación del calentamiento global en los próximos 100 años. Además, el MDL no solo ha demostrado que su efectividad real en la reducción de las emisiones y del calentamiento global es incierta, sino que también ha resultado ser un mecanismo muy complejo cuya discusión ha retrasado las negociaciones del Protocolo de Kioto.

En el caso de Costa Rica, se ha estimado que estos mecanismos podrían generar suficientes fondos como para duplicar el área de plantaciones. Y lo que es peor, los modelos de reducción de carbono a través de proyectos del MDL han indicado que sólo son económicamente viables cuando los proyectos comprenden miles de hectáreas. Para Costa Rica, donde el tamaño promedio de cultivo por familia es de 60 hectáreas, esto implica una seria amenaza de concentración de la tierra en pocas manos.

certificados de servicios ambientales

EL FONAFIFO ha intentado promover el mercado nacional e internacional de servicios ambientales a través de un programa de Certificados de Servicios Ambientales (CSA). A través de los CSA se asegura la generación de servicios ambientales básicos para el funcionamiento de una empresa. Además, se puede usar un CSA para mejorar la imagen ambiental de una empresa, ya que ésta coopera con la protección de los bosques; y se puede deducir la inversión de los impuestos al ingreso bruto, presentándolo como costos operativos.

Por ejemplo, una compañía que quiera proteger un bosque ligado a una cuenca hídrica específica donde tiene intereses puede obtener un CSA. Un caso al respecto es el certificado otorgado a Meliá Conchal Hotel en el Pacífico Seco, una región del noreste del país, donde el agua ha sido una limitación para el desarrollo de grandes proyectos agrícolas y turísticos.

La compañía ha estado en conflicto con las comunidades locales, que ven la enorme demanda de agua del hotel como una amenaza a sus acuíferos. La estrategia de la empresa ha sido comprar tierras en las áreas de recarga del acuífero. Estas áreas son cedidas a programas PSA que serán financiados con los fondos provenientes de los CSA que ha comprado la compañía.

Este ejemplo ilustra cómo este nuevo mercado de servicios ambientales presenta el riesgo de transformar el sistema PSA en un instrumento que permita el control de los recursos vitales por parte de las grandes corporaciones. También implica el riesgo de cambiar el enfoque, las metas y los planes del sistema PSA, pasando de uno con énfasis en la conservación de los recursos naturales, a otro centrado exclusivamente en favorecer los intereses de aquellos que se benefician de esos recursos y tienen fondos suficientes para comprarlos.

cuarta parte los nuevos mercados: la venta de carbono

se regalan derechos de propiedad

El Protocolo de Kyoto representa actualmente el principal impulso para mercantilizar la capacidad del mundo de reciclar carbono y se divide en dos partes. Según la primera parte, las Naciones Unidas pueden distribuir derechos por un valor de miles de millones de dólares para el uso (en exceso) de los vertederos de carbono existentes, a las 38 naciones industrializadas que ya utilizan la mayoría de ellos, permitiéndoles vender las porciones que no utilizan. El Protocolo propone exigir a estos países que reduzcan sus emisiones para el período 2008-2012 en un promedio de alrededor del 5%, respecto de los niveles de 1990. Sin embargo, la existencia de varias lagunas legales implica que estas reducciones no se alcanzarán aún en el caso de que el Protocolo se implemente de la forma planeada. Por su parte, los gobiernos de la mayoría de las 38 naciones (aunque no el de los EE.UU.), distribuyen sin hacer mucho ruido, y en forma gratuita, una gran cantidad de sus derechos al espacio de vertedero entre cientos de compañías privadas de sectores de fuertes sectores industriales, como el sector energético, la siderurgia, el cemento, la industria química y la industria de la celulosa y el papel. En última instancia la distribución de concesiones de carbono constituye uno de los proyectos más grandes —sino el más grande— de creación y distribución regresiva de derechos de propiedad de la historia de la humanidad.

La segunda parte del Protocolo de Kyoto intenta abrir nuevos tipos de vertederos de carbono especulativos y más baratos, crear derechos de propiedad en estos vertederos y comercializarlos. El objetivo es ayudar a los países industrializados a evitar las restricciones o la democratización del uso de los vertederos existentes. En la medida en que las concesiones de carbono que se otorgan a las industrias del Norte, se vuelvan más escasas y más caras con el correr del tiempo, aquellos sectores que más los necesiten podrán comprar un suministro alternativo a precio rebajado en una nueva línea de producción. Entre los interesados en tratar de crear este mercado de nuevos vertederos se encuentran las compañías petroleras, las industrias pesadas, los centros de investigación nacionales, las universidades, los grupos de expertos (think tanks), los agentes de bolsa del carbono, las consultoras, las industrias forestales, las agencias de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, las empresas comercializadoras y los grupos de presión empresariales internacionales.

Con las tierras, los bosques, los suelos, el agua e incluso parte de los océanos se dará forma a un nuevo tipo de vertedero de carbono. Se puede por ejemplo, plantar o financiar monocultivos de eucaliptos de crecimiento rápido en tierras baratas en el sur, y venderse luego el carbono que “secuestran”. La idea es que estos árboles son “nuevos” y entonces compensan el carbono fósil, que se continúa bombeando de debajo de la tierra. Muchos de estos

conclusión

La orientación mercantilista que algunos sectores quieren darle al sistema PSA no sólo amenaza su integridad ética, ya que lo involucran en la comercialización de créditos de carbono y la consecuente amenaza de las plantaciones de monocultivo de árboles; sino que también amenaza con convertir al sistema PSA en una herramienta de control y un medio para que las corporaciones se apropien de los recursos naturales. Estas amenazas adquieren mayor dimensión aún con la propuesta de un tratado de libre comercio con los EE.UU. que facilitaría la apertura de los mercados de servicios ambientales.

Amigos de la Tierra Costa Rica continuará haciendo campaña para que el sistema PSA evolucione crecientemente hacia un sistema ambientalmente sano y socialmente justo; para que pueda independizarse de los viejos modelos de incentivos para las plantaciones de monocultivo; se pueda fortalecerse como herramienta en la lucha contra la pobreza rural y logre evitar la concentración de los recursos en manos de los grandes terratenientes; para que las organizaciones locales campesinas e indígenas consigan apoyo para superar los requisitos burocráticos; y para que pueda empezar a complementar los procesos de generación de capacidad e investigación participativa sobre los bosques y sus recursos. El sistema PSA no debe transformarse en antesala de la privatización de los recursos.

por más información:

Coecoceiba Amigos de la Tierra Costa Rica:

coecoat@sol.racsaco.cr



proyectos de “sumidero de carbono” ya están en marcha en países que van desde Brasil y Uganda hasta India y el Reino Unido.

Este proyecto de construcción de nuevos depósitos de carbono en la biosfera presenta, por supuesto, alguno que otro problema. En primer lugar, además de otorgar licencia para continuar con el uso excesivo y desigual del vertedero de carbono existente, este intento de construir nuevos vertederos biosféricos significa necesariamente apropiarse o utilizar las tierras, las aguas, los bosques y el aire de los pueblos y las comunidades. El resultado inevitable es la resistencia local, que ya se ha experimentado en muchos países, tanto en áreas ricas como pobres del mundo.

la ciencia de los vertederos

Una segunda dificultad de la propuesta de construir nuevos vertederos de carbono en la biosfera es la imposibilidad de verificar que funcionen. En realidad, los científicos tienen una absoluta falta de certeza sobre el destino del carbono vertido en la biosfera. Ni siquiera conocen por anticipado todos los factores relacionados con el carbono biótico que afectarán al clima, ni todas las formas no lineales o discontinuas en las que pueden interactuar, lo que hace del problema algo bastante más grave que una mera incertidumbre. Los caminos que sigue el carbono sobre la superficie no sólo son mucho menos estables sino también, y lo

que es más importante, mucho menos predecibles que los caminos que sigue el carbono fósil que se deja debajo de la tierra.

Más aún, sin importar cuánto más carbono biosférico adicional pueda cultivarse, nunca podría ser de un orden de magnitud ni remotamente comparable con lo que se requeriría para “fijar” las emisiones de los combustibles fósiles que quedan sin extraer. Como señala irónicamente Oliver Rackham, historiador de bosques de la Universidad de Cambridge, decir a las personas que planten árboles para ayudar al clima es como decirles “que tomen más agua para impedir que suba el nivel del mar”.

En suma, no se puede establecer una equivalencia climática verificable entre el carbono fósil y el carbono biótico, transformando en un sin sentido los reclamos del Protocolo de Kyoto y empresas como Future Forests. No se puede demostrar que plantar árboles sirva para neutralizar el carbono proveniente de la quema de combustibles fósiles.

lejos del mercado

Una parte importante de la formulación del Protocolo de Kyoto ha sido la inclinación pro-mercado de muchos de los actores que intentan convertir la capacidad de recirculación del carbono del mundo en una mercancía: las instituciones financieras internacionales, los consultores, abogados,

2 [brasil] plantar – privatizando el clima y la tierra para el lucro

El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) es una de las estrategias de reducción de carbono desarrolladas bajo el Protocolo de Kioto. Se supone que un proyecto MDL debe ser un proyecto de desarrollo sustentable que teóricamente reduzca o neutralice las emisiones globales de dióxido de carbono (CO₂). La institución que implemente un proyecto MDL gana, como parte del Protocolo, créditos de carbono que puede vender a las industrias o países contaminantes, generalmente con del Norte, que hayan aceptado asumir una reducción de sus emisiones. Entre los proyectos MDL se incluyen la extracción de metano de los rellenos sanitarios, represas hidroeléctricas, plantaciones de monocultivo de árboles y proyectos de sustitución de los combustibles



basados en el carbono -como el carbón o los derivados de petróleo- por fuentes alternativas.

Brasil ha sido identificado como un país con gran potencial para el desarrollo de proyectos MDL, y ya tiene varios proyectos de este tipo en curso. Un ejemplo de MDL en la región de Minas Gerais es un polémico proyecto auspiciado por el Fondo Prototipo de Carbono (PCF) del Banco Mundial. Una empresa llamada Plantar S.A. reclama créditos de carbono por no sustituir el carbón vegetal que utiliza en la producción de hierro colado por carbón de piedra. Además de este componente de “evitar la sustitución de un combustible”, el proyecto Plantar reclama también créditos por el carbono que será absorbido temporalmente por sus 23.000ha de plantaciones de monocultivo de eucalipto, al actuar como sumideros que absorben carbono de la atmósfera. El eucalipto se quema para producir el carbón que funde el hierro, pero actualmente solamente un 50% del carbón proviene de las plantaciones propias de Plantar y una gran cantidad del carbón restante se compra a fuentes locales. Esto ha incrementado la presión sobre los bosques nativos, donde debido a la demanda de la industria del hierro colado, la cosecha raramente es sustentable, y en muchos casos es ilegal.

El Banco Mundial ha decidido apoyar a Plantar, a pesar de no existir evidencia concluyente en los estudios científicos que demuestre la capacidad

efectiva de las plantaciones de monocultivo de árboles de secuestrar el CO₂. Según algunos estudios, estas plantaciones producen en realidad más emisiones de CO₂ de las que absorben, mientras que otros concluyen que sólo los ecosistemas de bosque establecidos, como los bosques húmedos, son capaces de absorber y almacenar carbono. Por otra parte, el carbono no está realmente almacenado en las plantaciones, y en el caso de Brasil, los eucaliptos se cosechan en ciclos de 7 años y al ser quemados liberan nuevamente el CO₂ a la atmósfera, un elemento que no se tiene en cuenta en proyectos como Plantar. Además, el laboreo de los suelos durante la plantación también libera CO₂. Para agravar el problema, a menudo las plantaciones desplazan bosques nativos, con la consiguiente perturbación de los ecosistemas locales y la degradación de la biodiversidad.

En el caso de Plantar, estaba en juego algo más que una empresa que intenta sacar provecho del cambio climático, plantando un desierto verde autodestructivo de árboles de eucalipto. En marzo de 2003, un grupo de más de 50 sindicatos, iglesias, representantes locales, académicos, organizaciones por los derechos a la tierra y de derechos humanos, entre otros, protestaron contra Plantar.

Plantar S.A. se instaló en Minas Gerais en los años sesenta y setenta durante la dictadura militar, aprovechando los atractivos incentivos impositivos

cuarta parte los nuevos mercados: la venta de carbono

comerciantes, tecnócratas y algunas grandes ONGs. Es muy improbable que varias de estas entidades técnicamente tan sofisticadas sean capaces de considerar siquiera enfoques más constructivos y democráticos, a menos que aumente la presión pública a la que están sometidas.

enfoques constructivos:

1. Alentar el debate y las negociaciones acerca de todas las distintas formas posibles de dividir equitativamente el espacio de desecho de carbono existente, incluso aquellas en las que no interviene propiedad privada comerciable.
2. Trabajar para que no se continúen explotando los combustibles fósiles que quedan, por ejemplo:
 - Apoyando e interconectando los movimientos existentes, dejando sus áreas locales fuera de los límites en los que se habilita la minería, la perforación, la producción de energía, etc.
 - Apoyando la eficiencia energética, las energías renovables, las tecnologías de combustibles no fósiles y la plantación responsable de árboles, pero sin que eso sea como contrapartida de continuar extrayendo combustibles fósiles.

- Estableciendo reglamentaciones, impuestos u otras medidas que no partan del supuesto de que las corporaciones ya son las propietarias de la capacidad de recirculación de carbono del mundo.

Esto requerirá asegurarse de que la política del clima –tal como la política de la biodiversidad, del agua, los genes, las ideas, los alimentos, la salud y la tierra - no esté confinada a espacios ocupados por políticos y expertos sino que salga a la luz. En un libro reciente sobre la propiedad intelectual, los investigadores australianos Peter Drahos y John Braithwaite señalan que:

“La presión política en relación a los derechos de propiedad debería ejercerse en condiciones de negociación democrática. La negociación democrática es crucial para la definición de los derechos de propiedad dadas las consecuencias de las normas de la propiedad para todos los individuos dentro de una sociedad. Los derechos de propiedad confieren autoridad sobre los recursos. Cuando se otorga autoridad a unos pocos sobre los recursos de los que dependen muchos, los pocos ganan poder sobre los objetivos de los muchos.”

por más información:

The Cornerhouse: www.thecornerhouse.org.uk

Sinks Watch: www.sinkswatch.org

Carbon Trade Watch: www.tni.org/ctw

CDM Watch: www.cdmwatch.org

de la época. La mayor parte de las tierras detentadas por Plantar y otras corporaciones que se trasladaron al área son tierras devolutas, es decir no han sido escrituradas y son propiedad del Estado. De acuerdo a la ley brasileña, las empresas no pueden adquirir este tipo de tierras, solo los campesinos. Aún así, con registros fraudulentos en las oficinas de registros y mediante contratos de “arriendo” con el Estado, Plantar logró adquirir cientos de miles de hectáreas de tierras devolutas.

Las comunidades locales nunca fueron consultadas, y los pueblos indígenas y las comunidades afrobrasileñas Quilombolas, al igual que miles de campesinos, perdieron sus tierras, específicamente el cerrado -la sabana nativa, enormemente rica en biodiversidad- que junto con la agricultura de subsistencia había satisfecho hasta entonces todas sus necesidades. Las plantaciones de ciclo corto que sustituyeron el medio ambiente natural no permitieron la sobrevivencia de las plantas, los animales y los pájaros nativos, afectando a los mercados locales de alimentos que dependían antes de los productos naturales del cerrado. La industria del hierro todavía utiliza entre un 15 y un 20 por ciento de la vegetación nativa del cerrado.

Plantar no solo taló grandes áreas de bosque, generando desempleo en ese proceso, sino que la industria de la fundición del hierro y las

plantaciones de eucalipto no compensaron la pérdida de puestos de trabajo. Sin embargo, al no tener otra elección, muchas personas se vieron forzadas a trabajar para estas industrias. La empresa no hace nada por sus ex-trabajadores, muchos de los cuales han resultado heridos o sufren problemas de salud. Incluso muchos han muerto como consecuencia de las muy malas condiciones de trabajo asociadas a la producción de carbón vegetal y al cultivo de eucalipto.

Los grupos locales luchan para recuperar las tierras y obtener una compensación de Plantar. Sin embargo, las amenazas y las tácticas de intimidación utilizadas por la empresa han hecho que muchos residentes locales no acepten ser entrevistados por temor a que se cite su nombre y no figuran en ningún lugar en los documentos de proyecto. En el marco del proyecto del Fondo Prototipo de Carbono, Plantar adquirirá 23.000 há de tierra adicionales que se sumarán a la gran extensión que ya tiene en Minas Gerais, profundizando la desigualdad existente en la distribución de la tierra. El movimiento local apeló al Fondo Prototipo de Carbono sin éxito, y ahora se está dirigiendo directamente a los inversores europeos, solicitando que no coloquen su dinero en este proyecto de carbono.

A pesar de la destrucción ecológica y el sufrimiento social que ha causado, Plantar ha logrado obtener un certificado de manejo forestal sustentable del

Consejo de Administración Forestal (FSC). Sin embargo, un informe de 2003 del Movimiento Mundial por los Bosques, documenta una gran cantidad de fallas y omisiones presentes en la evaluación de la certificación del FSC, de la entidad certificadora Scientific Certification Services (SCS) que emitió el certificado. En el caso de Plantar, parece ser que el FSC prefiere apoyar a las plantaciones industriales y no a las iniciativas ecológicas de las comunidades locales.

En resumen, el caso de Plantar y el apoyo del PCF del Banco Mundial constituyen un lúgubre recordatorio de la dirección hacia donde va el planeta. La privatización de las tierras para establecer plantaciones de monocultivo con el objetivo de reducir la contaminación causada por el norte industrial, no es un remedio para el cambio climático. De hecho, solo lo empeora, al tiempo que en el proceso excluye a los más pobres y destruye el resto de biodiversidad que nos queda.

por más información:

Carbon Trade Watch: www.carbontradewatch.org

CDM Watch: www.cdmwatch.org

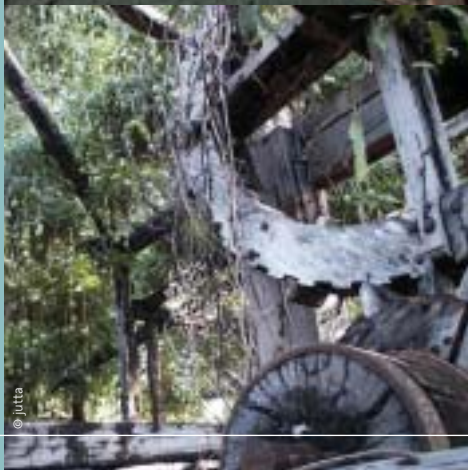
FASE (Federación de Organizaciones para la Asistencia Social y Educativa): www.fase.com.br

Movimiento Mundial por los Bosques (WRM):

www.wrm.org.uy

Movimiento de los Sin Tierra/Movimento

Sem Terra: www.mst.org.br



Como señala irónicamente Oliver Rackham, historiador de bosques de la Universidad de Cambridge, decir a las personas que planten árboles para ayudar al clima es como decirles **“que tomen más agua para impedir que suba el nivel del mar”**.

Los intelectuales australianos Peter Drahos y John Braithwaite señalan que:

“La presión política en relación a los derechos de propiedad debería ejercerse en condiciones de negociación democrática. La negociación democrática es crucial para la definición de los derechos de propiedad dadas las consecuencias de las normas de la propiedad para todos los individuos dentro de una sociedad. Los derechos de propiedad confieren autoridad sobre los recursos. Cuando se otorga autoridad a unos pocos sobre los recursos de los que dependen muchos, los pocos ganan poder sobre los objetivos de muchos.”

3

[paraguay] ¿la vida como comercio? mbaracayú: tierra de los aché



© miguel lovera



© miguel lovera

El pueblo Aché ha vivido en los bosques subtropicales de Paraguay durante siglos, sobreviviendo a violentas invasiones de sus territorios, incluso las de los Bandeirantes, los cazadores de esclavos de los siglos dieciocho y diecinueve, y los misioneros jesuitas y sus infames “reducciones”. Los Aché estaban perfectamente adaptados al bosque, y en tanto éste sobrevivió, también lo hicieron ellos.

Desde 1945, sin embargo, se han talado más de 8 millones de hectáreas de bosque subtropical húmedo en el este de Paraguay —el corazón del territorio ancestral de los Aché— para abrir camino a establecimientos ganaderos y a la agricultura mecanizada. Las comunidades Aché que sobrevivieron a 467 años de explotación y colonización fueron repentinamente devastadas. Hoy, la última de las comunidades Aché irónicamente está amenazada por una organización para la conservación de la naturaleza.

En 1988, una fábrica de madera laminada al borde de la bancarota cerró sus operaciones en el área de la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú, hogar de las últimas comunidades Aché. El principal acreedor de la compañía era la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial, que tomó la propiedad como

cuarta parte los nuevos mercados: la venta de carbono

sumideros de carbono, ¿destrucción del clima?

Los sumideros de carbono son un tema nuevo y confuso para muchas personas. El dióxido de carbono está en el aire, y el carbono se acumula en casi todos los objetos a nuestro alrededor, pero no lo podemos ver. Sin embargo, en charlas sobre el clima, los negociadores y científicos han reinventado el carbono como una nueva mercancía invisible, que puede comercializarse a través del establecimiento de proyectos de carbono tales como las plantaciones. En distintos países se están implementando cada vez más de estos proyectos a pesar de que el Protocolo de Kyoto aún no está vigente. A menos que se haga algo al respecto, enfrentaremos muchos más proyectos de plantaciones en el sur orientados a “secuestrar” carbono de la atmósfera.

Los negociadores en el Protocolo de Kyoto han creado algo llamado el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Este mecanismo permite que se considere a las plantaciones de árboles como “sumideros de carbono” que supuestamente absorben emisiones de CO₂, y acumulan carbono en la biomasa de madera, mientras al mismo tiempo liberan oxígeno. Lamentablemente el mecanismo en cuestión tiene poco que ver con el desarrollo limpio. Su peor aspecto es la promoción de las plantaciones de árboles a gran escala, y la inclusión explícita de las plantaciones de árboles genéticamente modificados.

garantía y luego la vendió a The Nature Conservancy (TNC), institución con sede en EE.UU. por US\$ 2 millones.

Para proteger este último tramo de bosque cerrado, la poderosa organización de conservación creó la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú. En el proceso, se deshizo de los Aché, colocándolos en asentamientos en los márgenes del bosque y dándoles sólo derechos limitados a la tierra. Allí, los Aché han estado expuestos a una evangelización agresiva, y viven como forasteros y mendigos junto a la tierra que los sostuvo durante siglos. Mientras tanto, las organizaciones de conservación de la naturaleza dueñas de la reserva se enriquecen a partir de subvenciones privadas y públicas.

el papel de las instituciones financieras internacionales

Desde el principio, la IFC del Banco Mundial trabajó en conjunto con TNC, relegando los derechos de los Aché y dando prioridad a la conservación de la tierra. La IFC devaluó el precio de la tierra de US\$ 7 millones a US\$ 2 millones, una cifra más accesible, muy probablemente como respuesta al lobby ejercido por TNC sobre los directores del Banco Mundial y a la intervención de altos funcionarios de los EE.UU. En 2002, el Fondo Mundial para el Medio

Ambiente (FMAM) otorgó US\$ 998.513 para la conservación de la biodiversidad a la Fundación Moisés Bertoni (FMB), la fundación privada que gestiona la reserva. El Banco Interamericano de Desarrollo contribuyó con alrededor de US\$ 580.000 para desarrollar un complejo agro-industrial en el área, diseñado para adquirir y procesar la producción regional a precios convenientes para los productores.

Líderes Aché, que prefieren permanecer anónimos, dicen que no saben exactamente cuánto dinero se ha recaudado, pero es obvio que las inversiones en los asentamientos Aché son, en el mejor de los casos, magras y ni siquiera una fracción de lo que se ha recaudado para el manejo del parque.

corporaciones: TNC gana puntos en los negocios de carbono – los aché pierden

Una de las principales amenazas a los bosques del mundo es el cambio climático. No sorprende entonces que dos de los mayores donantes corporativos a la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú sean egregios emisores de gases de efecto invernadero en busca de una mejora de imagen: British Petroleum (BP) y AES Corporation, un gigante estadounidense de la generación y distribución de energía eléctrica.

El “Programa para la conservación de Mbaracayú” de AES Corporation fue diseñado para neutralizar las emisiones de dióxido de carbono de su planta en Hawái, una planta de co-generación a carbón de 180-megawatts en la isla de Oahu. En el marco de los acuerdos climáticos, las corporaciones pueden neutralizar, o “secuestrar”, sus emisiones de carbono plantando árboles en otro lugar. Cuando TNC abordó a AES con su idea de “créditos de emisiones por bosques protegidos”, AES adhirió rápidamente a la idea, a pesar de que el tema de los derechos de los Aché seguía pendiente. El proyecto era demasiado atractivo como alternativa menos costosa que las normas sobre aire limpio de EE.UU., y además le permitía mejorar su imagen pública. La compañía plantó árboles frutales y árboles indígenas, de valor comercial, pagó US\$ 500.000 a la IFC en 1991 para ayudar a adquirir la reserva, y contribuyó además con US\$ 1,5 millones para el fondo fiduciario de la reserva.

Mientras tanto, el gigante petrolero BP contribuyó con un proyecto de investigación conjunta entre FMB y la Universidad de Cambridge sobre un sitio de cerrado de excepcional importancia global dentro de la reserva. Cuando se lo cuestionó por aceptar dinero de estas corporaciones, los oficiales de

Un ejemplo del MDL es la Fundación Bosques para la Absorción de Emisiones de Dióxido de Carbono (Forests Absorbing Carbon Dioxide - FACE), una iniciativa creada por un consorcio de empresas de electricidad holandesas. El objetivo de FACE es plantar árboles en Uganda y en los Andes ecuatorianos a fin de absorber el CO₂ que emiten en Países Bajos. Puede sonar como una idea inverosímil, pero ya se han plantado 50.000 hectáreas de árboles en estos dos países. Más aún, en sus folletos en papel satinado, el proyecto se presenta como muy exitoso: las comunidades indígenas están felices plantando pinos; reforestando su medio ambiente degradado e incluso han recibido la certificación del Consejo Forestal Mundial (FSC).

Sin embargo, las investigaciones realizadas sobre estas plantaciones en Ecuador, muestran algo muy diferente a lo que se ve en los folletos. No se trataba de un ambiente degradado sino de un ecosistema de páramo, una pradera a 3.000 metros sobre el nivel del mar, que nunca había sido un bosque. Una de las plantaciones fue un desastre total. Los pinos exóticos traídos de México eran muy débiles y de color amarillo. Crecían muy lentamente y los animales se habían comido la mayoría de los brotes. Además, la población local estaba muy descontenta con todo el proyecto.

Para empeorar la situación, la mitad de la plantación había sido quemada, resultando en la liberación de CO₂ de vuelta a la atmósfera. Esto no es un evento poco común en las plantaciones de árboles que son altamente vulnerables a los incendios. Y lo que es más importante, pone en evidencia lo volátil que es este tipo de almacenamiento del carbono, y la falta de confiabilidad del sistema.

Las plantaciones de monocultivo de árboles se apropian de grandes superficies de tierra y en el proceso a menudo son causa directa e indirecta de la deforestación. Agotan los recursos de agua y destruyen la biodiversidad. Incluso algunos estudios de casos muestran que las comunidades locales se empobrecen cuando las plantaciones replazan sus recursos naturales.

Es por tanto obvio, que las plantaciones de árboles de gran escala son una mala idea. A pesar de esto, los negociadores del clima están promoviendo como una “solución” para el cambio climático. De manera perversa, se describe comúnmente a los países que ya están implementando proyectos MDL como los “chicos buenos” en las negociaciones del clima, tal el caso de Países Bajos, España y Noruega. Y el hecho de que el Consejo Forestal Mundial esté certificando plantaciones sólo ha mejorado el estatus de solución “sustentable” de las plantaciones relacionadas con el MDL.

FMB respondieron que todas las contribuciones eran bienvenidas, incluso las provenientes de fuentes cuyas actividades cotidianas destruyen los bosques en todo el mundo. Los Aché tienen una perspectiva diferente: ven como se recolectan millones de dólares para ayudar a plantas y animales, pero muy poco para ayudarlos a ellos— el pueblo que ha vivido sustentablemente durante siglos en esa tierra a la que llaman hogar.

riqueza biológica y biopiratería

La Reserva Natural del Bosque Mbaracayú es un excelente ejemplo de un bosque primario mínimamente alterado que alberga aproximadamente el 48 por ciento de todas las especies de mamíferos y el 63 por ciento de todas las especies de aves que habitan en el este de Paraguay. El estado prístino de la reserva significa también que es campo fértil para la biopiratería, la explotación de las especies de potencial valor comercial. Actualmente, la FMB está extrayendo los conocimientos tradicionales de los Aché, empleando a hombres Aché en actividades de investigación. Se les pidió ayuda a los Aché para inventariar la fauna y la flora, pero ellos no tienen control sobre la información que comparten, ni sobre su manejo en los círculos académicos, de investigación y comerciales. Las organizaciones de pueblos indígenas y los

grupos de apoyo constantemente cuestionan la falta de equidad y justicia de estas prácticas, pero hasta el momento no han sido escuchados.

impactos ambientales

Teniendo en cuenta la desvergonzada destrucción de los bosques de Paraguay, la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú es considerada en general un esfuerzo de conservación exitoso. Irónicamente, sin embargo, su éxito es también su fracaso. Según la propia FMB, la reserva y su zona de amortiguación se están convirtiendo rápidamente en una “isla de árboles en un mar de deforestación”. Las propias investigaciones de la FMB muestran que la reserva no es suficiente para mantener la viabilidad de la población de especies fundamentales como el águila arpía. Y al tiempo que las áreas circundantes desaparecen, es posible que también los Aché deban convertirse en hiperdependientes de este último bosque remanente, usándolo no sólo para la caza y la recolección, sino para el pleno desarrollo de su estilo de vida tradicional. En otras palabras, crear islas de ambiente prístino no es una solución real para proteger el medio ambiente ni el estilo de vida tradicional de los pueblos indígenas. Sólo un manejo sustentable de los bosques, basado en la unidad que los Aché lograron con el bosque durante siglos, puede proteger a los bosques para las generaciones de hoy y de mañana.

Las inversiones en la reserva y en la infraestructura local - salud, escuelas, compras de tierras, etc.- han sobrepasado los US\$ 15 millones según los informes de la FMB. Desde un punto de vista convencional del desarrollo, las inversiones son bienvenidas. Pero no para los Aché. Los misioneros y los intereses de conservación han tomado decisiones por ellos, forzándolos a aceptar una vida sedentaria y marginal en el umbral de lo que les pertenece por derecho. Muchos Aché afirman que ahora están atrapados entre la expansión de la agricultura y la posición conservacionista estática: los Aché se ven obligados a abandonar ahora sus costumbres tradicionales, convertirse en agricultores, y aceptar el estilo de vida moderno sin opción de retorno.

por más información:

El estudio de caso completo será publicado en el libro “La vida como mercancía” editado por la Coalición Mundial por los Bosques y CENSAT Agua Viva / Amigos de la Tierra de Colombia.

Se puede descargar de: www.wrm.org.uy/GFC/



cuarta parte los nuevos mercados: la venta de carbono

A pesar de estos hechos, los gobiernos en el Sur continúan realizando acuerdos con sus contrapartes contaminantes del Norte. Recientemente, los gobiernos de Uruguay y España acordaron plantar 30.000 hectáreas de eucalipto por año para absorber las emisiones de las empresas españolas. En total se proyecta plantar unas 150.000 hectáreas de “sumideros de carbono” en Uruguay, sólo para cubrir las emisiones de compañías españolas.

Las comunidades y ONGs en todo el Sur, desde Ecuador, Uruguay y Brasil a Indonesia, Tailandia y Sudáfrica realizan campañas contra las plantaciones de monocultivo como “sumideros de carbono”. La idea de los sumideros de carbono es completamente irreal, y la pretensión de que las plantaciones de árboles pueden ser algún tipo de solución está siendo cuestionada. Se han propuesto alternativas más realistas al cambio climático, y jugar a la ruleta con un dado invisible no es una de ellas.

por más información:

Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales: www.wrm.org.uy

Amigos de la Tierra Uruguay: www.redes.org.uy

CDM Watch: www.cdmwatch.org

Sinkswatch: www.sinkswatch.org

quinta parte | los nuevos mercados: la venta de
nuestros genes y nuestro conocimiento



1 [Inglaterra] bioprospección

Se ha informado que English Nature, la agencia de gobierno británica responsable de la conservación de la vida silvestre, está negociando con instituciones de investigación, la realización de evaluaciones sobre la biodiversidad de los Sitios de Interés Científico Especial (SSSIs) de Inglaterra, en busca de determinar su potencial comercial. El trascendido ha dado lugar a algunas preocupaciones en el Reino Unido, en particular, debido a que el gobierno no tiene una posición oficial en la temática de bioprospección, o un marco legal para abordarla.

La bioprospección, y el ahora generalizado fenómeno de biopiratería, está causando preocupaciones considerables, especialmente en los países ricos en biodiversidad de los trópicos. En general, los acuerdos realizados entre las comunidades con conocimiento tradicional de la biodiversidad y las corporaciones multinacionales que han explotado tal conocimiento a través del régimen de patentes y otros sistemas de derechos de propiedad intelectual, han probado ser sencillamente injustos. Existen diversas consideraciones éticas relacionadas con las patentes aplicadas a formas de vida, al tiempo que está claro que los beneficios que reporta la explotación comercial del material genético a la conservación, han sido groseramente sobrevaluados. Teniendo en cuenta estas consideraciones, es necesario hacer una aclaración sobre el marco legal y ético que se utilizará para la realización del relevamiento propuesto de la biodiversidad inglesa y el uso de la información obtenida.

Muchos otros países ya han establecido o están estableciendo marcos legales a nivel nacional para gobernar el acceso y la distribución de los beneficios en relación a la explotación comercial de la biodiversidad. Es necesario acordar un marco de estas características antes de que se inicie un proceso de bioprospección sancionado oficialmente. Cabe destacar que si bien el Reino Unido no tiene un enfoque claro al respecto, países mucho más pobres ya están tomando medidas para asegurar la existencia efectiva de un marco legal aplicable.

Amigos de la Tierra de Inglaterra cree que el proceso de bioprospección presenta muchos aspectos de principios que son polémicos, al igual que distintas cuestiones de carácter legal. La posición oficial sobre estas cuestiones de principio y de legalidad debe ser aclarada mediante un proceso democrático antes de avanzar hacia la explotación comercial de la biodiversidad natural del país. Se debe generar un debate nacional, seguido por el establecimiento de un marco ético y legal adecuado para la bioprospección en Inglaterra.

por más Información:

Amigos de la Tierra, Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte: www.foe.org.uk

quinta parte los nuevos mercados: la venta de nuestros genes y nuestro conocimiento

introducción

El Banco Mundial y otros promotores del Consenso de Washington fueron la principal fuerza detrás de la promoción del mercantilismo en los acuerdos ambientales multilaterales (AAMs) como el Convenio sobre Diversidad Biológica y la Convención Marco sobre Cambio Climático. Durante las negociaciones del Convenio sobre Diversidad Biológica en 1991-1992, este mercantilismo ya había sido codificado mediante la inclusión del tercer objetivo del Convenio—al parecer uno relativamente idealista—que pretende asegurar “la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos a esos recursos y tecnologías, y a través de una financiación apropiada”.

Sin embargo, la motivación principal para incluir este objetivo y las disposiciones pertinentes sobre acceso y participación en los beneficios previstas en el Convenio, fue la sugerencia de que la única manera de salvar la biodiversidad era reclamar la devolución de los millones de dólares que han ganado los mejoradores comerciales de plantas y las compañías biotecnológicas en base a las semillas y otra información genética recolectada en los países en desarrollo. Se pensó que una distribución equitativa en los beneficios por parte del sector biotecnológico, en ese entonces en rápido crecimiento, llevaría un impresionante flujo financiero hacia la conservación de la biodiversidad.

2 el grupo de países megadiversos

En 2001, se creó el Grupo de países Megadiversos, integrado por Bolivia, Brasil, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Filipinas, India, Indonesia, Kenya, Malasia, México, Perú, Sudáfrica y Venezuela. Estos países representan el 75% de la diversidad biológica y el 45% de la diversidad cultural del mundo y actúan como organismo asesor y consultor para promover los intereses comunes relacionados con la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad en el ámbito de las Naciones Unidas y otros foros.

En la práctica, esto significa el desarrollo de actividades comunes para alcanzar mejores resultados en las negociaciones relacionadas con la biodiversidad, como en el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB). Este grupo de países acepta el patentamiento de su biodiversidad a cambio de una declaración y reconocimiento del origen de los recursos y a condición del pago de un porcentaje de las regalías derivadas de las aplicaciones industriales de los materiales patentados.



3 el nuevo colón: craig venter conquista los genes de américa latina

El 9 de Julio de 2004, el gobierno de Bermuda expresó públicamente su preocupación en torno a la utilización comercial de sus recursos genéticos mediante dos proyectos de bioprospección dirigidos por Diversa y por el Dr. Craig Venter. Mientras que Diversa recolectaba una proteína obtenida de un coral que se comercializa como herramienta biotecnológica, Venter se concentraba en encontrar organismos en el Mar de Sargasso, que pudieran transformar el dióxido de carbono en una fuente limpia de energía. Su proyecto ha recibido 9 millones de dólares del Departamento de Energía de los EE.UU. y ha recolectado y decodificado más de 1.800 nuevas especies.

Operando desde el yate de 90 pies de Venter, el Sorcerer II, los investigadores recolectaron muestras en aguas territoriales de México, Costa Rica, Panamá, Ecuador (Islas Galápagos), Chile y la Polinesia Francesa, y en el caso de Ecuador y Costa Rica, sin la correspondiente autorización de las autoridades nacionales.

Craig Venter es conocido por su papel en el mapeo de genes humanos en el marco del proyecto del Genoma Humano, donde generó una gran polémica al intentar patentar en Estados Unidos miles de secuencias genéticas del cerebro humano. La Oficina de Patentes de los EE.UU. finalmente denegó la patente.

Sin embargo, la presunción de que uno de los sectores industriales más concentrados e inescrupulosos, el sector biotecnológico, se convertiría en una fuerza promotora de la conservación de la biodiversidad, ha demostrado ser muy ingenua. Durante las propias negociaciones, la industria garantizaba que la mayor parte de la información genética, que ya estaba almacenada a salvo en los bancos de genes del Norte, fuera exceptuada de las disposiciones de distribución de beneficios. Doce años después, no existen todavía disposiciones legalmente vinculantes que aseguren que los beneficios se distribuyan en forma equitativa con los países de los que proviene la información genética. Pero aún si se acordaran tales disposiciones ¿Cuál sería el resultado? ¿Quién obtendría el dinero? La mayor parte de la biodiversidad está de facto bajo el manejo de las comunidades locales: solo si sus prácticas son sustentables se protegerá la biodiversidad. Por tanto, se cuentan reconfortantes cuentos de hadas en los que las comunidades locales son recompensadas a partir de las ganancias de las compañías biotecnológicas. Pero la realidad es que la mayor parte de la información genética se toma simplemente sin ningún permiso. Sólo en casos excepcionales las comunidades han recibido algún tipo de recompensa, y estos casos se deben a la ingerencia del gobierno y/o a estrategias inteligentes de marketing ecologista de las compañías involucradas. Sujeta a las fuerzas "reales" del mercado, la mayor parte de la información genética demuestra estar literalmente en la naturaleza. Se la

puede encontrar en muchos lugares, de manera que en caso de que decidan pagar por ella, los compradores siempre pueden recurrir al vendedor más barato. Y como muchos de los vendedores son comunidades remotas, como los poblados indígenas, cualquier precio sirve.

Y también hay que considerar los aspectos morales. Buena parte de la información es sagrada, ya que mucha de la información genética que despierta mayor interés consiste en medicinas tradicionales que están estrechamente vinculadas a los rituales religiosos. Y qué cínico resulta que los Sen en Sudáfrica -un pueblo indígena que vive en el riguroso desierto de Kalahari enfrentando habitualmente periodos de desnutrición y hambre- estén ayudando a las empresas de biotecnología a desarrollar, por ejemplo, una droga contra la obesidad.

La privatización y la mercantilización de los elementos de la biodiversidad amenaza con destruir los medios de sustento y la cultura de las comunidades locales, especialmente de los campesinos, los pueblos indígenas y las mujeres. La riqueza genética de la Tierra, no debería ser comercializada en ninguna de sus formas y manifestaciones biológicas. No debería ser declarada información genética negociable ni propiedad intelectual, por parte de ningún gobierno, emprendimiento económico, o cualquier otra institución o individuo.

4 algunas patentes vigentes

Ejemplos de plantas patentadas que son importantes en la vida cotidiana de numerosas comunidades y Pueblos Indígenas, en sus dietas y prácticas espirituales y de cuidado de la salud

- **Ayahuasca:** planta sagrada utilizada por los pueblos indígenas en la Amazonia para la realización de rituales espirituales y fines medicinales, patentada por Loren Miller.
- **Maca:** planta utilizada en la dieta y la farmacología en Perú, patentada por Pure World Botanicals Inc y Biotics Research Corp.
- **Quinoa:** grano que se come en América Latina con alto valor nutricional, patentado por dos investigadores de la Universidad de Colorado.
- **Tepezcohuite:** utilizado por el pueblo Maya contra quemaduras por sus propiedades anti-inflamatorias, patentado por el Dr. León Roque.

- **Rupunine:** utilizada en medicina tradicional para el tratamiento de enfermedades cardíacas y neurológicas y para el control de tumores y de la fertilidad, patentada por Gorinsky.
- **Arroz Basmati:** el arroz más conocido de India, desarrollado y cuidado durante miles de años por las comunidades locales, patentado por una compañía estadounidense, Rice Tec.
- **Trigo Nap Hal:** variedad de trigo utilizada para la preparación de pan Chapati, un producto básico del norte de India, patentado por Monsanto.
- **Atta** harina integral de trigo utilizada en India, patentada por Conagra.



quinta parte los nuevos mercados: la venta de nuestros genes y nuestro conocimiento

privatización de la vida

A los dueños de las patentes se les permite restringir el uso de las nuevas invenciones durante décadas, para puedan promover sus invenciones sin competencia, y así poder recibir la recompensa por su inversión inicial. Sin embargo, patentar la vida – un fenómeno relativamente nuevo – habilita ahora a hacerse de la propiedad y la subsiguiente comercialización del conocimiento “descubierto” sobre la biodiversidad. Esta práctica ignora convenientemente el hecho de que tales conocimientos pertenecen por derecho a los Pueblos Indígenas y a las comunidades locales, y que posiblemente no ha ocurrido ninguna invención. Por cierto, a este tipo de patentes se las denomina comúnmente “biopiratería”.

El acuerdo TRIPS (sobre “Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio”) de la OMC vio la luz en 1995. Como resultado del mismo, actualmente es obligatorio para todos los gobiernos miembros –incluso para los que habían prohibido anteriormente patentar los recursos biológicos – permitir que se patenten microorganismos y procesos microbiológicos, y enmendar su legislación nacional si es necesario. También se les exige que introduzcan la protección a la propiedad intelectual de las variedades de plantas.

Hoy existen muchas patentes sobre la vida, cubriendo tanto los organismos genéticamente modificados como los naturales, e incluyendo genes vegetales, animales y humanos. Hacia noviembre de 2000, por ejemplo, ya se habían otorgado o estaban pendientes patentes sobre más de medio millón de genes y secuencias genéticas parciales de organismos vivos. No obstante, las patentes sobre la vida siguen siendo enormemente controvertidas, tanto a causa de sus implicancias para los seres vivos como por sus impactos sobre las comunidades de los países empobrecidos.

Las empresas e instituciones que se están apropiando del conocimiento de las comunidades locales sobre la biodiversidad y sus usos (con o sin su permiso) están creando efectivamente derechos monopólicos lucrativos. Esto frecuentemente genera una situación irónica de “transferencia inversa de tecnología”, en la que los más pobres transfieren su conocimiento al mundo rico y desarrollado, a menudo por poca o sin ninguna compensación.

Existen múltiples beneficios para quienes detentan la propiedad intelectual, entre los cuales los más obvios son las ganancias generadas a partir de la comercialización exitosa de los productos patentados. Es quizás menos obvio el hecho de que un número selecto de corporaciones globales están incrementando sostenidamente su control sobre los principales cultivos alimentarios del mundo, incluyendo el maíz, las papas, la soja y el

5 UPOV- Los derechos de los obtentores de variedades vegetales

La apropiación de la biodiversidad también se encuentra facilitada a través de los llamados derechos de la obtención de variedades vegetales establecidos en la Convención Internacional denominada Unión Internacional para la Protección de la Obtención de Nuevas Variedades Vegetales (UPOV 91). Allí se niega a los agricultores el derecho a guardar sus propias semillas, al tiempo que se desconocen los derechos inherentes adquiridos por los agricultores en su especial relación con la biodiversidad. Entre otros impactos negativos, la convención habilita que las empresas tomen el control del marco institucional nacional para la obtención de nuevas variedades vegetales. La UPOV y sus patentes “blandas” constituyen un mecanismo que otorga derechos privados monopólicos sobre las formas de vida, y por tanto, permite la privatización de nuestra riqueza genética que es un bien público.



trigo. En efecto, las técnicas para decodificar e identificar los mejores genes de las plantas se están acelerando, y la industria de la biotecnología corre una carrera para mapear los genomas de los principales cultivos alimentarios del mundo, con vistas a patentar los resultados.

En el más absoluto contraste, los impactos sobre quienes ceden sus derechos de propiedad intelectual son casi totalmente negativos. El conocimiento tradicional puede haber sido afanosamente elaborado por varias generaciones a lo largo de los siglos, pero es posible que las personas y las comunidades se encuentren –de un plumazo– imposibilitados de usar ese conocimiento en su propio beneficio o como medio para generar ingresos. Incluso puede pasar que se vean obligados a comprar de vuelta el conocimiento, a precios monopólicos enormemente inflados. Los agricultores, por ejemplo, pueden verse obligados a comprar semillas a las grandes corporaciones agrícolas en lugar de guardarlas e intercambiarlas entre ellos. En resumen, el conocimiento tradicional sobre la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad está siendo erosionado.

Amigos de la Tierra cree que el Acuerdo TRIPS no debe restringir el derecho de los gobiernos y los pueblos a promover y proteger los intereses públicos esenciales en relación a la salud, el medio ambiente y el desarrollo. Las patentes sobre la vida y el robo del conocimiento tradicional deben ser prohibidos.



6 [canadá] la corte falla a favor de las patentes sobre la vida

En 1997, el agricultor canadiense Percy Schmeiser fue acusado de robar la semilla de colza transgénica de Monsanto. En 1998 el caso fue llevado a juicio y adquirió importancia internacional, ya que era potencialmente la primera demanda, a este nivel, en torno a los derechos de propiedad sobre genes. Lamentablemente, el caso en sí transcurrió en el marco de argumentos más básicos, referidos a si Schmeiser había utilizado las semillas en forma ilegal, y no sobre si la compañía tenía efectivamente derecho a patentar y a ser propietaria de elementos constitutivos de vida. Schmeiser

alegó que la planta de colza patentada por Monsanto se encontró en su tierra porque habían volado semillas de uno de los camiones de Monsanto, pero Monsanto ganó el juicio por un escaso margen (6-5). La corte declaró que las cuestiones más trascendentes, como por ejemplo, quién es propietario de las semillas, correspondían al ámbito político y debían dejarse para el parlamento. En general, el fallo fue decepcionante, pero demostró la existencia de una fuerte opinión disidente en el seno de la corte. Las organizaciones locales continúan ejerciendo presión sobre el sector político del país en relación a este tema.

por más Información:

Council of Canadians: www.canadians.org



quinta parte los nuevos mercados: la venta de nuestros genes y nuestro conocimiento

biopiratería y sus impactos sobre la diversidad biológica y cultural

Los modernos contratos de bioprospección pueden calificarse de muchas formas, pero las calificaciones de de “justos” y “equitativos” no se encuentran por cierto entre ellas.

Miguel Lovera, Coordinador, Coalición Mundial por los Bosques, Cobertura Forestal, edición No. 11, febrero 2004

Tener el control de sus recursos naturales es un derecho colectivo de las comunidades locales y los Pueblos Indígenas. Es también un elemento importante de la sustentabilidad. Sin embargo, la biopiratería les está robando ese derecho, al facilitar la privatización de la biodiversidad a través de las patentes.

El conocimiento tradicional de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales está profundamente arraigado en la naturaleza que los rodea. Durante milenios ellos han utilizado y mejorado plantas con distintos propósitos. Patentar estas plantas significa socavar los derechos de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales a sus propios conocimientos y a los beneficios que éstos les pueden aportar.

bioprospección & biopiratería

La bioprospección tiene como objetivo declarado aunar la comercialización y la conservación de la biodiversidad. Los países genéticamente ricos con capacidad de investigación científica limitada, toman muestras y elaboran inventarios biológicos de sus recursos. En cambio, los países con una gran capacidad de investigación y desarrollo científico, en general las naciones industrializadas, se encargan de identificar las propiedades de los seres muestreados, gracias a su tecnología superior. Las propiedades de los seres muestreados son

7 [costa rica] biopiratería y el caso de INBio

En octubre de 1989, se creó el Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio), una asociación privada sin fines de lucro, que desarrolla actividades de interés público. Su objetivo era realizar un inventario de la biodiversidad nacional en el ámbito de una sola entidad y poner esta información al servicio del país.

En 1991, en el marco de un negocio de un millón de dólares, INBio comenzó la venta de muestras biológicas al gigante farmacéutico Merck. Los términos del contrato se mantuvieron en secreto, a pesar de que INBio estaba negociando bienes públicos. Por otra parte, el contrato no hacía mención a algunos temas importantes para el país, tales como el número de muestras incluidas, el porcentaje de las regalías que eventualmente corresponderían al país, la propiedad de las patentes, los impactos de las patentes sobre las comunidades locales y la posible erosión de la soberanía.

La relación entre INBio y el sector corporativo continuó con un contrato con Diversa Corporation en 1995, que fuera renovado en 1998. Presentado en una conferencia de prensa del CDB como un ejemplo de acceso a los recursos genéticos y de distribución de los beneficios generados por los mismos, el contrato permitió a ambos socios la

recolección de muestras de microorganismos en manglares, arrecifes de coral, suelos de bosques y otras ubicaciones. Diversa buscaba enzimas y proteínas estructurales que pudieran usarse en biotecnología, la protección de cultivos y productos farmacéuticos. Bajo los términos del contrato, todas las secuencias de ADN que INBio aislara para Diversa serían propiedad de Diversa. A cambio, Diversa pagaría el salario de al menos un miembro del personal de INBio, permitiéndole utilizar tecnología de su propiedad para la recolección de muestras. Por otra parte, INBio recibiría un canon por propiedad intelectual en caso de que Diversa otorgara licencias sobre un producto basado en las muestras obtenidas por INBio.

Debe cuestionarse si éste fue un negocio justo. El CDB no dijo nada sobre si habrá mecanismos de control para determinar la existencia de productos derivados de las muestras de biodiversidad que fueron objeto de apropiación. Tampoco cuestionó el significado que podría tener la privatización de la biodiversidad para los países pobres, en términos de su cultura, su visión del mundo, o al menos en términos de su capacidad de investigación.

Desde 1999, INBio ha recibido apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo para iniciar cursos de capacitación para que las compañías puedan desarrollar la investigación y venta de productos farmacéuticos obtenidos de hierbas, cortezas

de árboles y otros materiales vegetales naturales. El resultado final ha sido el desarrollo de compañías para la venta de cápsulas en el mercado doméstico para el tratamiento de enfermedades benignas como dolor de estómago y acné. Las cápsulas básicamente contienen lo que los curanderos tradicionales han ofrecido a sus pacientes durante miles de años. Con fondos de una institución financiera internacional, INBio utiliza las plantas nativas y el conocimiento tradicional para promover su apropiación en manos de una serie de compañías.

Estos ejemplos exitosos de biopiratería están llenos de promesas incumplidas y promueven un modelo de desarrollo que es muy ajeno a las necesidades de la sociedad y a la protección del medio ambiente. INBio es una institución privada que facilita la privatización de la biodiversidad de Costa Rica, y a la que se publicita como un modelo de empresa exitosa en el campo de la venta de biodiversidad a corporaciones a nivel nacional e internacional. INBio ha pretendido mostrar sus ganancias como un beneficio para el país, a pesar de que la contribución monetaria no ha sido tan lucrativa como era de esperar, de acuerdo a lo establecido cuando firmaron el contrato con Merck. En resumen, vendieron a bajo precio la invaluable biodiversidad de Costa Rica.

generalmente patentadas o reclamadas como propiedad intelectual bajo distintos regímenes. Como consecuencia de ello, se privatizan los recursos genéticos en beneficio de los países con gran capacidad de investigación científica. Esta actividad se llama biopiratería, ya que facilita y promueve una apropiación ilegítima aunque legal de la biodiversidad.

Las industrias farmacéuticas y agrícolas se han apropiado de los recursos genéticos de la biodiversidad y el conocimiento tradicional asociado mediante el uso de patentes para desarrollar una importante proporción de sus productos. Entre 1950 y 1980, el 25% de los medicamentos en EE.UU. se basaban en productos provenientes de las plantas, y actualmente el 48% de los medicamentos en ensayo clínico son derivados de las plantas. La importancia económica de estos recursos ha llevado a realizar negociaciones intergubernamentales en todos los foros internacionales posibles, para establecer marcos legales nacionales e internacionales para facilitar el acceso a estos recursos, y así legalizar la biopiratería.

biopiratería legalizada

El uso comercial de los recursos genéticos, e inadvertidamente la biopiratería, están siendo promovidos dentro de los foros de las Naciones Unidas, incluido el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), y el

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Por otra parte, la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) trabajan activamente en el desarrollo y la aplicación de legislación y políticas de patentes.

Supuestamente con el objetivo de combatir la biopiratería, el CDB promueve negociaciones sobre Acceso y Distribución de Beneficios (ABS) desde 1999. Estas negociaciones se han basado en el objetivo de la CBD de asegurar “la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como mediante una financiación apropiada”.

La realidad ha mostrado que si bien los países que teóricamente tienen soberanía sobre sus recursos han facilitado ampliamente el acceso, la participación justa y equitativa en los beneficios no es más que un concepto atractivo, una suerte de espejismo o truco, que no ha encontrado ni la voluntad política para su implementación, ni la decisión política de exigir su cumplimiento. Es así que la distribución equitativa de beneficios ha sido escasa o nula en todo el mundo, mientras la biopiratería ha ido en aumento.

8

los países en desarrollo en defensa de sus recursos genéticos

Filipinas es un país que hace mucho tiempo que trabaja activamente en estos temas. En 1995, se introdujo la legislación sobre acceso a los recursos genéticos, que establece, entre otros puntos, que se debe obtener el consentimiento previo e informado de las comunidades locales antes de extraer muestras de biodiversidad en sus territorios. Los países andinos han aprobado marcos legales que establecen el derecho de las comunidades locales de otorgar su autorización previa informada antes de que se pueda explotar su conocimiento tradicional de la biodiversidad. Los países africanos han desarrollado un Modelo Africano de Ley para la Protección de los Derechos de las Comunidades Locales, Agricultores y Obtentores y para la Regularización del Acceso a los Recursos Biológicos. Estos países han acordado en forma colectiva que no se otorgarían patentes sobre recursos genéticos hallados en sus territorios, incluyendo los procesos biológicos y el conocimiento tradicional relacionado.

por más Información:

Legal Rights and Natural Resources Center:

www.lrcksk.org



quinta parte los nuevos mercados: la venta de nuestros genes y nuestro conocimiento

negociaciones comerciales

Las discusiones sobre la biopiratería también tienen lugar en la OMC, específicamente en relación con el acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS). De manera similar, la discusión está presente en el debate sobre las negociaciones de los servicios dentro del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS-GATS), ya que la biopiratería es considerada un servicio. Como tal, se le deben otorgar las condiciones necesarias para un desarrollo sin barreras, incluso aunque esto resulte en la violación de los derechos de los pueblos indígenas o las comunidades locales, o facilite la privatización de la biodiversidad, y abarque de esta forma privilegios que están más allá de las decisiones soberanas de los estados-nación.

Además, los EE.UU. han estado negociando distintos tratados bilaterales de comercio e inversión, ya que los foros multilaterales no han sido completamente satisfactorios para sus objetivos comerciales. Por ejemplo, en un tratado con Chile, han presionado por lo que se conoce como cláusulas TRIPS-plus en relación con la propiedad intelectual. Las propuestas van más allá de lo que el TRIPS permite actualmente y afianzan aún más los derechos de propiedad corporativos, por ejemplo, permitiendo patentar plantas y animales – transformando en regla lo que son excepciones en el TRIPS.

conclusión

La biopiratería es el resultado de una visión del mundo que cree que sólo podemos conservar lo que es de nuestra propiedad. Es la razón última de la industria de millones de dólares que se ha beneficiado con los recursos naturales y el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Éstos, por el contrario, son quienes han posibilitado la conservación, el uso y la mejora de la diversidad biológica sobre la base de prácticas colectivas que deben ser compartidas para poder sobrevivir.

Los foros que emergieron como un espacio para la protección de la biodiversidad, hoy no son muy diferentes de los que promueven la imposición del modelo comercial basado en el mercado. Por el contrario, la biopiratería crece, mientras se debilitan las prácticas sustentables desarrolladas por los pueblos indígenas y las comunidades locales, al igual que sus derechos consuetudinarios.

por más información:

COECOeiba Amigos de la Tierra, Costa Rica email:

coecoat@sol.racsac.cr

sexta parte | conclusión: los pobres y la privatización



© Iees / iStock

1 [togo] el agua potable

“el suministro de agua no es asunto del sector privado, debe ser asegurado por los servicios públicos, descentralizados...”

Jean-Luc Touly – un empleado de Viviendi que creó la Asociación por un Contrato Mundial del Agua (ACME).

De los 4,5 millones de habitantes de Togo, el 70% sufre terriblemente de falta de agua. Muchos factores contribuyen a eso, entre ellos los niveles cada vez más bajos de cubierta boscosa y un sistema de ríos pobre –prácticamente todos los ríos dejan de fluir durante la estación seca. Las fuentes de agua más comunes en las áreas rurales son los cursos de agua y los pozos, mientras que las fuentes públicas, las conexiones domésticas y los pozos suministran agua a las poblaciones urbanas.

En las zonas rurales, la mayoría de las personas tiene que recorrer distancias muy grandes para encontrar agua, afectando su economía y su salud. Las mujeres y los niños, quienes normalmente están a cargo de la recolección del agua, pasan largas horas esperando su turno para conseguir unos pocos litros. Por esto, los niños llegan tarde a la escuela y las mujeres tienen menos tiempo para otras actividades comerciales y domésticas. Las más de las veces el agua recolectada no es apta para consumo humano, pero en general la gente no toma las medidas necesarias para hacerla potable.

En las áreas urbanas, la población tiene acceso a sistemas de distribución del agua. Hasta 2003, los servicios de agua estaban a cargo de la Autoridad Nacional de Aguas de Togo (Régie Nationale des Eaux du Togo -RNET). Después de 2003, la responsabilidad del servicio fue transferida a la Sociedad Togolesa de Aguas (Société Togolaise des Eaux -TDE) y el rol del estado –que anteriormente aseguraba el suministro- disminuyó considerablemente. La comercialización de los servicios de agua togoleses llevó, en última instancia, a un incremento del precio del agua para los consumidores. Por otra parte, la privatización no parece haber mejorado las cifras de la población conectada al sistema de distribución de agua.

Amigos de la Tierra Togo pretende promover la participación de la población en el desarrollo, por el bien de las generaciones presentes y futuras, brindando apoyo a la gestión sustentable de los recursos hídricos.

*por más información:
Amigos de la Tierra Togo:
adt-togo@cafe.tg*

sexta parte conclusión: los pobres y la privatización

la exclusión de los pobres

De todos los impactos ambientales y sociales negativos de la privatización, el más profundo es la marginalización de los consumidores pobres. Cuando la prestación de servicios públicos, como el suministro de agua y el cuidado ambiental, se colocan en manos del sector privado, la consecuencia habitual es un giro hacia políticas orientadas a la búsqueda de ganancias.

Los consumidores pobres no son nada interesantes para las industrias con afán de lucro. Por esta razón, las compañías de agua tienden a priorizar el suministro en los barrios urbanos ricos, y a ignorar las necesidades –en general mucho más urgentes- de agua potable segura de las comunidades rurales remotas y otros sectores pobres de la sociedad.

Los más pobres también pierden cuando el lado productivo de un mercado ambiental se pone en manos del sector privado. Si bien es generalmente reconocido que las comunidades de pequeña escala son los productoras más eficientes de la reforestación diversificada y de la restauración del paisaje, probado por casos exitosos como el del Movimiento Cinturón Verde, también se reconoce que son ellas quienes pierden con el mercado en rápido crecimiento de los proyectos de secuestro de carbono. Los complicados y caros procesos de acceso al financiamiento disponible bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio y otros mecanismos del Protocolo de Kyoto, hacen virtualmente imposible



Importantes organizaciones nacionales e internacionales que defienden la conservación de los ecosistemas y supuestamente promueven el desarrollo económico de las comunidades locales, han promovido la idea de que la esperanza económica para los países pobres radica en sus recursos biológicos y culturales. Basándose en la investigación que apunta a cuantificar, determinar y sistematizar la existencia de los recursos biológicos, estas organizaciones presionan a los gobiernos y comunidades locales planteándoles la necesidad de implementar estrategias comerciales y diseñar en forma urgente políticas que faciliten el acceso a estos recursos y su explotación. Cualquier consideración sobre las consecuencias de transformar la vida en una mercancía que puede comprarse y venderse ha sido dejada de lado. La cuestión principal ha sido cuál es el mejor sistema bio-extractivo.

A pesar de no haber sido aún claramente identificado y señalado como un riesgo serio para el equilibrio de las complicadas fuerzas que generan la vida, el creciente fenómeno de mercantilización de la naturaleza debe ser

analizado y discutido. El tema de los mercados verdes en Colombia y otros países debe, por tanto, ser revisado y evaluado desde una perspectiva crítica, correctiva y propositiva.

Sobre la base de estudios de viabilidad comercial e investigación sobre la diversidad biológica, organizaciones tales como el Instituto Alexander von Humboldt y la Bolsa Amazonía Colombiana, han realizado esfuerzos para demostrar que dado el potencial de los recursos biológicos en Colombia, es esencial desarrollar una política clara en torno al acceso a los mismos, abarcando una fuerte estrategia de mercados verdes. Esta iniciativa para la mercantilización de las formas de vida tiene dos puntas; por un lado promueve la legislación para regular el acceso y la extracción de los recursos biológicos, y por otro estimula la explotación y extracción de esos recursos.

El concepto de los mercados verdes promueve la idea de que los productos manufacturados en una forma especial (productos orgánicos, productos comunitarios, productos tradicionales o indígenas) pueden y deberían comercializarse y venderse a un precio diferencial. No hay duda de que estos productos, que tienen mérito extra en su forma de producción, deben ser

la financiación de iniciativas de pequeña escala. El puñado de ejemplos bien conocidos, como el programa de servicios ambientales de Costa Rica y el proyecto Scolel Té en México, han sido el resultado de una intensa participación del sector público, en la modalidad de generoso donante y a través del control gubernamental.

Se puede argumentar que los campesinos sin tierra son el sector rural más influyente en lo que concierne al mantenimiento de la cobertura boscosa y otros recursos biológicos, ya que a menudo son forzados a producir en las áreas más remotas, y por tanto las más naturales. Sin embargo, al no tener títulos de tierras legalmente reconocidos, no tienen oportunidad de recibir ninguna recompensa por sus esfuerzos de conservación en el marco de programas de servicios ambientales como los del comercio de carbono, la venta de recursos genéticos o la compensación financiera por el manejo de las cuencas. Por el contrario, estos programas tienden a marginarlos aún más, ya que ofrecen apoyos preferenciales por estos servicios a través de incentivos que los productores a gran escala -como las empresas de plantaciones de monocultivos de árboles y las enormes organizaciones de conservación extranjeras- sí están en condiciones de reclamar. No es casualidad que el primer gran proyecto de secuestro de carbono en Brasil favoreciera a una enorme empresa de plantaciones de monocultivo como Plantar, y no a millones de agricultores sin tierra que han estado, en los hechos,

manejando y restaurando millones de hectáreas de preciados ecosistemas en Brasil.

las mujeres, principales víctimas de la privatización

Las mujeres conforman la abrumadora mayoría de los pobres – en términos monetarios- del mundo. También conforman la mayor parte de los agricultores sin tierra del mundo. Como las mujeres tienden a dedicar una parte significativa de su tiempo a actividades económicas como las tareas del hogar, el cuidado de los hijos y el mantenimiento de las huertas, que no tienen retorno en términos financieros, son marginadas por definición cuando la economía monetaria empieza a dominar los sectores que son cruciales para su sustento. Esto es precisamente lo que sucede cuando se privatizan necesidades básicas como el agua y la biodiversidad. Las mujeres son las principales víctimas cuando el suministro de agua pasa a manos privadas, ya que tienen menos dinero para pagar por el agua potable y por tanto, no son un grupo objetivo interesante para las compañías de aguas con fines de lucro. Esto genera una espiral de agravamiento de la situación, ya que las mujeres son las responsables del suministro del agua en muchos hogares. El agua que solía ser gratuita, y potable.

especialmente valorados. Sin embargo, intentar traducir en términos monetarios la compleja red de valores contenidos en los productos agrícolas que son cultivados y procesados en forma orgánica y comunitaria, o en artesanías realizadas por las comunidades indígenas, representa un objetivo que ofende la complejidad de la vida.

Pretender medir en términos monetarios, valores tales como la solidaridad, el respeto, el afecto o hermandad, que son parte de algunos de estos productos es destruir su calidad en forma inmediata, y los simplifica en forma tal que pierden todo su valor real. El dinero puede ser una forma útil y adecuada de medir cuantitativamente el valor de algunos productos, pero no puede medir otros valores subyacentes, tales como las condiciones únicas de producción, empapadas de un profundo significado social y cultural. Intentar hacerlo representa un atentado contra la riqueza de la vida.

Un ejemplo de la promoción de los mercados verdes es el llamado conjunto para proyectos realizado en Abril de 2003 por el gobierno colombiano a través de su Plan Colombia, y la Fundación Chemonics Colombia (parte de Chemonics Internacional), contratista de USAID. La idea es proporcionar apoyo financiero para

iniciativas que involucran el desarrollo alternativo de productos agrícolas y que cumplen con los requisitos del Programa de Desarrollo Alternativo del Plan Colombia de la Conserjería de Programas Especiales de la Presidencia. Estos requisitos toman en consideración el potencial económico y la sustentabilidad de los productos resultantes. El llamado recibió 175 solicitudes de financiación de proyectos, todos los cuales estaban relacionados a productos tales como el cacao, el caucho, productos forestales y el café. Algunos de estos proyectos, especialmente aquellos relacionados con la palma aceitera y el cacao, están siendo implementados con apoyo del gobierno en algunas regiones de Colombia, particularmente en el departamento de Norte de Santander, ignorando los impactos que esto puede tener en la biodiversidad de los territorios.

En la otra cara de la moneda hay una iniciativa explícita para la formulación de una política nacional para regular el acceso a un amplio rango de recursos biológicos. De acuerdo con el Instituto Alexander von Humboldt y la Bolsa Amazonía Colombiana, estos recursos pueden variar desde semillas del bosque y frutas de la Amazonia, mariposas y peces ornamentales, hasta productos de cocina endémicos y paisajes únicos que pueden ser explotados por medio del ecoturismo. Los proyectos que desarrolla el

Instituto Alexander Von Humboldt en conjunto con las Corporaciones Autónomas Regionales (CARs) y otros organismos de gobierno tales como el Sistema Nacional Ambiental (SINA) ilustran claramente este enfoque. Están dirigidos a la promoción, coordinación y realización de investigaciones sobre el impacto de las políticas que promueven el acceso a la diversidad natural y cultural, y enfatizan la necesidad de generar una legislación marco sobre el conocimiento y los usos de la biodiversidad.

El objetivo real de estas iniciativas debe ser cuestionado en la medida en que ya se están promoviendo políticas extractivas, al tiempo que se llevan a cabo negociaciones a nivel internacional para decidir sobre el acceso a los recursos biológicos y la distribución de beneficios correspondiente. En particular, surgen cuestionamientos cuando al parecer no se aplica ningún criterio de justicia ni tiene lugar ninguna distribución equitativa de los beneficios derivados del comercio actual de recursos biológicos en Colombia y otros países de América Latina.

Por el contrario, estas iniciativas, en vez de defender la necesidad de regular el acceso a los recursos biológicos y genéticos a través de un acuerdo internacional amplio y riguroso, legitiman los intentos de las compañías

sexta parte conclusión: los pobres y la privatización

Tener que pagar precios altos por el agua golpea muy particularmente a las mujeres, agregándole una nueva carga financiera a sus ya relativamente pequeños ingresos. Además, aumenta su dependencia de los maridos y compañeros, que tienden a ser los principales generadores de ingreso monetario de la familia. En la mayoría de las sociedades, los hombres todavía están liberados de las tareas del hogar y el cuidado de los niños, lo que significa que pueden dedicar todo su tiempo al trabajo remunerado. Aún en la agricultura, donde, además de mantener las huertas familiares, los árboles frutales y otras fuentes de nutrientes esenciales para el consumo doméstico, las mujeres raramente están involucradas en la producción de cultivos comerciales, y sólo muy excepcionalmente tienen control sobre el ingreso monetario generado por tales cultivos.

Las plantaciones a gran escala, favorecidas por los programas de comercio de carbono, también marginan a las mujeres. En muchas sociedades, las mujeres son responsables de la recolección de la leña, pero raramente tiene el dinero para pagarla. Cuando el mercado comercial del carbono se hace cargo del suministro de energía, sea mediante plantaciones a gran escala u otros servicios comerciales de energía, las mujeres corren nuevamente el riesgo de ser marginadas, volviéndose aún más dependientes del ingreso de sus maridos.

Además, es claro que las plantaciones a gran escala no son bosques, porque los primeros no proveen ninguno de los productos no madereros que los segundos sí proporcionan, tales como alimento, combustible, material para la producción artesanal, recursos para la construcción de hogares, instrumentos domésticos y medicinas. Asimismo agotan los recursos de agua de las ellas mismas dependen. En las comunidades que dependen del bosque son precisamente estos productos no madereros los esenciales para su supervivencia, siendo las mujeres las responsables de su recolección. Es por ello que la propagación de las plantaciones de árboles a gran escala, generalmente tienen el efecto recargar más a las mujeres, en tanto ellas están forzadas a gastar más horas y recorrer distancias más largas para la obtención de productos no madereros sin los cuales sus familias no pueden sobrevivir.

La privatización del conocimiento tradicional y los recursos genéticos (como las plantas medicinales) a través de la biopiratería, también tiene un gran impacto sobre las mujeres. Si bien son mujeres las principales custodias del conocimiento tradicional y las plantas medicinales en la comunidad, y quienes suministran los servicios de cuidado de la salud gratuitamente a sus familias y a otros miembros de la comunidad, la biopiratería tiende a ser un asunto de hombres. Son los hombres quienes normalmente tienen el poder de decisión formal en la

privadas y las corporaciones multinacionales de negociar en forma bilateral el acceso a lo que históricamente ha pertenecido a las comunidades indígenas y locales. Esto incluye cantidades inagotables de especies de plantas y animales, recursos hídricos y el conocimiento tradicional.

Según pueblos nativos y campesinos de todo el mundo, en las negociaciones sobre los recursos tales como la tierra, el agua, y las especies vivientes no están representados sus intereses, sino los de los nuevos “gangsters de la vida”.

Es evidente que la complejidad de las relaciones bioculturales que sustentan las creencias y prácticas sociales en las que viven muchas de las comunidades Afro-Colombianas, indígenas y campesinas, son necesariamente simplificadas, cuando aquellos que comercializan con la vida tratan de reducirlas a mercancías que pueden negociarse en términos monetarios. La privatización de la vida pone en riesgo los derechos legales de cada comunidad a su propia cultura, su diversidad y su derecho a determinar sus propias condiciones de vida en forma autónoma y soberana. Las negociaciones llevadas a cabo por los “gangsters de la vida” a través de organismos tales como las Naciones Unidas o la OMC están amenazando la producción de artesanías, la cría de animales y

los alimentos que las comunidades han desarrollado tradicionalmente con el objetivo único de promover las relaciones de solidaridad entre los pueblos y las naciones. En contraste, la producción que se desarrolla con el objetivo exclusivo de la acumulación monetaria resulta en la destrucción de los mercados locales y el debilitamiento de las prácticas sociales y culturales que sustentan la vida de las comunidades.

Lo que debería reclamarse, en cambio, es que se otorgue autonomía a las unidades agrícolas campesinas, familiares o indígenas, para que identifiquen y prioricen sus propias necesidades y problemas, en forma tal que puedan elaborar soluciones acordes con los potenciales de las comunidades locales y sus derechos. De la misma manera, resulta de importancia clave que la comercialización de los productos sea realizada directamente por las comunidades productoras, utilizando estrategias y métodos acordes con sus tradiciones, para que puedan comerciar no sólo a través del dinero sino también a través del trueque, préstamos, intercambios y por medio de la producción y el consumo colectivos.

Este tipo de estrategia, resultante de la investigación colectiva y las prácticas participativas, puede fortalecer y mejorar

valores que no son mesurables ni pueden reducirse a términos monetarios. Se trata de la democratización de las condiciones para la producción y la comercialización, que se logra a través de la planificación comunitaria participativa. También incluye el fortalecimiento de la capacidad de organización de los campesinos y grupos étnicos a través del empoderamiento de la comunidad, así como la generación de lazos comunitarios y redes sociales que refuercen la solidaridad y las relaciones de respeto mutuo. Finalmente, crea la posibilidad de tomar decisiones en forma autónoma sobre el futuro del ambiente biofísico, cómo deben distribuirse los excedentes y a qué propósitos se destinarán sus espacios físicos.

por más información:

*CENSAT Agua Viva / Amigos de la Tierra
Colombia: www.censat.org*



comunidad, y los títulos de las tierras. Por tanto, si una compañía farmacéutica que quiere comprar conocimientos y medicamentos tradicionales se presenta ante la comunidad, normalmente son los hombres los que deciden si quieren vender tal conocimiento, y también los que reciben la recompensa monetaria. Por otra parte, las patentes que posteriormente se apliquen a estos medicamentos tradicionales pueden imposibilitar a las mujeres el uso de su propio conocimiento, aún cuando esté en juego la salud de sus propios hijos.

Las mujeres también constituyen la mayoría de los sin tierra del mundo. Aún cuando una familia tiene un título formal para una porción de tierra, el tenedor del título es frecuentemente el hombre, quedando la mujer excluida de los programas de sumideros de carbono y de gestión del agua que están siendo desarrollados actualmente por los grupos de expertos neoliberales. No es casualidad que el Movimiento Cinturón Verde sea un movimiento de mujeres: son las mujeres quienes han sido la fuerza dominante detrás de la conservación de los bosques, los montes, los humedales y otros preciados ecosistemas que les suministran los recursos no monetarios que necesitan para cuidar sus familias. Estos recursos van desde las necesidades básicas como el agua potable, las plantas comestibles, la miel, los medicamentos tradicionales, la madera y el forraje, hasta los ornamentos como las flores para las festividades culturales.

El incremento del poder monetario de las mujeres a través de su participación en la economía formal, a partir de mayores oportunidades laborales, hará que los impactos de la privatización de los servicios básicos sean menos duros. Ésta es la receta que prescriben las IFIs. Pero, ¿realmente queremos privatizar completamente el cuidado de los niños y los mayores, el cuidado de los hogares y los jardines, los eventos culturales y otras tantas actividades informales que ocupan el tiempo de las mujeres? El principal problema con el enfoque “eficiencista” que aboga por incorporar a las mujeres en el mercado laboral asalariado es que se ignoran las otras responsabilidades socialmente asignadas a las mujeres y por grave omisión considera al tiempo de las mujeres como infinitamente elástico.

El valor que tiene la naturaleza para nosotros, no puede medirse en términos monetarios. Esto es reconocido por muchos y está incluido en las recomendaciones de políticas del Convenio sobre Diversidad Biológica. No obstante, hay muy poca conciencia todavía de que esto también significa que la naturaleza estará en desventaja en una economía monetaria. Privatizar la naturaleza es más que marginar a los pobres monetarios. Significa marginar nuestros valores.

3 [rusia – siberia] comunismo y capitalismo: diferentes caminos hacia el mismo lugar

En ningún lugar del mundo es más punzante el tema de la privatización que en la antigua Unión Soviética, un país donde no hace mucho tiempo la sola idea del control privado de los recursos naturales era absurda y antiética para la ideología comunista que gobernaba el país.



Las instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial y el FMI, han promovido muy activamente la privatización de los bosques y la agricultura de Rusia, incitando a las corporaciones a apoderarse de la propiedad nacional y alentando al gobierno a avanzar en los programas de privatización. Su razonamiento, al igual que el del gobierno, es el de la clásica economía de goteo. Si bien puede haber algunos aspectos positivos en la privatización de recursos que eran mal gestionados por el Estado, la evidencia abrumadora demuestra que lo que se ha producido es un desastre para el medio ambiente y para la vida de los rusos. El aumento de los precios de los recursos naturales que ahora controlan las empresas motivadas por el lucro hoy ya es una carga pesada para la mayoría de los rusos, y la tensión social va en aumento.

En la región de Krasnoyarsk, en Siberia Central, los precios realmente se han disparado como resultado del proceso de creciente privatización y concentración de la propiedad de los recursos naturales, tierras agrícolas y de la producción de bienes comerciables. Antes de la privatización, esta región de clima muy riguroso era poco habitada. La tierra podía sostener a la población, y el costo de proteger

al medio ambiente era mínimo. Hoy, con el desarrollo de la industria, aumenta la gente que llega a esta zona y la calidad de vida ya ha caído. Crecen la tala ilegal y la caza furtiva. La población de alces ha caído al 10 por ciento de su capacidad reproductiva. El mismo destino han corrido el ciervo rojo siberiano, el corzo, el esturión, y en menor medida el salmón. Los camiones circulan sobre la cubierta de pradera para evitar los caminos fangosos. Las compañías y los trabajadores arrojan los desechos en las márgenes de los ríos y a los bordes de las carreteras y caminos.

En Rusia, la privatización, y el capitalismo en su conjunto, han hecho más poderosos económicamente a quienes ya eran ricos, un resultado irónicamente similar al que se vivía bajo el régimen comunista.

por más información:

Amigos de los Bosques Siberianos

El estudio de caso completo será publicado en el libro "La vida como mercancía" editado por la Coalición Global de Bosques y CENSAT Agua Viva / Amigos de la Tierra de Colombia. Se puede descargar de: www.wrm.org.uy/GFC/

sexta parte conclusión: los pobres y la privatización

¿las metas de desarrollo del milenio están en venta?

En el cambio de milenio, en el año 2000, Jefes de Estado de todo el mundo se reunieron en las Naciones Unidas para fijarse un ambicioso conjunto de objetivos: las Metas del Desarrollo del Milenio (MDM). Se comprometieron, más fuerte y concretamente de lo que jamás lo habían hecho, a combatir la pobreza, el hambre, la enfermedad, la discriminación de la mujer, y la degradación ambiental. Se establecieron objetivos concretos, entre otros: erradicar la pobreza y el hambre, promover la equidad de género y la emancipación de la mujer, combatir las enfermedades más importantes y la mortalidad infantil, y asegurar la sustentabilidad ambiental. Se fijaron metas específicas para cada uno de estos objetivos, incluyendo la integración de los principios del desarrollo sustentable a las políticas y programas de los países y revertir la pérdida de recursos ambientales; y también la meta de reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas que no tienen acceso sustentable al agua potable.

Sin embargo, como concluían los primeros informes del Proyecto de Desarrollo del Milenio que reseñan los avances logrados en la consecución de estas metas, la falta de recursos financieros es uno de los mayores obstáculos para la implementación de los objetivos. El dinero que fluye hacia la guerra de Irak es más que suficiente para alcanzar todas las MDM, pero por desgracia, asegurar el acceso al petróleo ha resultado ser una prioridad más alta para los gobiernos más ricos del mundo que combatir la pobreza, el hambre y el SIDA.

Pero las IFIs y otros promotores del Consenso de Washington encontraron una forma de salir del dilema: privatizar las Metas de Desarrollo del Milenio. La nueva receta se llama asociaciones público-privadas. A través de la participación del sector privado, incluyendo las grandes ONGs, en la implementación de las Metas de Desarrollo del Milenio, se puede acceder a nuevas fuentes de financiamiento privado. Se ha recomendado y a menudo se ha obligado a los gobiernos a involucrar al sector privado en la prestación de una amplia gama de servicios básicos, que van desde el agua, la educación y el cuidado de la salud, hasta la protección ambiental. Como resultado, las corporaciones juegan un papel cada vez mayor en la implementación de las MDM: en algunos países, por ejemplo, la abrumadora mayoría de los centros de cuidado de la salud reproductiva están en manos privadas.

La privatización de la gobernanza ambiental, en general, también encierra el riesgo de que las corporaciones que aportan generosas contribuciones financieras para la implementación de los compromisos ambientales, comiencen a fijar las políticas ambientales. Un ejemplo alarmante son las nuevas asociaciones entre los acuerdos ambientales multilaterales y la industria. Bayer, por ejemplo, una multinacional con intereses en biotecnología, contribuye generosamente a la implementación de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. Ni qué decir que los cultivos transgénicos considerados como una de las soluciones a la desertificación que promueve dicha asociación. Los comerciantes de carbono como la fundación FACE están involucrados como "asesores independientes" de las políticas de secuestro del

4

[Letonia] planta de pulpa de papel finlandesa amenaza el bosque

El bosque Ozolsala de Letonia, de 1500 há, con árboles de más de cien años de edad, está siendo amenazado por los planes de la compañía finlandesa de celulosa, Metsaliitto de construir una nueva gigantesca planta de pulpa de papel en el área. Si bien el bosque es propiedad pública, prácticamente se lo está privatizando, para dárselo como regalo a Baltic Pulp, empresa en la cual Metsaliitto es el principal propietario.

La Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) ha incluido al bosque en una red de corredores ecológicos de Europa, porque cumple una importante función en el mantenimiento de la diversidad ambiental y biológica en la región.

Con una capacidad de producción de 600.000 toneladas anuales, la planta de pulpa de papel causará daños a los corredores ecológicos interconectados y a los sitios naturales vecinos; con la contaminación del aire, la construcción de nuevas carreteras y edificios, el aumento del tránsito y el uso de productos químicos afectará también la biodiversidad nativa singular del área. En particular, preocupa la posibilidad de que el dióxido de cloro que se usa para procesar la pulpa sea liberado en el río Daugava, principal río de Letonia, que atraviesa áreas naturales

adyacentes a la nueva planta. El Daugava sustenta a pequeñas y medianas pesquerías, y su cuenca es fuente de agua potable para un gran número de personas. Áreas ambientalmente sensibles como los pantanos cercanos, están amenazadas, y el aumento de los contaminantes ácidos en el aire cambiará la estructura de los bosques, dañando las coníferas e incrementando la defoliación. Uno de los sitios afectados será Kalsnava, una plantación de pinos con semillas con gran variabilidad genética que ha hecho famosa a Letonia, y un arboreto compuesto por 2.382 variedades de árboles. Además, la planta proyectada representa también una amenaza para muchas especies de plantas protegidas, incluidos diferentes tipos de musgos y hongos, y especies animales como las cigüeñas negras, las perdices negras, las águilas, las grullas y las codornices.

Amigos de la Tierra Letonia (VAK) lleva adelante una campaña contra la planta de pulpa de papel y pretende que se le asigne al bosque el estatus de Natura 2000 y que se lo incorpore a la red de áreas ecológicas importantes de la Comisión Europea.

por más información:
Vides aizsardzības klubs- VAK, Amigos de la Tierra Letonia. : www.vak.lv



carbono de la Convención sobre el Cambio Climático. The Nature Conservancy actúa como “asesor independiente” sobre políticas de áreas protegidas en el Convenio sobre Diversidad Biológica. Pero mucho más fascinante resulta todavía el documento de política conjunto, rebotante de hermosas fotos de pájaros coloridos y árboles en áreas protegidas, elaborado por la Secretaría del Convenio sobre Diversidad Biológica en asociación con la multinacional petrolera Shell Inc. No es necesario decir que este documento de política incluye la admirable recomendación de que debería ser posible la exploración petrolera de las áreas protegidas, mientras se haga bajo ciertas condiciones.

Hasta el Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas (PNUMA), una de las instituciones más pobres de todas las de las Naciones Unidas, crecientemente extiende sus manos al sector privado —esto es, para recibir contribuciones financieras. Ahora que los gobiernos se rehúsan a pagar las contribuciones obligatorias normales a esta agencia de las Naciones Unidas, el funcionamiento del PNUMA depende de manera alarmante de las contribuciones voluntarias, incluidas las de sus “socios” del comercio y la industria.

Pero el control corporativo y la privatización de las políticas públicas tienen un precio. Esta publicación describe con detalles cómo la privatización del agua y la biodiversidad ha producido graves impactos sociales y ambientales negativos en distintos países. Son los pobres —en términos monetarios— en especial las mujeres, quienes pagan el precio más alto; algo que hace a este enfoque de hecho incompatible con el primer y el tercer objetivo del milenio.

Es tiempo de que los gobiernos dejen de vender sus responsabilidades. En países como Indonesia, hay una tendencia de los gobiernos a seguir retirándose de sectores como la educación y el cuidado de la salud, ahora que las asociaciones público-privadas se están haciendo cargo de la implementación de las Metas del Desarrollo del Milenio en esos mismos campos. Pero son los gobiernos quienes se comprometieron al logro de esas metas. Son los gobiernos quienes se comprometieron, en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, a dedicar el 20 por ciento de sus presupuestos a los servicios sociales, como la educación y la salud. Son los gobiernos quienes se comprometieron a la implementación de la Agenda 21, el libro de más de 600 páginas con las recomendaciones surgidas de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, y del Plan de Acción de Johannesburgo surgido de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de 2002. Son los gobiernos quienes se comprometieron al casi clásico objetivo de un 0,7 por ciento del PBI para la Asistencia Oficial para el Desarrollo. Son los gobiernos quienes deberían asegurar la MDM 7 de garantizar la sustentabilidad ambiental. Y son los gobiernos quienes deberían cumplir las MDM de erradicar la extrema pobreza y el hambre.

Si hay una cosa que aprendimos de la guerra de Irak, es que no falta dinero. No hay necesidad de vender la naturaleza y otros bienes comunes, alcanza con que los gobiernos —por una vez— simplemente cumplan sus promesas.

por más información: Metas del Desarrollo del Milenio:
www.un.org/millenniumgoals/

